

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Consejo Superior De La Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia
Dirección Seccional de Administración de Justicia
Oficina Judicial

DATOS PARA RADICACION DEL PROCESO

JURISDICCIÓN:

GRUPO/CLASE DE PROCESO: CORPORACIÓN: ESPECIALIDAD:

No. CUADERNOS: FOLIOS CORRESPONDIENTES:

DEMANDANTE(S)

JOHANA	CÁRDENAS	HURTADO	1.028.186.553
Nombre(s)	1° Apellido	2° Apellido	No. CC o Nit
CARRERA 46C #56I-15 LLANO VERDE	SANTIAGO DE CALI	3163056214	
Dirección Notificación	Ciudad	Teléfono(s)	

APODERADO

JONATHAN	VELÁSQUEZ	SEPÚLVEDA	1.116.238.813
Nombre(s)	1° Apellido	2° Apellido	No. CC o Nit
CRA 12 BIS # 8-45 BARRIO ROSALES – CIRCUNVALAR PEREIRA	3211812	199.083	
Dirección Notificación	Teléfono(s)	Tarjeta Profe.	

DEMANDADO(S)

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	DEFENSORÍA DEL PUEBLO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC Y OTROS
Nombre(s)	1° Apellido	2° Apellido	No. CC o NIT
	BOGOTÁ		
Dirección Notificación	Ciudad	Teléfono(s)	

APODERADO

Nombre(s)	1° Apellido	2° Apellido	Tarjeta Profe.
Dirección Notificación	Ciudad	Teléfono(s)	

ANEXOS: DEMANDA, PODERES, PRUEBAS Y ANEXOS



Señor(a).
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. (Reparto)
Bogotá – D.C.
E. S. D.

Asunto	Demanda
Medio de control	Reparación directa
Demandantes	Johana Cárdenas Hurtado Y Otros.
Demandadas	La Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional – PONAL NIT: 900.968.320-1 <u>Notificaciones:</u> Notificaciones.prejudiciales@mindefensa.gov.co Notificaciones.Cali@mindefensa.gov.co deval.notificacion@policia.gov.co ¹
	Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca NIT: 890399011-3 <u>Notificaciones:</u> notificacionesjudiciales@cali.gov.co ²
	Defensoría del Pueblo. NIT: 800186061-1 <u>Notificaciones judiciales</u> juridica@defensoria.gov.co ³
	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC NIT: 800215546-5 <u>Notificaciones judiciales</u> notificaciones@inpec.gov.co ⁴
	La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial NIT: 900.152.368–1 <u>Notificaciones judiciales</u> deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
Otros	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDAJE NIT: 900507741-1 <u>Notificaciones judiciales</u> procesosnacionales@defensajuridica.gov.co ⁵

¹ La información que antecede fue extraída el día 16 de febrero de 2022 de las siguientes páginas electrónicas institucionales:
<https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido?NavigationTarget=navurl://9e7a56c80ff567568fd6ad9864770872>
<https://www.policia.gov.co/normatividad-juridica/notificaciones-electronicas>
² Tomado el día 16 de febrero de 2022 de la página electrónica institucional
https://www.cali.gov.co/juridica/publicaciones/47110/las_notificaciones_judiciales_se_realizan_va_electrnica/
³ Tomado el día 16 de febrero de 2022 de la página electrónica institucional
<https://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/6595>
⁴ Tomado el día 29 de julio de 2022 de la página electrónica institucional <https://www.inpec.gov.co/contactenos>
⁵ Tomado el día 28 de febrero de 2022 de la página electrónica institucional
<https://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Home.aspx>



El suscrito, Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 199.083, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de representante legal y profesional del derecho inscrito en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad **LEGALGROUP** Especialistas en Derecho S.A.S. identificada con NIT 900.998.405-7, persona jurídica apoderada judicial⁶ de las personas relacionadas en el acápite de demandantes, según poderes debidamente conferidos que adjunto, y en uso de las facultades allí otorgadas, a través del presente escrito, formulo demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contenido en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011- en contra de **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional – PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.**

Lo anterior, con ocasión del daño antijurídico irrogado a los demandantes como consecuencia del homicidio del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** quien en vida se identificaba con el NUIP 1.028.186.826, el cual se perpetró el día once (11) agosto del año dos mil veinte (2020), sin que mediaran circunstancias para ello por parte del adolescente. En consecuencia, se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de indemnización a los demandantes, por los perjuicios materiales e inmateriales causados y en general, por aquellos que el Consejo de Estado ha reconocido para el grupo familiar de la víctima directa, según los hechos, fundamentos y pretensiones que pasan a exponerse:

1. Individualización de las partes y su legitimación en la causa

Con relación a la legitimación en la causa, el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en sus providencias ha manifestado lo siguiente:

“[...] La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y el material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. (...) A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial⁷. (negrilla y subraya fuera de texto original)

⁶ Artículo 75 C.G.P.: “Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso.”

⁷ Véase la sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A. Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 50001-23-31-000-2012-00159-01(59503)



Conforme lo anterior, para el presente asunto, los extremos activos y pasivos se integran de la siguiente manera:

1.1. Demandantes Legitimación en la causa por activa

Nombre	Doc.	Identificación	Calidad frente a la víctima
JOHANA CÁRDENAS HURTADO	C.C.	1.028.186.553	Madre
BRAYAN CÁRDENAS HURTADO	NUIP	1.143.982.959	Hermano
YARI CAMILA CARDENAS HURTADO	NUIP	1.234.200.314	Hermana
MAROLYN TATIANA CÁRDENAS HURTADO	T.I.	1.143.982.991	Hermana
VICTOR ALFONSO CÁRDENAS HURTADO	NUIP	1.143.955.020	Hermano
DARWIN CAMILO CÁRDENAS HURTADO	NUIP	1.143.994.704	Hermano
FRANCIA ELENA CÁRDENAS HURTADO	C.C.	1.028.186.868	Tía
YEISON CÁRDENAS HURTADO	C.C.	1.028.186.554	Tío
LUIS EDUARDO CÁRDENAS HURTADO	C.C.	1.028.186.864	Tío
MARTHA HURTADO CÁRDENAS	C.C.	31.610.052	Abuela

Al proceso concurre el grupo familiar de la víctima directa **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, quienes se encuentran legitimados en la causa por activa, de conformidad con las siguientes especificaciones:

- 1.1.1. Con el registro civil de defunción⁸ del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** se acredita que éste falleció el día once (11) agosto del año dos mil veinte (2020).
- 1.1.2. La señora Johana Cárdenas Hurtado acude a esta instancia invocando su calidad de madre del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**; situación que se acredita con la copia simple del Registro Civil de Nacimiento del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**⁹.
- 1.1.3. Víctor Alfonso, Darwin Camilo, Brayan, Marolyn Tatiana, y Yari Camila Cárdenas Hurtado acuden a esta instancia invocando su calidad de hermanos del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**; situación que se acredita con la copia simple de sus respectivos Registros Civiles de Nacimiento, así como también con el Registro Civil de Nacimiento de **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**¹⁰.
- 1.1.4. Los señores Yeison, Luis Eduardo y Francia Elena Cárdenas Hurtado acuden a esta instancia invocando su calidad de tíos del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**; situación que se acredita con la copia simple de sus respectivos Registros Civiles de Nacimiento, así como también con el Registro Civil de Nacimiento de la señora Johana Cárdenas Hurtado¹¹.

⁸ Ver prueba 2. – Registros civil de defunción
⁹ Ver prueba 2. – Registros civiles de nacimiento.
¹⁰ Ver prueba 2. – Registros civiles de nacimiento.
¹¹ Ver prueba 2. – Registros civiles de nacimiento.



1.1.5. La señora Martha Hurtado Cárdenas acude a esta instancia invocando su calidad de abuela del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**; situación que se acredita con la copia simple del Registro Civil de Nacimiento de la señora Johana Cárdenas Hurtado ¹².

1.2. Legitimación en la causa por pasiva de las autoridades públicas demandas:

1.2.1. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional:

La persona jurídica "**Nación**" está representada por diversos funcionarios de las distintas ramas del poder público que despliegan las tradicionales funciones públicas legislativa, administrativa y jurisdiccional y de los órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado ¹³.

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, Ley 489 de 1998 ¹⁴, Ley 790 de 2002 ¹⁵ y demás normas vigentes, la Presidencia de la República, los Departamentos Administrativos y los Ministerios son los organismos principales de la Administración Pública Nacional y hacen parte del sector Central de la Rama Ejecutiva del Poder Público; los Ministerios tienen como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen. Así las cosas, el Ministerio de Defensa, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia mediante el ejercicio de la seguridad y defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en artículo 3 ¹⁶ del Decreto 1512 de 2000 ¹⁷, por el cual se modificó la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, se tiene que en este radica la dirección del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, por ende, se encuentra debidamente legitimado para comparecer a la integración del contradictorio en el asunto en cuestión. Además, porque el artículo 6 *ibídem* dispuso que la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (Fuerza Aérea, Ejército Nacional y Armada Nacional) hacen parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, cuya dirección a términos del artículo 2 ¹⁸ *ibídem*, está a cargo del ministro de Defensa, de ahí que será él jefe de la cartera gubernamental quien ostente la atribución legal de representar judicialmente a la Fuerza Pública, obrando en nombre y representación de la Nación.

Dicha representación puede ejercerse por cualquiera de las dependencias del Ministerio, en la medida en que hacen parte de su estructura orgánica y, por tanto, las condenas que lleguen a proferirse contra una o varias de ellas, se imputan a un solo presupuesto, esto es, al de la Nación, en cabeza del citado Ministerio ¹⁹.

¹² Ver prueba 2. – Registros civiles de nacimiento.

¹³ Al respecto puede consultarse la sentencia de septiembre 4 de 1997, Radicación número: 10285, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido sentencia de 7 de diciembre de 2004, Ref. 14.676 (0491), Consejero Ponente: Dr. Alir E. Hernández Enríquez.

¹⁴ "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."

¹⁵ "Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República".

¹⁶ "Artículo 3°. Dirección de la Fuerza Pública. El Presidente de la República, de acuerdo con el numeral 3° del artículo 189 de la Constitución Nacional, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República y como tal dirige la Fuerza Pública y dispone de ella, directamente o por conducto del Ministro de Defensa Nacional".

¹⁷ "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones."

¹⁸ Artículo 2°. Dirección. La Dirección del Ministerio de Defensa Nacional está a cargo del Ministro, quien la ejerce con la inmediata colaboración del Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de Fuerza, el Director General de la Policía Nacional y el Viceministro.

¹⁹ Así lo dispone el artículo 159 del C.P.A.C.A., que, en cuanto a la representación judicial de las entidades públicas, estableció lo siguiente:

"Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes,



Por su parte, el Artículo 218 de la Constitución Política consagra:

“La ley organizará el cuerpo de Policía.

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Ahora bien, en torno al daño antijurídico que se deprecia sea reconocido inicialmente por las partes demandadas, o en su defecto posteriormente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la consabida indemnización que de la configuración del mismo deviene, tenemos que vía jurisprudencia el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 68001-23-31-000-2005-00986-00(37894) Actor: LUZ STELLA CANCINO VARGAS Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, señaló:

“(....) ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Omisión de protección de la fuerza pública / OMISION DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA - Por ejecuciones extrajudiciales en Suratá, Santander / EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES - DAÑO ANTIJURIDICO - Muerte de habitantes del Municipio de Suratá [S]i bien muestran la intención del Ejército Nacional de adelantar gestiones propias de la función militar con el objetivo de proteger a la población civil en el municipio de Suratá, resultan a todas luces tardías respecto del peligro que se cernía y se materializó en relación con el señor Constantino Socha Cancino, quien fue amordazado, secuestrado, expuesto ante la población como un miembro de la guerrilla y violentamente asesinado en los hechos descritos el día 2 de abril de 2003.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y AMENAZAS A LA POBLACIÓN CIVIL - Existente / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA OMISION PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - Por omisión de protección a la población civil La Sala condenará a la entidad demandada por el daño antijurídico consistente en la muerte de Constantino Socha Cancino, toda vez que: i) el peligro al que estaban expuestos los habitantes del municipio de Suratá, en especial aquellos residentes de los corregimientos de Mohán y Turbay, donde ocurrieron los hechos, fue puesto en conocimiento del comandante del Batallón de Infantería n.º 14 Antonio Ricaurte y del comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional en Bucaramanga, mediante las comunicaciones de fecha 25 de enero y 6 de septiembre de 2002; ii) la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba esa población hacían imperativa la intervención estatal para protegerla, pues así lo revela: la publicación que hicieran las AUC en el diario Vanguardia Liberal avisando su intención de incursionar en el municipio de Suratá para recuperar un ganado hurtado por la guerrilla días previos a los sucesos, de acuerdo con el testimonio de Javier Ricardo Rodríguez Pinzón, quien ocupó el cargo de personero municipal de Suratá (...) iii) a pesar de lo cual, la fuerza pública adoptó unas medidas de protección ineficaces porque estuvieron enfocadas a la captura o “neutralización” de guerrilleros, mediante operaciones de registro y control de área, pero no buscaron proteger realmente a la población civil de los

demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

“La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”. (...) (Subrayas fuera de texto).

(6) 3211812 -(+57) 3174364677-(+57) 3014549829 www.legalgroup.co

📍 Pereira - Risaralda Cra 12 bis #8- 45 Sector Circunvalar.

📍 Bogotá • Cartagena • Medellín • Cali • Tuluá • Santander de Quilichao • Barranquilla • New York



riesgos que suponía la presencia paramilitar en la zona.(...) estas conclusiones coinciden con el fallo del 30 de noviembre de 2012, dictado por la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la sentencia del 2 de septiembre de 2011, emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Bucaramanga, en el cual se condenó a la entidad demandada por la muerte de Miguel, Alonso y José Adonay Báez Rojas (...)

PERJUICIOS MORALES - Reconocidos a núcleo familiar de las víctimas / PERJUICIOS MORALES - Reiteración jurisprudencial / MEDIDA DE REPARACION INTEGRAL - Exhortar a la Fiscalía General de la Nación a investigar los homicidios - INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES CONSTITUCIONAL O CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS - Por afectación del derecho a la vida / MEDIDA DE REPARACION INTEGRAL CONTRA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO - Por apoyo del Ejército Nacional a las Auc [L]a Sala condenará a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, a favor de la madre, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y, a favor de sus hermanos, el valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.(...) la Sala exhortará a la Fiscalía General de la Nación, como medida de reparación integral, para que inicie una investigación penal, o impulse aquella que se encuentre en curso por esos hechos, toda vez que de conformidad con la Ley 599 de 2000, vigente para esa fecha aún no ha prescrito la acción penal si se tiene en cuenta que la duración máxima del delito de homicidio en persona protegida tiene una pena privativa de la libertad que supera los 20 años.(...) **Se aclara que es posible proceder a reconocer una medida de reparación no pecuniaria, sin que ello implique un desbordamiento de la competencia del juez de lo contencioso administrativo en sede de la acción de reparación directa.(...) Para este despacho es evidente que se está frente a violaciones flagrantes de los derechos humanos y los derechos fundamentales, casos en lo que, en virtud de la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera, hay lugar a ordenar medidas no pecuniarias de reparación integral del derecho conculcado y ello incluso si no fueron solicitadas en el petitum de la demanda.** NOTA DE RELATORIA: Sobre los perjuicios inmateriales por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos constitucionales o convencionales amparados, consultar sentencia de 4 de mayo de 2011, Exp. 19355, C:P. Enrique Gil Botero”.

A su turno, la Sentencia C-411/15 señala:

“(...) DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Situación de libertad originada en un permiso concedido por autoridad administrativa

Un examen independiente requiere la pregunta por la constitucionalidad de la norma acusada, en aquellos casos en que la situación de libertad se origina en un permiso concedido por la autoridad administrativa –INPEC-, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley (C Penitenciario arts. 147 y ss.). En esos casos, para empezar, si el juez considera razonablemente que existe alguna causa para revocar el permiso, puede hacerlo con sujeción a la ley, lo cual está dentro del marco constitucional (CP art 28). Asimismo, la propia Ley 65 de 1993 contempla la posibilidad de que, ante el incumplimiento de las condiciones específicas que se le hayan impuesto al beneficiario, se revoque el permiso por quien lo otorgó (C Penitenciario art 150). Por tanto, es posible que la misma autoridad administrativa que la concedió, resuelva la autorización ante el desacato objetivo de lo contenido en ella. Más allá de lo cual, si fuera de esas condiciones se observa el



incumplimiento de otras obligaciones debidamente impuestas en providencia judicial, y derivadas del régimen de detención o prisión domiciliarias, forma parte de la potestad que les reconoce la norma acusada a los funcionarios pertinentes del INPEC y de la Policía Nacional, ejecutar efectivamente la medida de aseguramiento y la pena de reclusión domiciliarias, si las condiciones para concederlas se están trasgrediendo. En tal caso, el fundamento sería entonces también una decisión judicial, y por ende no habría vulneración de la reserva judicial (CP art 28).

EJECUCION DE MEDIDAS Y PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Facultad de capturar asignada al Inpec y a la Policía Nacional

La ley puede en consecuencia asignarle al INPEC, y a la Policía Nacional en cuanto resulte compatible con sus funciones constitucionales, la atribución de efectuar actos, incluso coactivos como la captura, que contribuyan a la ejecución de las medidas y penas privativas de la libertad debidamente decretadas por juez competente, en cuanto esto no suponga alterar o modificar definitivamente las condiciones de la detención o de la pena. En ese margen se ubica la disposición cuestionada, toda vez que les adjudica a los funcionarios del INPEC o de la Policía Nacional, encargados de controlar y vigilar las detenciones y prisiones domiciliarias, la función de ejecutar las resoluciones judiciales que hayan impuesto la medida de aseguramiento o la pena privativa de la libertad, por la vía de una captura transitoria que se fundamenta en decisión judicial, y que no altera definitivamente las condiciones de la medida o la pena.

RESERVA JUDICIAL EN MATERIA DE DETENCION Y PRISION DOMICILIARIA-Sustento en el principio de separación de funciones

No puede perderse de vista que la reserva judicial en esta materia tiene un sustento en el principio de separación de funciones (CP art 113). En efecto, la Constitución establece en primer término que el legislador es quien debe definir previamente en abstracto los motivos y el procedimiento indicado para privar a una persona de su libertad (CP arts. 28, 29 y 150 num 1 y 2). En segundo lugar, consagra una reserva judicial, como regla general, para juzgar cuándo se dan las hipótesis que ha previsto la ley a fin de llevar a cabo la medida de privación de la libertad que allí se consagra (CP arts. 28, 29, 32 y 250). Finalmente, instaura una rama ejecutiva, cuyo Jefe y Suprema Autoridad Administrativa es el Presidente de la República, de la cual forman parte la Policía Nacional (CP arts. 188 num 3, 216 y 218) y el INPEC (C Penitenciario art 15), entre cuyos deberes se encuentran los de obedecer las leyes y velar por su estricto cumplimiento y, específicamente, de acuerdo con la ley, ejecutar las penas y medidas impuestas debidamente por autoridad judicial competente. Esto permite advertir que la facultad prevista en la norma acusada no viola tampoco el fundamento de la reserva judicial, pues la separación de funciones queda intacta, en la medida en que al funcionario pertinente del INPEC y de la Policía Nacional no se les da otra atribución que la de ejecutar las decisiones judiciales que



inicialmente imponen la detención o pena de prisión domiciliarias.

(...)

*“LEY 1709 DE 2014
(enero 20)*

*Diario Oficial No. 49.039 de 20 de enero de 2014
CONGRESO DE LA REPÚBLICA*

*Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la
Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y
se dictan otras disposiciones.*

*EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:*

[...]

*Artículo 31. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993 el cual
quedará así:*

*Artículo 29F. Revocatoria de la detención y prisión domiciliaria.
El incumplimiento de las obligaciones impuestas dará lugar a la
revocatoria mediante decisión motivada del juez competente.*

***El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida o el
funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus
funciones de vigilancia, detendrá inmediatamente a la
persona que está violando sus obligaciones y la pondrá en
el término de treinta y seis horas (36) a disposición del juez
que profirió la respectiva medida para que tome la decisión
correspondiente.***

*La revocatoria de la medida se dispondrá con independencia de
la correspondiente investigación por el delito de fuga de presos,
si fuere procedente.*

*Parágrafo. El Inpec podrá celebrar convenios con la Policía
Nacional para el seguimiento del cumplimiento de la prisión
domiciliaria cuando la guardia no sea suficiente para garantizar
el desarrollo de la misma. La participación de la Policía Nacional
dependerá de la capacidad operativa y logística de las unidades
que presten el apoyo al Inpec (...).”*

Así las cosas, en el presente asunto se tiene que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional –PONAL- se encuentra legitimada en la causa por pasiva para concurrir a la demanda de la referencia en nombre de la Nación, toda vez que, el daño antijurídico ocasionado, esto es la prematura muerte del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, es el resultado del actuar omisivo y anómalo del personal adscrito a esta institución, sin que mediaran circunstancias para ello por parte del adolescente.

La Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, está representada legalmente por el Ministro de Defensa Nacional Dr. Iván Velásquez Gómez²⁰ o quien haga sus veces al momento de la notificación.

²⁰ Nombrado a través del Decreto 1697 del 16 de agosto de 2022



1.2.2. Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca

La Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios en su **Artículo 3°**. Sobre las funciones de los municipios establece:

(...) 2. **Elaborar los planes de desarrollo municipal**, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, **incorporando las visiones** de las minorías étnicas, **de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio** (...)

Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal.

4. **Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes.**

5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. (...)."

El Artículo 315 de la Constitución Política señala que es atribución del alcalde:

"(...) 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante".

La Ley 4 de 1991 por la cual se dictan normas sobre orden público interno, policía cívica local y se dictan otras disposiciones, estipula:

"ARTICULO 1o Informes Generales de Orden Público. Los alcaldes deberán enviar informes sobre la situación general del orden público al correspondiente Gobernador, Intendente o Comisario, relacionados con la seguridad, tranquilidad y salubridad. La periodicidad de los informes será fijada por los Gobernadores, Intendentes y Comisarios. Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y el Alcalde Mayor de Bogotá, deberán enviar al Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Gobierno, informes similares sobre la situación del orden público en su correspondiente jurisdicción.

Dichos informes versarán sobre las situaciones gestadoras o fomentadoras de perturbaciones del orden público con precisión de las medidas que se han tomado y de las que deban tomarse, para conjurar la situación, así como la solicitud precisa de la ayuda o colaboración que sea necesaria. (...)

ARTICULO 8o Normas y órdenes de Orden Público en lo Departamental, Distrital, Intendencial, Comisarial y Municipal. Para efectos de la conservación del orden público en los departamentos, intendencias y comisarías, las órdenes y decretos del gobierno departamental, intendencial o comisarial, **en materia de policía**, expedidas de conformidad con los principios consagrados en la Ley, **serán de aplicación preferente e inmediata frente a cualquier disposición u orden expedida por las autoridades municipales**



ARTICULO 9o Normas de Orden Público en lo Municipal. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores y para efectos de la conservación del orden público, las órdenes y decretos del Alcalde en materia de policía, serán de aplicación preferente a las disposiciones y medidas que adopten los inspectores y demás autoridades de policía de su jurisdicción.

ARTICULO 10. El Alcalde como Jefe de Policía. El Alcalde es el Jefe de Policía en el Municipio y el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en el mismo, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Alcalde deberá dictar las medidas de orden público que sean requeridas por el Presidente de la República, por el Gobernador, Intendente o Comisario, y las que considere indispensables cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.

ARTICULO 11. Ordenes a la Policía. La Policía Nacional, en el Municipio, estará operativamente a disposición del Alcalde, quien dará sus órdenes por intermedio del respectivo Comandante de Policía, o de quien haga sus veces. Dichas órdenes son de carácter obligatorio. (...)

ARTICULO 16. Incorporación de Policía Nacional para servicio exclusivo en los municipios. Cuando a juicio del alcalde sea necesario incrementar la prestación del servicio de policía en el territorio de su jurisdicción u obtener servicios especializados en la misma, los municipios podrán contratar con la Policía Nacional la incorporación del personal respectivo, el cual será asignado de manera exclusiva a atender las necesidades municipales requeridas por el alcalde”.

Adentrándonos al caso en comento, tenemos que en la NOTA DE SEGUIMIENTO N° 027-15²¹ Primera al Informe de Riesgo N° 002-14 Emitido el 4 de febrero de 2014 Fecha: 3 de diciembre de 2015 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO emitida por la Defensoría del Pueblo, dicha entidad como mínimo desde el año 2015 instó al **Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca a realizar diversas gestiones dirigidas a la población vulnerable por la violencia del barrio Llano Verde** (Entre otros barrios y Comunas de Cali), veamos:

“(...) A la Alcaldía de Santiago de Cali y de forma complementaria y subsidiaria a la Gobernación del Valle del Cauca, profundizar la inversión social en materia de educación, salud, empleo, cultura y recreación, de manera especial, impulsar proyectos productivos para los jóvenes en condición de riesgo y promoverles oportunidades de empleo. Se recomienda la destinación de recursos extraordinarios para estas inversiones en los siguientes barrios y comunas: (...) y Llano Verde (...).

A la Alcaldía de Santiago de Cali, establecer estrategias para, de forma concertada con las comunidades, identificar las particularidades de los problemas de seguridad y convivencia, a fin de establecer líneas de intervención para mejorar las condiciones de barrios y comunas. Se recomienda prestar especial atención a la conformación de barrios de beneficiarios de proyectos de vivienda para reasentamiento o reubicación, quienes traen conflictos por diversos aspectos sociales (víctimas/victimarios, pandillas/fronteras invisibles, enfrentamientos de grupos armados) y deben ser catalizados antes de su llegada a los nuevos lugares de hábitat. La evidencia

²¹ FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos De Violaciones de Derechos Humanos y DIH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS – SAT. Tomada la información el día 17 de febrero de 2020 de la dirección electrónica: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/NS-N%C2%B0-027-15-a-IR-N%C2%B0-002-14-Cali-VAL.pdf>



*argumentada por ciudadanos, comunidades y organizaciones que trabajan con personas vulnerables y víctimas de la violencia como la Vicaría para la Reconciliación de la Arquidiócesis de Cali, ha manifestado la continuidad e incluso **agravamiento en las condiciones de seguridad en los nuevos espacios territoriales que fueron asignados a familias reasentadas o reubicadas, producto de las disputas entre pandillas y bandas que provenían de sus lugares de origen. Esta situación que puede ser evitada** con intervenciones adecuadamente planeadas en nuevos barrios que se creen, así como en los que ya afrontan estos problemas como Potrero Grande y Llano Verde (...)*".

Así mismo, frente al tema tratado, el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de febrero dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-26-000-2004-01061-01(34440) Actor: CARLOS GUILLERMO RUIZ LUNA Y OTROS Demandado: NACION - RAMA JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION, señaló:

"(...) El reciente precedente de la Sala se plantea que la omisión del Estado como fundamento de la responsabilidad puede fundarse en la tesis de la posición de garante, con lo que se intenta superar la tesis de la falla del servicio, en la medida en "que cuando a la Administración Pública se le ha impuesto el deber jurídico de evitar un resultado dañoso, aquella asume la posición de garante en relación con la víctima, razón por la cual de llegarse a concretar el daño, éste resultará imputable a la Administración por el incumplimiento de dicho deber". En el mismo precedente se señaló que la posición de garante ya ha sido acogida en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos (...) Se trata de afirmar la responsabilidad del Estado pese a que los hechos son causados por terceros, en la medida en que a la administración pública le es imputable al tener una "posición de garante institucional", del que derivan los deberes jurídicos de protección consistentes en la precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado (...)".

Por lo expuesto anteriormente, se colige palmariamente que el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca tenía la posición de garante con deber jurídico de evitar el resultado dañoso del fallecimiento de la víctima principal en mención, razón por la cual ostenta la legitimación por pasiva para concurrir a la presente demanda.

El Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, está representado legalmente por el señor Jorge Iván Ospina²² o quien haga sus veces al momento de la notificación.

1.2.3. Defensoría del Pueblo.

De conformidad con el **Artículo 1°**. del Decreto 25 de 2014 por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. *La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos. (...) La Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y presupuestal.*

Así mismo, el **Artículo 2°**. del Decreto en cita dispone respecto de su objeto que: **La Defensoría del Pueblo es la institución responsable de impulsar la efectividad**

²² Nombrado a través del Decreto 134 del 06 de febrero de 2021



de los Derechos Humanos mediante las siguientes acciones integradas: promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos **y prevenir sus violaciones**; fomentar la observancia del Derecho Internacional Humanitario; atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior; y, proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la ley.

Al tenor de lo consignado en la NOTA DE SEGUIMIENTO N° 027-15²³ Primera al Informe de Riesgo N° 002-14 Emitido el 4 de febrero de 2014 Fecha: 3 de diciembre de 2015 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO emitida por la Defensoría del Pueblo, dicha entidad como mínimo desde el año 2014 tenía conocimiento de que:

*“(…) Los líderes comunitarios del barrio Llano Verde han manifestado la existencia de los mismos problemas sociales y de vulnerabilidad que se presentaron durante la conformación del barrio Potrero Grande, donde **se entregaron viviendas a los habitantes de distintos asentamientos subnormales sin evaluar previamente los conflictos subyacentes y la existencia de pandillas en los mismos sectores, calles y pasadizos, lo que produce permanentes situaciones de tensión que sirven a los intereses de los grupos armados ilegales que se constituyen en fuente de exacerbación de la violencia al implantar actividades ilegales como el tráfico de armas, la distribución de estupefacientes, el homicidio en la modalidad de sicariato, la extorsión, entre otros (actividades que en algunos casos es una fuente de ingresos para las familias que habitan esos barrios).** (…)*
Resaltado propio.

Al cruzar las conductas de mayor impacto en la ciudad de Cali (homicidios, desapariciones, extorsiones, amenazas, etc.) y la influencia de los grupos armados ilegales, las comunas y barrios más afectados por hechos de violencia en 2014 y 2015, son:

COMUNA	BARRIO
(…)	
15	El Vallado, Mojica, Llano Verde, Brisas de Comuneros, Invasión Valladito, Laureano Gómez, El Retiro, Comuneros I

*“(…) El asesinato de mujeres y la violencia sexual basada en género es una situación de riesgo que persiste. Las pandillas y los grupos armados ilegales obligan a las mujeres a mantener relaciones sentimentales o sexuales bajo amenaza. **En los barrios El Vallado, Desepaz, Potrero Grande o Llano Verde esos crímenes no se denuncian y se ocultan, pues quedan bajo el rótulo de “venganzas” o “ajustes de cuentas”.** Las mujeres que son pretendidas por comandantes de Los Rastrojos o Los Urabeños por su actividad laboral de modelaje, por ser atractivas o porque tienen relaciones afectivas con sujetos de esas estructuras, pueden ser víctimas de retaliaciones por parte de uno u otro grupo ilegal.*
(…)

La Personería de Cali, con corte al mes de julio de 2015 recibió 46 declaraciones (por hechos victimizantes ocurridos en 2015) presuntamente por acción de Los Rastrojos, Los Urabeños, “Los Buenaventureños”, “Águilas Negras”, entre otros. Afectando habitantes de los barrios Potrero Grande, Puertas del Sol, Simón Bolívar, Villa San Marcos, Barrio Taller, La Estrella (Siloé), Tomás Uribe Uribe, Altos de Santa Elena, Puerto Nuevo, Tercer Milenio, Terrón Colorado, Montebello, Llano Verde, Floralia, Ciudad del Campo, Alto Jardín, La

²³ FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos De Violaciones de Derechos Humanos y DIH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS – SAT. Tomada la información el día 17 de febrero de 2020 de la dirección electrónica: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/NS-N%C2%B0-027-15-a-IR-N%C2%B0-002-14-Cali-VAL.pdf>



Casona, El Retiro, La Paz, Pueblo Joven, Alirio Mora Beltrán, Comuneros, Guayaquil, Mojica, Villanueva y Pízzamos I.



FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos De Violaciones de Derechos Humanos y DIH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SAT	Código: DPR - FTO - 07
	Versión: última
	Página: 1 de 20

NOTA DE SEGUIMIENTO N° 027-15
Primera al Informe de Riesgo N° 002-14
Emitido el 4 de febrero de 2014

Fecha: 3 de diciembre de 2015

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Departamento	Municipio o Distrito	Zona Urbana	
		Comuna	Barrio
VALLE DEL CAUCA	Santiago de Cali	1	Terrón Colorado.
		3	San Nicolás, El Piloto.
		4	La Isla, Berlín, Tomas Uribe.
		5	Chiminangos I etapa, Brisas del Valladito, Brisas de las Palmas y Brisas de Haití, Villa del Prado, Los Andes.
		6	Floralia, Petecuy I y II etapa, San Luis, San Luis II.
		7	Alfonso López I, Puerto Nuevo
		8	Benjamín Herrera, Primitivo Crespo, Simón Bolívar.
		9	Bretaña, Guayaquil.
		10	Santa Elena, El Guabal, Las Granjas.
		11	Primavera.
		12	El Rodeo, Nueva Floresta, Villanueva
		13	El Vergel, Poblado I y II, Charco Azul, El Pondaje, Sardi, Villa del Lago, Villa Blanca, Ulpiano Lloreda y Ricardo Balcázar, El Diamante, Comuneros II, La Florida, La Paz, Playa Alta, La Casona.
		14	Manuela Beltrán, Marroquín I y II, Puerta del Sol, Alfonso Bonilla Aragón, Las Orquídeas, Villa San Marcos, Alirio Mora Beltrán.
		15	El Vallado, Brisas de Comuneros, Brisas de las Palmas, El Retiro, Mojica, Llanero Verde, Invasión Valladito, Laureano Gómez, Comuneros I.
VALLE DEL CAUCA	Santiago de Cali	16	Mariano Ramos, Antonio Nariño, República de Israel
		18	Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Sector Alto de Los Chorros, Alto Nápoles, Alto Jordán.
		20	Siloé, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo, Altos de Belén, Pueblo Joven.
		21	Pízzamos I, II y III, Potrero Grande, Sol de Oriente Calimío, Desepaz Ciudadela del Río, Invicalli, Villa Mercedes, Tercer Milenio, Barrio Taller.

Por lo expuesto anteriormente, se colige igualmente, que la Defensoría del Pueblo tenía la posición de garante con deber jurídico de evitar el resultado dañoso del fallecimiento de la víctima principal en mención, razón por la cual ostenta la legitimación por pasiva.



La Defensoría del Pueblo, está representada legalmente por el señor Carlos Camargo Assis²⁴ o quien haga sus veces al momento de la notificación.

1.2.4. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

El Decreto 4151 DE 2011 por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras disposiciones, establece:

Artículo 1º. Objeto. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos.

Artículo 2º. Funciones. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrá las siguientes funciones: (...)

7. Vigilar a las personas privadas de la libertad fuera de los establecimientos de reclusión para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial.

8. Garantizar el control sobre la ubicación y traslado de la población privada de la libertad. (...)

11. Realizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las modalidades privativas de la libertad que establezca la ley. (...)

18. Coordinar sus actividades con las entidades que ejerzan funciones relacionadas con la gestión penitenciaria y carcelaria, todo ello en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

24. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la entidad.

Igualmente, la Ley 65 de 1993 Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario establece:

Artículo 14. Contenido de las funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Corresponde al Gobierno Nacional por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través de una sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de aseguramiento, del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado. (...)

ARTICULO 140. EVASION. Cuando ocurra la evasión de un interno de un establecimiento de reclusión o en remisión o en permiso, el director del mismo procederá de inmediato, por medio del personal de su dependencia, a adelantar las primeras pesquisas, y a iniciar la respectiva investigación administrativa; al mismo tiempo pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes y de la Dirección con el fin que se preste el apoyo necesario para obtener su recaptura.

²⁴ Nombrado a través del Decreto 134 del 06 de febrero de 2021



La omisión de estos deberes constituye causal de mala conducta.

En los casos en que la dirección del instituto considere que ella misma debe iniciar y proseguir la investigación, lo comunicará al director del establecimiento donde haya ocurrido la fuga.

Ahora bien, frente a la legitimación en la causa del INPEC, el Consejo de Estado en su sección tercera ha dicho:

“Sobre la naturaleza jurídica y las funciones del INPEC, tenemos que los artículos 2° y 4° del Decreto 2160 de 1992 declaran:

“(…) es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa. (…)

La formulación y ejecución de los planes y programas de gestión carcelaria y penitenciaria; la dirección, administración y control de los centros carcelarios y penitenciarios; y la determinación de los sistemas de seguridad, vigilancia y control al interior y exterior de los establecimientos de reclusión (…).”

Mientras que los numerales 2 y 3 del artículo 7 del Decreto 1170 de 1999, disponen:

“ARTÍCULO 7o. FUNCIONES. Son Funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, las siguientes: (…)

2. Ejercer la Dirección, Administración y Control de los Centros Carcelarios y Penitenciarios del Orden Nacional, y atender la vigilancia interna de los mismos a través del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, o por conducto de otros cuerpos administrativos de vigilancia interna.

3. Proponer y participar en los diseños de los sistemas y esquemas de seguridad, vigilancia y control al interior y al exterior de los Establecimientos de Reclusión y evaluarlos permanentemente.”

*58 Así las cosas, esta Corporación encuentra que a pesar de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, sea una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, **la misma se encuentra dotada de autonomía administrativa, patrimonio independiente y personería jurídica propia, lo cual le permite ejercer derechos y contraer obligaciones, y por ende, tiene la facultad de fungir como sujeto procesal cuando, a iniciativa propia o en contra de ella, se adelante un proceso judicial.**²⁵ (Negritas y subrayas fuera de texto original).*

Por lo relacionado anteriormente, se colige que el INPEC tenía la obligación de controlar que Gabriel Alejandro Bejarano, alias Mono cumpliera con la medida de aseguramiento de prisión domiciliaria impuesta por el Juez competente, con lo cual, se hubiese evitado el resultado dañoso del fallecimiento de la víctima principal en mención para la fecha en que le fue arrebatada abruptamente su vida, razón por la cual ostenta la legitimación por pasiva para concurrir a la presente demanda.

²⁵ Consejo De Estado, Sección Tercera - Subsección C- Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil trece (2013). Radicación número: 41001-23-31-000-1994-07643-01(27213), Actor: Mery Cuellar y Otros, Demandado: Ministerio de Justicia Referencia: Acción de Reparación Directa (Apelación Sentencia).



El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- está representado por el Brigadier General Tito Yesid Castellanos Tuay²⁶ en calidad de Director general o quien haga sus veces en el momento de la notificación de la comparecencia al proceso²⁷.

1.2.5. La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La Ley 1709 de 2014 Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones, consagra lo siguiente:

Artículo 5°. Adiciónese un artículo 7A en la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 7A. Obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad. Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.

Los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la defensoría pública o de la Procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respectivos requisitos.

La inobservancia de los deberes contenidos en este artículo será considerada como falta gravísima, sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar.

El Consejo Superior de la Judicatura garantizará la presencia permanente de al menos un Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en aquellos establecimientos que así lo requieran de acuerdo con solicitud que haga el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En los demás establecimientos se garantizarán visitas permanentes.

Por lo cual, se colige que La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tenía la obligación de **vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de la medida de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria** de Gabriel Alejandro Bejarano, alias Mono, pero no lo hizo; de haber acatado su obligación legal se hubiese evitado el resultado dañoso del fallecimiento de la víctima principal en mención para la fecha en que le fue arrebatada abruptamente su vida, razón por la cual, ostenta la legitimación por pasiva para concurrir a la presente demanda.

La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, está representada legalmente por su director²⁸, el doctor José Mauricio Cuestas Gómez o por quien haga sus veces al momento de la notificación.

²⁶ Nombrado a través del Decreto 358 del 06 11 marzo de 2022

²⁷ Información tomada de: <https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/directivos/direccion-general> consultado el día 05 de marzo de 2021 a las 15:36 horas

²⁸ <https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la-rama/informacion-general/directorio-consejo-superior-y-otros/direccion-ejecutiva-de-administracion-judicial#:~:text=Madelein%20Doria%20Morelo%20%2D%20C.>



2. Fundamentación Fáctica y Jurídica que sustenta la demanda

2.2.1. El menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, quien se identificaba con el NUIP 1.028.186.826; nació el día 28 de diciembre del año 2005 en el Distrito de Buenaventura, bailar música urbana y jugar fútbol con sus amigos²⁹ era lo que le gustaba hacer, su sueño era ser futbolista³⁰. Para el día once (11) de agosto del año dos mil veinte (2020) en el cual perdió abruptamente la vida, contaba con 14 años edad y residía con su familia en el Barrio Llano Verde.

2.2.2. El menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** era hijo biológico de la señora Johana Cárdenas Hurtado identificada con la C.C. 1.028.186.553. Dicha situación se acredita con la copia del registro civil de nacimiento del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**³¹.

2.2.3. El menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, para el momento de su fallecimiento tenía los siguientes hermanos: Víctor Alfonso Cárdenas Hurtado, identificado con el NUIP 1.143.955.020; Darwin Camilo Cárdenas Hurtado identificado con el NUIP 1.143.994.704; Brayan Cárdenas Hurtado, identificado con el NUIP 1.143.982.959; Marolyn Tatiana Cárdenas Hurtado, identificada con la tarjeta de identidad 11.143.982.991 y Yari Camila Cárdenas Hurtado, identificada con el NUIP 1.234.200.314. Tal situación se acredita con la copia simple del Registro Civil de Nacimiento de Nacimiento de los demandantes antes mencionados, así como también con el Registro Civil de Nacimiento de nacimiento del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**³².

2.2.4. El menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, para el momento de su deceso tenía tres (03) tíos, a saber: los señores Yeison, identificado con la C.C. 1.028.186.554; Luis Eduardo identificado con la C.C. 1.028.186.864 y Francia Elena Cárdenas Hurtado identificada con la C.C. 1.028.186.868 acuden a esta instancia invocando su calidad de tíos del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, situación que se acredita con la copia simple del Registro Civil de Nacimiento de Nacimiento de los demandantes antes mencionados, así como también con el Registro Civil de Nacimiento de nacimiento de la señora Johana Cárdenas Hurtado³³.

2.2.5. El menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, para el momento de su deceso tenía una abuela, la señora Martha Hurtado Cárdenas identificada con la C.C. 31.610.052, dicha situación se acredita con la copia simple del Registro Civil de Nacimiento de la señora Johana Cárdenas Hurtado³⁴.

2.2.6. El trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) la Defensoría del Pueblo en escrito dirigido a la secretaria técnica de la Comisión Intersectorial para respuesta rápida a las alertas tempranas (CIPRAT) consignó lo que a continuación se relaciona, ante lo cual, resulta pertinente poner de presente que el Barrio Llano Verde pertenece a la comuna 15 de Santiago de Cali / Valle del Cauca: "(...) **Referencia: Alerta Temprana, de Inminencia, N° 085-18, para los habitantes de las comunas 14, 15 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali, departamento Valle del Cauca; para que se adopten las medidas urgentes destinadas a salvaguardar la vida e integridad personal de la población civil, en especial de los pobladores de los barrios: Potrero Grande, Valle Grande y Desepaz Invicali; al igual que Llano Verde, El Retiro y Los Comuneros.**

²⁹ <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/masacre-en-cali-quienes-eran-los-cinco-ninos-asesinados-en-llano-verde-531530>

³⁰ Ver. Versión de los hechos. Francia Elena Cárdenas Hurtado. <https://www.youtube.com/watch?v=walkp7IallY>

³¹ Ver prueba 2. – Registros civiles de nacimiento

³² Ver prueba 2. – Registros civiles de nacimiento.

³³ Ver prueba 2 – Registros civiles de nacimiento

³⁴ Ver prueba 2. – Registros civiles de nacimiento.



(...) De manera atenta, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2124 de 2017¹, me permito remitir la Alerta Temprana de la referencia, debido al inminente riesgo al que se exponen los moradores de los barrios pertenecientes a las comunas 14, 15 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali (...)

La población en situación de riesgo habita en los barrios: (...) Llano Verde (...) de la comuna 15 (...).

Las comunas mencionadas presentan o comparten similares condiciones de vulnerabilidad social, expresada en altos niveles de pobreza, desplazamiento forzado, desplazamiento intraurbano, falta de oportunidades laborales, Necesidades Básicas Insatisfechas, limitada presencia estatal en seguridad y una baja prestación de servicios sociales, que en la actualidad han convertido a estos territorios en un escenario de interés para los grupos armados ilegales o de delincuencia organizada, propicio para su accionar, que se valen de estas particularidades, para penetrar e imponer diversas formas de control sobre estas zonas de la ciudad de Cali (...) quienes han sido objeto de atentados, homicidios y amenazas.

Dentro de las comunas mencionadas, los barrios citados arriba son los que presentan más riesgos por tener altos índices de homicidios, hurtos, extorsión, desplazamiento, venta y consumo de sustancias psicoactivas, riñas, la presunta presencia de grupos armados organizados y amenazas a sus habitantes.

El escenario de riesgo se configura por la presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencia de las FARC-EP, quienes se autodenominan: Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), cuyo interés es el control del territorio urbano, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes de los barrios referenciados en este documento.

Se remite la presente Alerta Temprana de Inminencia, con el propósito de que se adopten medidas de prevención y protección urgentes y efectivas para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad personal, los derechos civiles y políticos y el DIH de esta población geográficamente referenciada en este documento.

I. Antecedentes

Las comunas señaladas y ubicadas al oriente de la ciudad, están relacionadas por padecer problemáticas similares heredadas del conflicto armado y aunadas al desplazamiento forzado que durante años han vulnerado los derechos de sus habitantes provenientes de la costa pacífica nariñense y caucana, el norte del Cauca, Buenaventura, y de otros barrios de la ciudad. (...)

Las dinámicas económicas se recargaron a las prácticas ilegales de los grupos que habían cooptado y que ahora dominaban, y desarrolladas con las estructuras del narcotráfico. Es así que para los grupos armado presentes esta zona de Cali se ofrecía como un espacio propicio para establecer diversas formas de su accionar delictivo, dadas sus características en el desarrollo económico, industrial y su importancia comercial, y por ser receptora del puerto más importante del pacífico, Buenaventura. (...)

Las características socioeconómicas de la población asentada en estas comunas de oriente, contrastan incomprensiblemente con el desarrollo comercial y económico de la ciudad, como la falta de oportunidades laborales o la informalidad de sus empleos, han venido aumentando la vulnerabilidad de sus habitantes, sumado a ello una limitada presencia estatal en seguridad y una baja prestación de servicios sociales no reflejados en inversión social, proyectos y programas sociales que redundaran en favor de estas comunidades. (...)



(...) la comuna 15 ha sido un territorio golpeado por la violencia en donde sus habitantes han visto vulnerados sus derechos constantemente, la situación de conflicto estuvo protagonizada por milicias populares las FARC-EP concentrados con mayor intensidad en la zona de Marroquín, en el distrito de Agua Blanca, igualmente pandillas juveniles, grupos de limpieza social, bandas de distribuidores de droga y de sicarios. Las anteriores características y la ausencia del dialogo y la conciliación, han conservado un ciclo de violencia en la comuna, en el que un contexto cargado de factores negativos como, la marginalidad, las condiciones socioeconómicas, la falta de oportunidades, la salud, la educación, la vivienda y el desempleo no permite la superación de vulnerabilidades, por el contrario las amenazas son cada vez mayores, si se tiene en cuenta que las practicas delincuenciales mutaron a unas más estructuradas y difíciles de rastrear, y que a su vez generan más daño a los habitantes. (...)

II. Escenario Actual

(...) En una gran mayoría un porcentaje importante de los habitantes en las comunas 14, 15 y 21 de Cali, se caracterizan por tener la condición de víctimas del conflicto armado (...) En los barrios de las comunas referenciadas las comunidades se ven expuestas a conductas vulneratorias de derechos humanos, desde hurtos hasta homicidios, en su mayoría perpetrados por bandas criminales, presuntamente integradas por personas que hicieron parte del proceso de dejación y reincorporación, pero que hoy han decidido volver a delinquir; y otros que definitivamente se declararon en disidencia y continuaron ejerciendo el trabajo que adelantaban con las milicias, y cuyo objetivo era la expansión territorial y control sobre las redes en el negocio ilegal del narcotráfico y de otras actividades ilegales, ahora aprovechando el espacio dejado por los desmovilizados. (...)

La zozobra que se funda alrededor de los líderes sociales por el miedo a ejercer labor social y la tensión en los habitantes que tienen conocimiento de la presencia de estos grupos en los barrios, y la incertidumbre de saber que en cualquier momento pueden presentarse enfrentamientos entre estos, mantiene en vilo a la comunidad. Las amenazas se reafirman en los últimos días como se dio a conocer con la siguiente nota: "Circulan amenazas de 'Gaitanistas' en Valle del Cauca. El documento, que es presentado como un comunicado a la opinión pública y que inicia con un encabezado que reza 'Por una Colombia Madre Patria para todos', señala que las llamadas 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' (AGC) ya han empezado el exterminio de ratas izquierdistas, activistas de derechos humanos y del proceso de paz, líderes indígenas, miembros del Congreso de los Pueblos, sindicalistas y colaboradores de la guerrilla". (...)

De acuerdo con las cifras, durante el primer semestre de 2018, se presentaron 600 homicidios, 23 más que en el mismo periodo de 2017, en donde se registraron 577 casos, representando un incremento de 3.99%. Lo anterior hizo que las autoridades se volcaran en el estudio de la problemática en el sector y posibles métodos de apaciguar la violencia.

Ahora bien, en el periodo comprendido entre enero-junio de 2018 las comunas que registraron incrementos en el número de homicidios fueron las comunas 14, 8, 7, 10, 6, 17, 18, 3, 16, 20, 5 y 12. Se destaca el caso de la comuna 14 donde, en este primer semestre de 2018 se han registrado 63 homicidios, es decir 18 más de los 45 perpetrados en el mismo periodo de 2017.

La comuna 15 está compuesta por nueve barrios, tres urbanizaciones y sectores, su población se calcula en 159.369 habitantes aproximadamente. Esta comuna posee 948 manzanas, establecimientos educativos 53, con un total de 10.551 estudiantes matriculados. Estaciones de policía 1 y Centros de Atención Inmediata ninguno.

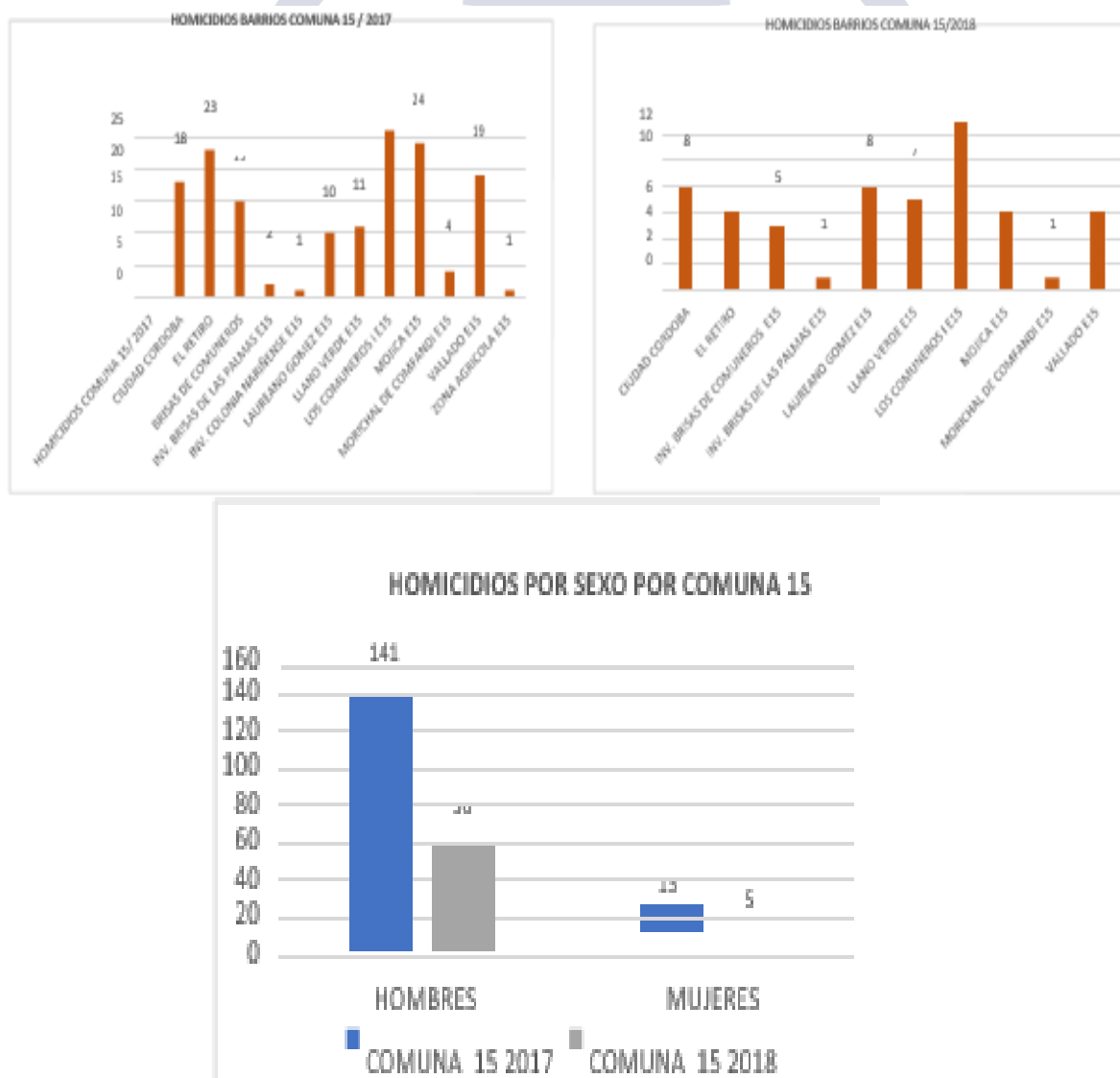


Ubicada en una de las zonas más excluidas de la ciudad de Cali, en la comuna 15 se encuentran barrios como Llano Verde (...)

Las condiciones de vulnerabilidad social se relacionan con fenómenos similares a los ya expuestos para las comunas 14 y 15 como: la inseguridad, el tráfico de estupefacientes, comercio ilegal de armas y explosivos, presencia de pandillas, los hurtos y los atracos. Los menores de edad son utilizados en las redes asociadas con el negocio ilícito de narcotráfico al menudeo, la prostitución y el sicariato, cuyos integrantes hacen parte de grupos delincuenciales dedicados a la extorsión a comerciantes, al cobro de exacciones a cambio de “protección” y al cobro excesivo de intereses por los préstamos del sistema llamado “gota a gota”.

Ante todos estos actos que atentan contra los derechos humanos, los habitantes piden presencia constante de la autoridad con el fin de que les brinden seguridad, o reclaman la reubicación de sus viviendas como una salida a sus precarias condiciones. (...)

Para la comuna 15 la estadística nos dice que; para el año 2017 se registraron un total de 154 homicidios, y para el año 2018 aparecen 61 casos registrados. La suma arrojó un total de 215 casos, en donde 197 se perpetraron en contra de hombres y 18 en contra del género femenino.



Las comunas descritas han venido durante largo tiempo concentrando el mayor número de homicidios y aunque a la fecha se registran menos casos en relación al año inmediatamente anterior, la zozobra se cierne sobre sus habitantes.



Así, a partir de las descripciones anotadas es posible prever que existe un inminente escenario de riesgo para la población civil que habita los barrios (...) Llano Verde, Los Comuneros, Mojica y El Retiro de la comuna 15 (...) que dicha población pueda ser objeto de múltiples violaciones de derechos fundamentales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario- DIH, por medio de amenazas, métodos para generar terror en la población civil como panfletos, llamadas, mensajes en redes sociales, correos electrónicos, etc.; asesinatos selectivos, desplazamientos individuales y masivos, y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, restricciones a la movilidad, confinamientos, violencia sexual y afectaciones de la población civil como efecto indiscriminado de las acciones bélicas, entre otras. Tal escenario se confirma por la presencia de presuntos integrantes de grupos armados ilegales como son; el ejército de liberación nacional (ELN), el grupo declarado en disidencia de las FARC, Guerrillas Unidas del Pacífico, y las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que igualmente bajo la práctica de instrumentalización, estarían violando los derechos a esta población.

(...)

Los habitantes de las tres comunas monitoreadas, exigen la implementación de programas sociales y la presencia de instituciones que enriquezcan el panorama social de las comunas, pues el fenómeno delincuencial y de violencia crece ostensiblemente, por lo tanto se requiere de un especial acompañamiento psicosocial y comunitario, de acciones localizadas que permitan prestar los elementos educativos correctos, que se facilite la integración vecinal y la construcción de bases de convivencia contra la imposición de fronteras imaginarias y la ilegalidad, y que las necesidades básicas sean verdaderamente intervenidas a fin de desplazar las afectaciones que han conducido a esta población al desastre. Así entonces, mientras la ciudad de Santiago de Cali continúe siendo el eje geopolítico del narcotráfico del sur occidente colombiano y las prácticas delincuenciales no encuentren freno en las autoridades; y las dinámicas de una población desplazada se encuentren rodeadas de vulnerabilidad, no se apreciarán cambios sustanciales en la superación de sus afectaciones.

Por todo lo anterior, de no tomarse las medidas de respuesta rápida podrían materializarse los escenarios de riesgos anteriormente descritos, por lo tanto, se hacen las siguientes recomendaciones.

III. Recomendaciones

De acuerdo a la situación de riesgo indicada, se solicita a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir los riesgos y amenazas.

1. A la alcaldía de Santiago de Cali y a la Gobernación del Valle, en coordinación con la Fuerza Pública, **implementar medidas de protección para garantizar la vida, libertad e integridad de la población civil que se ubica en los barrios pertenecientes a las comunas 14, 15 y 21, con el fin de evitar las acciones sicariales, extorsiones, amenazas de muerte, afectaciones a la población civil como consecuencia de acciones bélicas** y las demás acciones violentas de los grupos armados ilegales, y garantizar la seguridad, libre movilidad e integridad a la población civil.

3. **A la alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle en coordinación con la policía metropolitana de Cali, la implementación de cámaras de seguridad en los barrios y zonas registradas en este documento.**



4. A la Alcaldía de Santiago de Cali en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, implementar medidas que restrinjan el porte de armas de fuego en los barrios geográficamente descritos en este documento, fortalecer los recursos logísticos de las unidades de Policía ubicadas en esas zonas y reforzar los patrullajes en horas nocturnas, con el objetivo de hacer efectivas las restricciones al porte de armas de fuego.

5. A la alcaldía Municipal de Cali en coordinación con la Personería Municipal y la UNP, para que se evalúe de manera urgente la situación de los líderes comunitarios, así mismo implementar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física de la población señalada en riesgo y que estas medidas sean establecidas en consulta con las víctimas de manera individual y colectiva. Se sugiere la activación de espacios de coordinación institucional, encabezados por la alcaldía municipal en cada comuna para que se promueva de manera articulada y eficaz las medidas individuales y colectivas de protección. Se solicita, además, diseñar y aplicar medidas de protección individual y colectiva, especialmente orientadas a personas de especial protección constitucional en situación de vulnerabilidad, como las comunidades afrocolombianas y desplazadas.

6. A la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas - CIPRAT del Ministerio del Interior, apoyar la coordinación de la respuesta estatal en materia de prevención y protección por parte de las autoridades concernidas en el presente documento.


7. A la alcaldía Municipal de Cali y la personería municipal, implementar espacios de diálogo con las organizaciones de derechos humanos en las comunas descritas para identificar problemas potencialmente generadores de violación a los derechos humanos, así como requerir a las autoridades competentes la activación y concertación de medidas de protección de carácter colectivo, tendientes a neutralizar o mitigar el riesgo. (...)

10. A las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, se recomienda diseñar y ejecutar operaciones de registro y control permanente, para contrarrestar la acción violenta de los grupos armados al margen de la ley que afectan a los pobladores de las zonas descritas en amenaza en el municipio de Santiago de Cali, tendientes a garantizar los derechos a la vida, la integridad, libertad personal y la libre movilidad de la población civil entre otros. Procurar en conjunto con la administración municipal, un plan desarme en las comunas afectadas.

11. A las autoridades civiles y a la Fuerza Pública, informar de manera periódica a la Dirección del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las actuaciones y medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones formuladas en la presente advertencia conforme a lo previsto en la Corte Constitucional y la Ley 24 de 1992. Dicha información deberá ser allegada según lo estipulado en el artículo 15 y subsiguientes de la Ley 24 del 15 de diciembre de 1992, en concordancia con el Decreto 2124 (...). Subrayado y negrilla propio.

2.2.7. De conformidad con el acta de reunión No. 4161.010.3.2. de cuatro (04) de agosto de dos mil veinte (2020) de la secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali / Valle del Cauca cuyo objetivo era: “Realizar Jornada de trabajo con la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas” (Virtual), se consignó lo siguiente: “(…) ”



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

ACTA No. 4161.010.3.2.	FECHA:	04/ago/2020
	HORA INICIAL:	08:10 a.m.
	HORA FINAL:	11:20 a.m.
Objetivo: Realizar Jornada de trabajo con la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas (Virtual).		Virtual Plataforma Meet

ASISTENTES: Carlos Alberto Rojas Cruz- Secretario de Seguridad y Justicia-, Inés Marcela Medina Vargas -Contratista- (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: No Aplica
INVITADOS: No Aplica

• La lideresa Norma García solicita la palabra y comentó que terminando el año 2017 e iniciando el 2018 **surgen una serie de amenazas que fueron reportadas de manera oportuna pero que, a pesar de esto, no han recibido, hasta la fecha, una respuesta oficial**. Manifestó que es importante resaltar que **muchos de los casos que se han presentado a lo largo de los años tuvieron la oportunidad de haberse prevenido de manera oportuna pero que, debido a la falta de acompañamiento que suele evidenciarse por parte de las entidades competentes hacia los líderes y lideresas de la comunidad, no se manejan de manera eficiente para lograr su control**. Por todo lo anterior, junto con la participación de otros líderes sociales, se comentó la importancia de los procesos de prevención en el manejo y acompañamiento de las víctimas de la violencia.

• Se otorgó la palabra a la lideresa María Eugenia González quien manifestó que **desde hace varios años es evidente la presencia de una barrera entre los líderes y lideresas de la comunidad y las entidades garantes de sus derechos de seguridad haciendo principal énfasis, en la policía y el ejército**. Manifestó que dicha barrera es la que ha dificultado en gran medida el avance efectivo de los planes generados para la comunidad por lo que hace énfasis en la importancia del trabajo coordinado de las partes.

Asimismo, la señora María Eugenia dijo que, **la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas vulnerables no se encuentra únicamente a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP)** sino que es el territorio el que debe intervenir en muchos de los casos. Hace referencia a la situación actual, el liderazgo que muchos de ellos suelen desarrollar en las comunidades, tiende a afectar de manera directa a las pandillas o a los diferentes grupos que quieren desencadenar, de una forma u otra, un proceso de poder en los territorios. **Es por esto que, manifestó lo importante que es conocer de manera verídica y eficaz las competencias de cada una de las entidades responsables con el fin de lograr un adecuado manejo de dichas situaciones**.

En respuesta a esta intervención, el secretario Carlos Alberto Rojas Cruz expuso que se tendrá en cuenta lo manifestado por la lideresa por lo que es de vital importancia la formación de una mesa interna que permita tener máxima claridad sobre rutas, procesos, protocolos y procedimientos que serán manejados de manera eficaz en una próxima reunión. (...)

La Personera Esther Inés Romero, continua diciendo, “que llama la atención y como lo manifestaron los líderes, que debido a la pandemia se han quedado sin recursos porque la Política Publica en el tema de empleabilidad no es efectiva, no genera un impacto en las víctimas de Santiago de Cali y es aquí donde el Ministerio Publico hace un llamado, se sabe que se pasa por momentos difíciles y que esto nadie lo



esperaba, es un ejercicio del cual se está aprendiendo a vivir con el virus pero no por esto se debe dejar descuidada esta población tan vulnerable. Se sabe que algunos de ellos han logrado alguna estabilidad, pero otros están sumidos en la pobreza.” (...)

Con referencia al concepto de seguridad, se llevan dos años en la comisión, en el Subcomité y cuatro años con la administradora pasada tratando de obtener el concepto de seguridad por parte de la fuerza pública y se ha logrado. Como representante del Ministerio Público se solicita que realicen los procedimientos que sean necesarios para lograr obtener ese concepto de seguridad para la ciudad de Cali.

En referencia con las alertas tempranas revisadas de la Defensoría se encuentran las comunas 14 y 15 pero no se ha visto una revisión de esas alertas desde el 2018, la última revisión de la administración distrital fue en el año 2018. En este aspecto se solicita por parte de la administración se realice una revisión y unos avances en referencia a estas alertas tempranas para evitar tantas muertes de niñas, niños y jóvenes en estas comunas (Subrayado y resaltado propio.)

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar reunión con los tres casos de víctimas para abordar, analizar y establecer tratamiento a través de un seguimiento para garantizar la seguridad de las personas.	Inés Marcela Medida- Grupo de Acción de Emergencia- Contratista	11/agos/2020
Entregar Avantel a Equipo de Atención de Emergencias.	Unidad de Apoyo a la Gestión- Diego Ferney Sánchez Patiño	Por Definir
Programar cronograma de reuniones con los casos de víctimas, coordinar e informar al Secretario de Seguridad y Justicia.	Inés Marcela Medida- Grupo de Acción de Emergencia- Contratista	14/agos/2020
Realizar mesa interna con equipo de prevención para claridad de lineamientos, protocolos y responsabilidades de los entes que participan en la atención de víctimas.	Inés Marcela Medida- Grupo de Acción de Emergencia- Contratista, Stepany Tenorio - PISCC y Felipe Fernández- PSD- Contratista	05/ago/2020
Realizar Mesa previa con el objetivo de preparar temas de consejo de seguridad de víctimas.	Inés Marcela Medida- Grupo de Acción de Emergencia- Contratista	Por Definir
Realizar Consejo de Seguridad de Víctimas	Guillermo Londoño Ricaute- Subsecretario de Política de Seguridad-	Por Definir
Realizar Seguimiento a los casos de homicidios y amenazas a víctimas desde el observatorio	Giovanna Brand- Contratista-	Por Definir



Divulgar línea de Atención de ruta de atención de Emergencias.	Carolina Rodríguez-Contratista y Inés Marcela Medina- Contratista-	Por Definir
--	--	-------------

Firmas (responsables)

CARLOS ALBERTO ROJAS CRUZ
Secretario Despacho
Secretaría Seguridad y Justicia

INÉS MARCELA MEDINA
Contratista
Secretaría Seguridad y Justicia

NOTA: Se anexa fotos de evidencia compuesto por un (1) folio
Se anexa listado de asistencia compuesto por dos (2) folios
Se anexa presentación en Power Point compuesto por treinta y uno (31) folios

Elaboró: Diana Ospina – Contratista
Revisó: Marcela Medina- Profesional Contratista
Revisó: Magaly Valencia- Profesional Contratista

2.2.8. En acta de inspección a lugares –FPJ-9 de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 12 de agosto de 2020 se consignó lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA INCLUYENDO LOS HALLAZGOS Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS
<p>EL DIA 12/08/2020 LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DE LA POLICIA NACIONAL, Y EL CENTRO DE CONTROL PALACIO INFORMAN QUE EN LAS COORDENADAS N 03°22'54,53" W 76°30'11,36", BARRIO LLANO VERDE SE PRESENTAN UNOS HECHOS EN LOS CUALES FALLECEN CINCO JOVENES MENORES DE EDAD DE SEXO MASCULINO QUIENES PRESENTAN HERIDAS CAUSADAS CON ARMA DE FUEGO Y ARMA CORTO PUNZANTE HECHOS OCURRIDOS EL DIA DE AYER 11-08-2020 DONDE POR LAS DIFICULTADES DEL TERRENO Y LA POCA ILUMINACION SOLO SE REALIZO LA INSPECCION TECNICA A CADAVER Y POSTEIOR TRASLADO DE LOS CUERPOS AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, SE CONTINUA EL DIA DE HOY CON LAS DILIGENCIAS DE RIGOR EN EL SITIO REALIZANDO UNA BUSQUEDA MINUSIOSA Y DETALLA DE EMP QUE NOS PUEDAN APORTAR INFORMACION PARA ESTABLECER LOS MOVILES DE LOS HECHOS.</p> <p>DE INMEDIATO NOS DESPLAZAMOS AL LUGAR DE LOS HECHOS ANTES MENCIONADO. EL SEÑOR PT. NESTOR TAMAYO Y PT. JHONATAN PULGARIN CORRALES; IDENTIFICADOS COMO APARECE AL PIE DE SU FIRMA.</p> <p>AL LLEGAR AL SITIO EN MENSION SE DA COMIENZO A LA INSPECCIÓN A LUGAR DE LOS HECHOS, CONTANDO CON HORAS DE LA MAÑANA, TIEMPO SECO, ILUMINACIÓN NATURAL, SE OBSERVAN DOS ANILLOS DE ACORDONAMIENTO CON CINTA DE COLOR AMARILLO, INGRESAMOS AL SEGUNDO ANILLO DE ACORDONAMIENTO DONDE NOS ENCONTRAMOS CON UNA VIA EN TIERRA DESTAPADA DONDE SE OBSERVAN A CADA LADO UN CUULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR. A UN LADO DE ESTA VIA DESTAPADA Y POLVOROSA SE OBSERVA UNA PEQUEÑA VAHIA LA CUAL SE ENCUENTRA CUBIERTA DE PASTO Y SE PUEDEN OBSERVAN MUY DEFINIDOS LOS SURCOS Y</p>



LA FORMA COMO ESTA DISPUESTA LA CAÑA DE AZÚCAR CULTIVADA ALLI, PROCEDAMOS EN TONCES A REALIZAR UN BARRIDO MINUCIOSOS Y DETALLADO DEL LUGAR Y MEDIANTE EL METODO DE BUSQUEDA EN ESPIRAL SE EMPIEZAN HALLAR EMP LOS CUALES SE RELACIONARAN, ENUMERAN Y SE DESCRIMINAL ESPECIFICAMENTE TENIENDO EN CUENTA SU NATURALEZA Y FORMA.

EMP# 1 (1) LAGO HEMÁTICO Y SALPICADURAS DE SANGRE SOBRE PISO DE TIERRA.

EMP# 2 (1) LAGO HEMÁTICO Y SALPICADURAS DE SANGRE SOBRE PISO DE TIERRA.

EMP# 3 (1) LAGO HEMÁTICO Y SALPICADURAS DE SANGRE SOBRE PISO DE TIERRA.

EMP# 4 (1) LAGO HEMÁTICO Y SALPICADURAS DE SANGRE SOBRE PISO DE TIERRA.

EMP# 5 (1) CAMISETA EN TELA DE COLOR BLANCO HALLADA SOBRE PISO DE TIERRA.

EMP# 6 (1) LAGO HEMÁTICO Y SALPICADURAS DE SANGRE SOBRE PISO DE TIERRA.

EMP# 7 (1) GAFAS DEPORTIVAS DE COLOR NEGRO PLÁSTICA HALLADA SOBRE PISO DE PASTO

EMP# 8 (1) BOTELLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE AGUA A LA CUAL SE LE REALIZA EXPLORACIÓN LOFOSCOPICA EN EL SITIO.

EMP# 9 (1) BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR HALLADO A UN LADO DE U SURCO.

EMP# 10 (1) PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO SEMIDEFORMADO DE COLOR PLATEADO HALLADO CON UN DETECTOR DE METALES DEBAJO DEL LAGO HEMATICO DE SANGRE ALOJADO EN LA TIERRA

EMP# 11 ((1) (1) PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO SEMIDEFORMADO DE COLOR PLATEADO HALLADO CON UN DETECTOR DE METALES DEBAJO DEL LAGO HEMATICO DE SANGRE ALOJADO EN LA TIERRA

EMP# 12 (1) (1) PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO SEMIDEFORMADO DE COLOR PLATEADO HALLADO CON UN DETECTOR DE METALES DEBAJO DEL LAGO HEMATICO DE SANGRE ALOJADO EN LA TIERRA

EMP# 13 (1) ARMA CORTO PUNZANTE CON EMPUÑADURA DE MADERA CON PUNTA AFILADA EN FORMA DE PICA HIELO LA CUAL SE HALLA SOBRE UN SURCO DE LOS CULTIVOS DE CAÑA A UN LADO DE LA VÍA PRINCIPAL EN TIERRA.

SE CONTINUA CON LA BÚSQUEDA DE EMP O EF PERO NO SE OBTIENEN MAS RESULTADOS LOS EMP YA EN MENCIÓN SON FIJADOS FOTOGRÁFICAMENTE CON CÁMARA PROFESIONAL MARCA CANON REBEL XT TENIENDO EN CUENTA LOS DIFERENTES PLANOS FOTOGRÁFICOS, RECOLECTADOS Y EMBALADOS TÉCNICAMENTE POR LOS FUNCIONARIOS DEL LABORATORIO MÓVIL DE CRIMINALÍSTICA SIJIN MECAL PARA SER ENTREGADOS AL SEÑOR INVESTIGADOR LIDER PT. JULIAN MAURICIO BORBON CON REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA PARA SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS TÉCNICOS.

2.2.9. En acta de inspección técnica a cadáver –FPJ-10 de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 11 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645 se consignó lo que se relaciona a continuación, para efectos de brindar mayor claridad se informa que el menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** fue identificado como **víctima número 1**:



2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA INCLUYENDO LOS HALLAZGOS Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

LA CENTRAL DE RADIO DE LA POLICÍA NACIONAL REPORTA QUE EN EL ZONA RURAL BARRIO LLANO VERDE SE ENCUENTRAN AL PARECER 05 CUERPOS SIN SIGNOS VITALES, LOS CUALES PRESENTAN AL PARECER IMPACTOS CON ARMA DE FUEGO, EL FUNCIONARIO DE ENLACE DE LA POLICÍA CON LA FISCALÍA DA AVISO DEL CASO AL PERSONAL DE CONTROL LOS CUALES INFORMAN QUE EL DESPLAZAMIENTO LE CORRESPONDE A LAS UNIDADES DE LA SIJIN, COMO PATRULLA DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO SE DESPLAZA LA UNIDAD MÓVIL DE CRIMINALÍSTICA CON INDICATIVO ORO 8,

DE INMEDIATO NOS DESPLAZAMOS AL LUGAR DE LOS HECHOS, LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD MÓVIL DE CRIMINALÍSTICA LOS SEÑORES PATRULLEROS JHONY ANDRES UNAS, PT. DIEGO ALEXANDER TOLOSA ÁLVAREZ, PT. CARLOS CASTRO MAYOR IDENTIFICADOS COMO APARECE AL PIE DE SU FIRMA.

AL LLEGAR AL LUGAR ANTES INDICADO OBSERVAMOS QUE SE TRATA DE UN SECTOR DE SIEMBRA DE CAÑA DE AZÚCAR SE TOMA COMO PUNTO DE REFERENCIA AL LUGAR DE LOS HECHOS LAS SIGUIENTES COORDENADAS N 03°22'54,53" W 76°30'11,36" SE APRECIA UN ACORDONAMIENTO CON CINTA COLOR AMARILLO ATADA A EXTREMO Y EXTREMO DE LOS SURCOS DE CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚCAR, SE OBSERVA PERSONAL POLICIAL EN LAS AFUERAS DEL ACORDONAMIENTO, SE TOMA CONTACTO VERBALMENTE CON EL PERSONAL DE PRIMER RESPONSABLE EL CUAL ESTÁ INTEGRADO POR: IT. JOHANY CASTAÑEDA GARCIA CC. 181523457 Y PT. JESÚS YANDI C.C. 1112462144 CEL 3122326431 CUADRANTE 22-2 DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA LA MARÍA, LOS CUALES NOS INFORMAN LO SUCEDIDO Y NOS HACEN ENTREGA DE LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN TAL COMO LO ES LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS CUERPOS Y DEL FORMATO DEL PRIMER RESPONSABLE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EN EL CUAL SE LOGRE ENTENDER LO SIGUIENTE:

➤ **FECHA:** 2020-08-11, **DIRECCIÓN:** N 03°22'54,53" W 76°30'11,36" **BARRIO:** SECTOR DE LLANO VERDE, **ZONA:** RURAL, **COMUNA:** 15, **CARACTERÍSTICAS:** LOTE DE CAÑA **HORA PROBABLE DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS:** 20:30 HORAS, **PROTECCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS:** SI, **OBSERVACIONES DEL LUGAR DE LOS HECHOS:** SI ¿HUBO ALTERACION

Versión 12/11/05

DEL LUGAR DE LOS HECHOS? SI ¿POR QUÉ? AL MOMENTO DE LLEGAR SE ENCUENTRA AGLOMERACIÓN DE PERSONAL EN EL SITIO QUIENES MANIPULAN EL LUGAR DE LOS HECHOS. **INTERVINIENTES:** N/A, **ACTIVIDAD REALIZADA:** **INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE LOS HECHOS:** "SIENDO LAS 19:23 INGRESA UNA LLAMADA AL CAÍ CIUDAD JARDÍN INFORMANDO DE QUE AL PARECER HABÍAN VARIAS PERSONAS MUERTAS EN UNA TIENDA LLAMADA LAS FLORES EN EL SECTOR DE MELÉNDEZ, AL TOMAR CONTACTO TELEFÓNICO CON EL SEÑOR CARLOS OBREGÓN ABONADO TELEFÓNICO 315378360 NOS INDICA QUE QUE EL SECTOR DE LA VÍA NAVARRO POR EL BASURO ERA DONDE SE ENCONTRABAN DICHAS PERSONAS MEDIANTE DONDE EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN 05 CUERPOS SIN VIDA DE TÉS AFRO DESCENDIENTE SIN VIDA DE SEXO MASCULINO" SE ANEXA DICHA DOCUMENTACIÓN A LA RESPECTIVA DILIGENCIA.



UNA VEZ OBTENIDA LA DOCUMENTACIÓN Y LA INFORMACIÓN DE LO SUCEDIDO, PROCEDIMOS A INGRESAR AL ACORDONAMIENTO Y DAMOS POR INICIO A LA DILIGENCIA JUDICIAL DE INSPECCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS, SON HORAS DE LA NOCHE TIEMPO SECO ILUMINACIÓN ARTIFICIAL EMANADA POR VEHÍCULOS POLICIALES, LA CUAL ES ESCASA Y DIFICULTA UN POCO EL PROCEDIMIENTO DEBIDO A LAS ALTAS HORAS DE LA NOCHE, SE OBSERVAN GRAN CANTIDAD DE LOTES DE CAÑA DE AZÚCAR, DIFERENTES CAMINOS CON SALIDAS A DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CALI, SE OBSERVA QUE EL LUGAR DONDE SE MATERIALIZAN LOS HECHOS ES UN LOTE VALDIO EL CUAL ES RODEADO POR GRAN CANTIDAD DE LOTES DE CAÑA DE AZÚCAR EN ESTE SITIO SE HALLAN (05) CINCO CUERPOS SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, SE REALIZA FIJACIÓN FOTOGRÁFICA DEL LUGAR TAL Y CUAL COMO LO HALLAMOS PARA PRESERVAR EL MISMO, SE PROCEDE A REALIZAR UNA BÚSQUEDA MINUCIOSA POR TODA LA ZONA DEMARCADA POR EL ACORDONAMIENTO, OPTANDO POR EL MÉTODO DE BÚSQUEDA EN ESPIRAL DE ADENTRO HACIA AFUERA, CON EL FIN DE HALLAR ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA QUE SEAN ÚTILES A LA INVESTIGACIÓN, TENIENDO COMO RESULTADOS POSITIVOS SOLO EL HALLAZGO DE LOS CUERPOS SIN VIDA LOS CUALES SE ENUMERARON ASÍ:

EMP Y/O EF # 01: CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO EN POSICIÓN ARTIFICIAL DE CUBITO ABDOMINAL, TEZ NEGRA, ESTURA MEDIA, CONTEXTURA DELGADA DE ASPECTO CUIDADO, EL CUAL SE LO ENCUENTRA VISTIENDO CON (01) PANTALONETA DE COLOR AZUL, INTERIOR TIPO BÓXER COLOR GRIS Y SANDALIAS PLÁSTICAS DE COLOR AZUL CON BLANCO, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER NO SE LE HALLAN ELEMENTOS DE VALOR NI DOCUMENTACIÓN COMO TAL, NO SE LE APRECIAN SEÑALES PARTICULARES;

COMO SIGNOS EXTERNOS DE VIOLENCIA SE APRECIA:

- (01) UNA HERIDA EN REGIÓN OCCIPITAL,
- (01) UNA HERIDA EN REGIÓN MASETÉRICA, LADO DERECHO.

EMP Y/O EF # 02: CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, SE DESCRIBE EN EL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER SPOA 76001600193202006645 NO CONSECUTIVO DEL CADÁVER EMP Y/O EF NO: 2 DE 5.

EMP Y/O EF # 03: CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, SE DESCRIBE EN EL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER SPOA 76001600193202006645 NO CONSECUTIVO DEL CADÁVER EMP Y/O EF NO: 3 DE 5.

EMP Y/O EF # 04: CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, SE DESCRIBE EN EL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER SPOA 76001600193202006645 NO CONSECUTIVO DEL CADÁVER EMP Y/O EF NO: 4 DE 5.



EMP Y/O EF # 05: CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO, SE DESCRIBE EN EL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER SPOA 76001600193202006645 NO CONSECUTIVO DEL CADÁVER EMP Y/O EF NO: 5 DE 5.

SE FIJA FOTOGRÁFICAMENTE EL SITIO DE LOS HECHOS, EL ESTADO DEL CUERPO COMO SE ENCONTRÓ AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, ESTA FIJACIÓN SE REALIZA CON CÁMARA DIGITAL CANON EOS REBEL XSI, TENIENDO EN CUENTA LOS DIFERENTES PLANOS FOTOGRÁFICOS, POSTERIORMENTE EL CUERPO ES EMBALADO EN BOLSA PLÁSTICA DE COLOR BLANCO CON LOGO DE LA POLICÍA NACIONAL Y ES SOMETIDO A CADENA DE CUSTODIA PARA POSTERIORMENTE SER ENTREGADO A MEDICINA LEGAL, PARA QUE LE REALICEN LOS RESPECTIVOS EXÁMENES Y POSTERIOR ENTREGA DEL CUERPO A LOS FAMILIARES.

DURANTE LA DILIGENCIA EN EL LUGAR NO HACE PRESENCIA NINGÚN FAMILIAR O PERSONA QUE MANIFIESTE ALGÚN PARENTESCO CON LA VÍCTIMA, POR TAL MOTIVO NO SE DA A CONOCER EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 11,136 Y 137 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EN CUANTO AL DERECHO DE INTERVENIR EN TODAS LAS FASES DE LA ACTUACIÓN PENAL DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS SEÑALADAS EN LA NORMA, EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA.

CONOCE EL CASO LAS UNIDADES DE LA SIJIN CON INDICATIVO **BELGICA 2**, A CARGO DEL SEÑOR **PATRULLERO: BORBON GOMEZ JULIAN**, QUIEN ADELANTA LOS RESPECTIVOS ACTOS URGENTES DEL CASO.

DE ESTA MANERA DEJO PLASMADO EL PRESENTE INFORME PARA LOS FINES PERTINENTES, QUEDO A LA ESPERA DE CUALQUIER REQUERIMIENTO DE SU HONORABLE DESPACHO.

Nota 1: Amplie el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada insertando las filas necesarias, o anexe cuantos folios requiera relacionando el número de Noticia Criminal

Nota 2: Recuerde incluir el método de búsqueda y las condiciones medioambientales.

2.2.10. En el informe de investigador de laboratorio –FPJ-13 de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 27 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645 se registró:

Número Único de Noticia Criminal											
7 6 0 0 1 6 0 0 1 9 3 2 0 2 0 0 6 6 4 5											
Entidad	Radicado Interno.				Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo	
INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO – FPJ - 13 Este informe será rendido por la Policía Judicial											
Departamento	VALLE DEL CAUCA				Municipio	SANTIAGO DE CALI.		Fecha	2020 08 27	Hora	2 2 3 0
Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, se rinde el siguiente informe.											

1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME.

Solicitud Orden a la Policía Judicial No.5825734. FISCALIA 04 – ESPECIALIZADA – UNIDAD ESPECIAL FISCALES DE PRIORIZACIÓN - CALI.

(...)

ADENTRO HACIA AFUERA, CON EL FIN DE HALLAR ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA QUE SEAN ÚTILES A LA INVESTIGACIÓN, TENIENDO COMO RESULTADOS POSITIVOS SOLO EL HALLAZGO DE LOS CUERPOS SIN VIDA LOS CUALES SE ENUMERARON ASÍ:

(...)

EMP Y/O EF # 01: CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO EN POSICIÓN ARTIFICIAL DE CUBITO ABDOMINAL, TEZ NEGRA, ESTURA MEDIA, CONTEXTURA DELGADA DE ASPECTO CUIDADO, EL CUAL SE LO ENCUENTRA VISTIENDO CON (01) PANTALONETA DE COLOR AZUL, INTERIOR TIPO BÓXER COLOR GRIS Y SANDALIAS PLÁSTICAS DE COLOR AZUL CON BLANCO, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER NO SE LE HALLAN ELEMENTOS DE VALOR NI DOCUMENTACIÓN COMO TAL, NO SE LE APRECIAN SEÑALES PARTICULARES;

COMO SIGNOS EXTERNOS DE VIOLENCIA SE APRECIA:

- ☐ (01) UNA HERIDA EN REGIÓN OCCIPITAL,
- ☐ (01) UNA HERIDA EN REGIÓN MASETÉRICA, LADO DERECHO (...)"

"(...)



SE FIJA FOTOGRÁFICAMENTE EL SITIO DE LOS HECHOS, EL ESTADO DEL CUERPO COMO SE ENCONTRÓ AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, ESTA FIJACIÓN SE REALIZA CON CÁMARA DIGITAL CANON EOS REBEL XSI, TENIENDO EN CUENTA LOS DIFERENTES PLANOS FOTOGRÁFICOS, POSTERIORMENTE EL CUERPO ES EMBALADO EN BOLSA PLÁSTICA DE COLOR BLANCO CON LOGO DE LA POLICÍA NACIONAL Y ES SOMETIDO A CADENA DE CUSTODIA PARA POSTERIORMENTE SER ENTREGADO A MEDICINA LEGAL, PARA QUE LE REALICEN LOS RESPECTIVOS EXÁMENES Y POSTERIOR ENTREGA DEL CUERPO A LOS FAMILIARES "(...).

8.2. ANÁLISIS DEL CASO.

8.2.1. LA ESCENA.

Se documenta en la carpeta del caso que los cuerpo de cinco (5) menores, quienes respondían en vida a los nombres de LEIDER CARDENAS HURTADO -14 años-, JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA -16 años-, JAIR ANDRES CORTES CASTRO -14 años-, LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONES -15 años- y ALVARO JOSE CAICEDO SILVA -15 años- fueron encontrados en el entre suerte de un cultivo de caña de azúcar sobre las coordenadas N 03°22'54,53" - W 76°30'11,36", aledaño al barrio Llano Verde, en el municipio de Santiago de Cali departamento del Valle del Cauca.

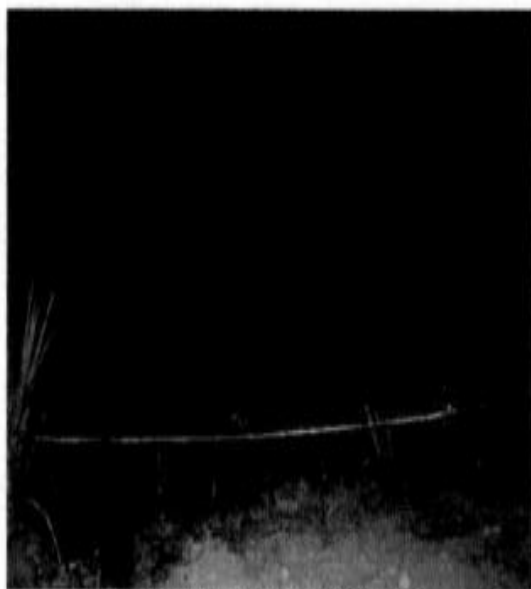


Imagen No. 1. IMG_2770JPG.



Imagen No. 2. IMG_2773JPG.

Las imágenes tomadas en la diligencia de inspección técnica a cadáveres 1 y 2 documentan en sentido sur – norte las características generales del terreno plano con ondulaciones y vegetación consistente de gramíneas y matas de caña de tamaño y follaje variado, del entre suerte ubicado sobre las coordenadas N 03°22'54,53" - W 76°30'11,36", aledaño al barrio Llano Verde, en el municipio de Santiago de Cali departamento del Valle del Cauca, área en la que se encontraron los cuerpo sin vida de cinco menores de edad.



Imagen No. 3. IMG_2774JPG.



Imagen No. 4. IMG_2775JPG.

Las tomas 3 y 4, complementarias a las anteriores, registros en sentido norte – sur, muestran desde otra vista las características ya descritas del área de hallazgo; se advierte también, que, a lado y lado, tanto en el extremo oriental como occidental del entre suerte la existencia de unos surcos o canales laterales y que en el extremo o límite sur empalma con un carreteable destapado.



Imagen No. 5. IMG_2780JPG.

La fotografía 5 documenta con mayor detalle el terreno y la vegetación, así como la disposición de los cuerpos en el entre suerte.

(...)

En la fotografía se hace evidente la distribución espacial, en sentido sur a norte, de los cuerpos de los hoy obitados que fueron encontrados sobre la superficie de soporte correspondiente al área de terreno central del entre suerte. Los tres primeros de ellos, registrados como EF/EMP# 1. LEIDER CARDENAS HURTADO -14 años-, EF/EMP# 2. JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA -16 años- y EF/EMP# 3. JAIR ANDRES CORTES CASTRO -14 años- adyacentes al borde o extremo oriental, mientras que los EF/EMP# 4. LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONES -15 años- y EF/EMP# 5. ALVARO JOSE CAICEDO SILVA -15 años- se observan sobre el costado contralateral u occidental.

(...)



Imagen No.22. IMG_2781JPG.



Imagen No.23. IMG_2790JPG.

Las fotografías muestran, en dos perspectivas, la posición natural de hallazgo en la escena primaria del cuerpo relacionado como EF/EMP# 1 correspondiente a quien en vida respondía al nombre de **LEIDER CARDENAS HURTADO -14 años**, interfecto encontrado en un decúbito abdominal, con la cabeza rotada e inclinada hacia la izquierda, con la hemicara derecha soportada sobre el terreno; el miembro superior derecho con leve abducción, flexión del antebrazo y la mano en sentido cefálico con los dedos semiflexionados, el miembro contralateral presentaba una disposición similar a la descrita, con la hemicara derecha de la víctima apoyada en el tercio distal del antebrazo y mano izquierda.

El tronco presenta leve desviación hacia la izquierda con respecto al eje central o longitudinal, las caderas conservan la alineación y están soportadas en su cara anterior. Los miembros inferiores se evidencian en extensión, en leve abducción y con soporte sobre toda sus caras anteriores -muslos,

rodillas y piernas-; el pie derecho rotado a la izquierda, sostenido en su borde externo, mientras que el contralateral, también rotado en el mismo sentido se observa apoyado en su borde interno.

Este menor de edad se encontró con su tronco desnudo, vestía, colocada de manera usual una pantaloneta tipo bermuda con fondo de color azul y de grabados, interior descrito como de tipo bóxer en color gris. Cabe resaltar, que ambos pies se encontraban calzados de manera habitual con chancletas abiertas en su parte posterior de las comúnmente denominadas de clase "croc's".

(...)

En el cuerpo **EF/EMP# 1. LEIDER CARDENAS HURTADO** se advierten en la cara lateral del tercio distal del brazo izquierdo, cara lateral del tercio proximal y en las caras lateral y anterior del tercio distal del antebrazo ipsilateral, manchas de sangre en patrones de transferencia y escurrimientos. Así también, patrones de igual características en la región peribucal y naso bucal del lado izquierdo. Se debe advertir de la disposición habitual de la única prenda que portaba el hoy interfecto, así como, que sus pies permanecían calzados con unas chancletas tipo "croc's".



Imagen No.34. IMG_2794JPG.

La imagen No. 34 muestra, una vez modificada la posición natural de hallazgo de quien en vida respondía al nombre de **LEIDER CARDENAS HURTADO**, la distribución sobre toda la hemicara derecha de manchas de sangre en patrones de transferencia y escurrimientos consecuentes con la posición natural de hallazgo de la víctima -decúbito abdominal-, así también, transferencias de vegetación seca y surcos con patrones indefinidos de las características de la superficie de apoyo sobre la piel, como soportes adicionales de la posición original, ya descrita.



Imagen No.35. IMG_2800JPG.



Imagen No.36. IMG_2801JPG.

(...)

8.2.5. HALLAZGOS DE NECROPSIA EN LOS CUERPOS.

Se extraen apartes literales pertinentes del INFORME PERICIAL DE NECROPSIA N°. 2020010176001001506 del 12-08-2020. Practicada a LEIDER CARDENAS HURTADO. 14 años. TI. 1028186826 – NO. CONSECUTIVO DEL CADÁVER EMP Y/O EF NO: 1 DE 5. Suscrito por MONICA MILLAN GIL. Médico Forense:

"(...)

"(...)

PRINCIPALES HALLAZGOS DE NECROPSIA

ADOLESCENTE MASCULINO IDENTIFICADO FEHACIENTEMENTE POR DACTILOSCOPIA
COMO LEIDER CARDENAS HURTADO
ADOLESCENTE MASCULINO QUIEN SUFRE ÚNICA HERIDA EN CABEZA CON PROYECTIL
ARMA DE FUEGO PRESENTANDO ORIFICIO DE ENTRADA Y SALIDA
Fenómenos cadavéricos tempranos
Ausencia de atención medica

GRUPO IDENTIFICACIÓN HUMANA



Trauma de tejidos blandos en cabeza
Hematoma subgaleal
Fractura de huesos de cráneo
Laceraciones cerebrales
Hemorragia subaracnoidea traumática
HALLAZGOS INCIDENTALES
Ninguno



Imagen No.49. IMG_2790JPG.



Imagen No.50. FB8A.2242JPG.

ANÁLISIS Y OPINIÓN PERICIAL

CONCLUSIÓN PERICIAL: La necropsia documenta adolescente masculino, semidesnudo, vestido de la cintura para abajo, con ausencia de signos de atención médica, quien presenta única herida con proyectil arma de fuego en cabeza región occipital, que le ocasiona, fractura de huesos de cráneo, laceraciones cerebrales y hemorragia subaracnoidea traumática, con orificio de salida en borde superior de cigomático derecho (Cara), lesiones que le ocasionan la muerte. Causa básica de muerte: Herida en cabeza con proyectil arma de fuego. Manera de muerte: Diagnóstico médico legal. Violento. Homicidio. (...)"

"(...)"

DESCRIPCIÓN DE FENÓMENOS CADAVERICOS: Cadáver frío al tacto, con rigidez parcial de todos los grupos musculares, presenta livideces rosadas que NO desaparecen a la digitopresión en cara, cuello y espalda generalizada, con esfacelación de la epidermis en espalda, reblandecimiento de los globos oculares, opacidad en las corneas y deshidratación de las mucosas

DATOS ANTROPOMETRICOS: Talla: 177 cm. Peso: 55.0-65.0 kg. Ancestro racial negro. Contextura delgada (...)"

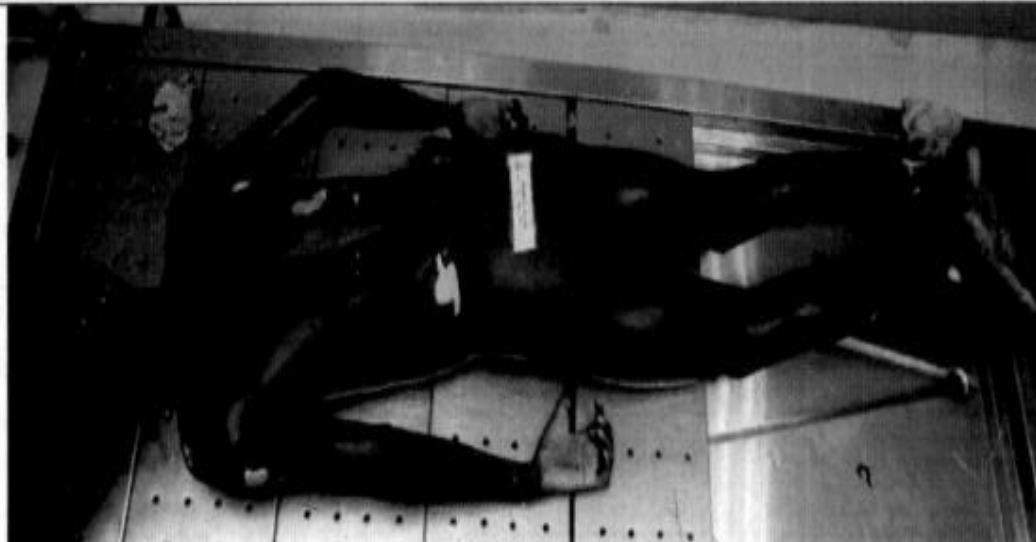


Imagen No.51. FB8A.2505JPG.

"(...)

EXAMEN INTERIOR

CABEZA Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

GALEA Y PERICRÁNEO: Heridas con proyectil arma de fuego, ver descripción de lesiones en detalle de lesiones

CRÁNEO: Heridas con proyectil arma de fuego, ver descripción de lesiones en detalle de lesiones

MENINGES Y ENCÉFALO: Heridas con proyectil arma de fuego, ver descripción de lesiones en detalle de lesiones

COLUMNA VERTEBRAL: Sin lesiones (...)"

"(...)

SISTEMA DIGESTIVO

LENGUA: Sin lesiones

FARINGE: Sin lesiones

ESÓFAGO: Sin lesiones

ESTÓMAGO: De forma y configuración usual, no se evidencian lesiones de tipo traumático ni otras alteraciones. La mucosa gástrica es normal. Contenido gástrico de aspecto alimentario, semidigerido, no identificable.

"(...)

SISTEMA OSTEO-MUSCULO-ARTICULAR

Grupos musculares adecuadamente formados, heridas con proyectil arma de fuego, al realizar disección posterior, cara, cuello y nudillos no se observan hematomas ni en planos superficiales ni profundos

DESCRIPCIÓN DE LESIONES TRAUMATICAS

DESCRIPCION DE LAS LESIONES POR ARMA DE FUEGO (CARGA ÚNICA)

1.4 Orificio de Entrada: De forma irregular bordes invertidos, con anillo de contusión concéntrico.



Sin presencia de tatuaje, ni ahumamiento, orificio de 0.5 x 0.6 milímetros a 7 centímetros del vértice y a 1.5 centímetros de la línea media posterior derecha en región occipital derecha

1.2 Orificio de Salida: De forma irregular bordes evertidos, orificio de 1.2 x 1 centímetro a 14 centímetros del vértice y a 5 centímetros de la línea media anterior derecha en borde superior de cigomático derecho

1.3 Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo, cuero cabelludo, hematoma subgaleal de 4 x 3 centímetros, fractura hueso occipital lado derecho, con craterización interna, perfora masa encefálica, causa laceraciones cerebrales, hemorragia subaracnoidea traumática, fractura fosa media y anterior lado derecho, fractura piso de órbita derecha, saliendo por el borde superior de cigomático derecho, lesiona musculo, tejido celular subcutáneo y piel por donde sale

1.4 Trayectoria anatómica: Plano horizontal: Supero-Inferior. Plano coronal: Postero-Anterior. Plano sagital: Izquierda-Derecha (...)"



Imagen No.52. IMG_2790JPG.



Imagen No.53. IMG_2795JPG.

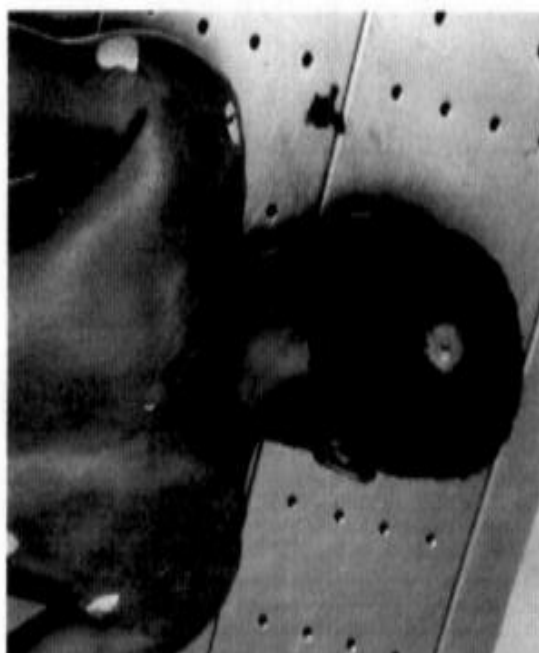


Imagen No.54. FB8A.2508 - 1JPG.



Imagen No. 55. FB8A.2509 - 1JPG.



Imagen No.56. FB8A.2488JPG.

OCCISO LEIDER CARDENAS HURTADO
2020010176001001506

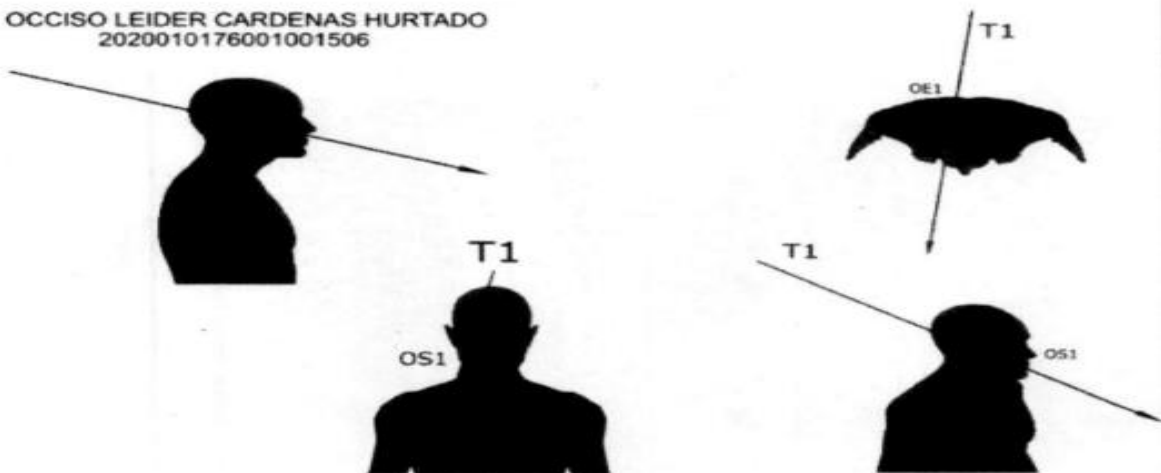


Diagrama trayectoria balística No. 1

(...)

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS / CONCLUSIONES

CONSIDERACIONES DE ANÁLISIS.

9.2. CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LA(S) ESCENA(S).

- El área general cuyos límites extensos los constituyen la calle 57, borde del barrio Llano Verde al norte, las extensas áreas de cultivo de caña de los ingenios al oriente, otras zonas de cultivos extendidas al sur y la carrera 50 y el caño paralelo a esta que separa a las urbanizaciones al occidente se consideran de manera extensa el lugar de los hechos.



Imagen 103.

- El entre suerte ubicado en las coordenadas N 3°22'54.8'' W76°30'11.45'' en las áreas de cultivos de los ingenios de ese sector se considera la escena primaria, o lugar de interacción final de las víctimas y su(s) victimario(s).



- Las características del terreno y generales que rodean este punto específico le proporcionan al (los) agresor(es) condiciones que facilitaron su accionar delictivo, máxime si estos de alguna u otra forma tenían conocimiento previo de este terreno y de las rutinas y situaciones que se desarrollan en este.

9.3. CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LAS VÍCTIMAS.

- Conforme a los principales hallazgos en la necropsia, se concluye que todas las víctimas mueren como consecuencia de las lesiones directas por paso de proyectil de arma de fuego en cráneo en una única acción de disparo para cada uno de ellos.
- Se advierte que solo sobre una de las víctimas de ejerció un trato diferencial, generándole otro tipo de lesiones, acciones individualizantes desplegadas por el (los) agresor (es) que implican parte de su motivación, ya sea previa o que se vio suscitada por la interacción en el momento propiamente dicho.

9.4. CORRELACIÓN DE HALLAZGOS - ANÁLISIS CONDUCTUAL.

Con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados y entregados para análisis, a continuación, se plantean los eventos que probablemente hicieron parte de cada uno de los tres estadios en los cuales se desarrollaron los hechos que son materia de investigación y que terminaron en la muerte del grupo de jóvenes quienes en vida respondían a los nombres de: 1. LEIDER CARDENAS HURTADO -14 años-, 2. JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA -16 años- 3. JAIR ANDRES CORTES CASTRO -14 años- 4. LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONES -15 años- 5. ALVARO JOSE CAICEDO SILVA -15 años.

(...)

Durante.

Suele ser un episodio corto que se circunscribe al momento en que se materializa el ataque. La correlación de los hallazgos tanto en la escena como en las víctimas indican que en este acto se generó una violencia de tipo instrumental en contra de los hoy occisos 1. LEIDER CARDENAS HURTADO -14 años-, 2. JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA -16 años- 3. JAIR ANDRES CORTES CASTRO -14 años- 4. LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONES -15 años- 5. ALVARO JOSE CAICEDO SILVA -15 años.

Siendo así, con al menos el conocimiento previo del ingreso y del número mínimo de personas que cometían la acción, se generaron una serie de actos por parte del – los agresor(es) que basados en la comprensión que tenían de las dinámicas que se desarrollan en esos predios y de las características del terreno, emprendieron maniobras que les permitieron interceptar, mediando algún tipo de sorpresa a los jóvenes; una vez alcanzado este primer objetivo, se desplegaron manejos de control y sometimiento grupal, en las que se debió dejar muy en claro la superioridad y capacidad ofensiva de los agresores, reflejada en la pasividad que se advierte por parte de las víctimas al no intentar huir o no existir evidencia mayor de maniobras de defensa por parte de los hoy interfectos.



Una vez bajo control se ejercen acciones de sometimiento de refuerzo que permiten al – los agresor (es) posicionar a las víctimas tal y como se encontraron dispuestas en la escena primaria, aquí **todas ellas muestran que fueron alineadas y colocadas de rodillas, en franca indefensión**, por la limitación propia que esta posición condiciona para la movilidad, sus miembros superiores en dirección cefálica y sus cabezas en flexión anterior, **lo que facilitó acciones de disparo únicas en contra de segmentos específicos de la anatomía** de cada uno de ellos -regiones parietales y occipitales-, lo que permite, al correlacionar las características del terreno, la posición de las víctimas al momento en que se dio cada acción de disparo único en su contra, inferir que **la posición de disparo de la boca de fuego de la única arma que se accionó siempre permitió al victimario encontrarse atrás y en una posición desde un nivel superior con respecto a sus víctimas.**

Cabe señalar que los aspectos antes relacionados no se cumplieron en su totalidad en el caso particular de la víctima identificada como LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONES en el que sus lesiones denotan algún tipo de **violencia de carácter expresiva**, lo que tiene sustento objetivo y técnico científico en el hecho que se sometió a **cortes en el cuello que no condicionaron su muerte pero que se constituyen en actos directos y personalizados para causar dolor**, una vez se alcanzó este objetivo, se procede a la **acción de disparo única en contra de esta víctima**, también en una posición **estando el victimario atrás de este, pero en este caso en una línea de terreno en un plano inferior con respecto a su objetivo.**

En lo que concierne a los tipos de violencia empleados se consigna en diferentes apartes de la literatura consultada:

"(...)

	Expresiva	Instrumental
Motivación primaria	La violencia en sí misma	Un fin distinto a la violencia
Qué gana el agresor	mediante la violencia No hay ganancia material	Puede ganar un objeto material o inmaterial
Evidencia de rabia extrema o ira	Violencia como auto refuerzo, extrema crueldad, múltiples heridas o armas, violación, agresiones postmortem.	Asesinato "profesional" (ej. Un tiro detrás de la cabeza)

2. (...)"

9.6. CONCLUSIONES:

1. Toda el área geográfica descrita dentro de los límites naturales o artificiales extensos constituidos por la calle 57, borde del barrio Llano Verde al norte, las extensas áreas de cultivo de caña de los ingenios al oriente, otras zonas de cultivos extendidas al sur y la carrera 50 y el caño paralelo a esta que separa a las urbanizaciones al occidente se consideran de manera extensa **el lugar de los hechos.**



Imagen 103.



- II. El entre suerte ubicado en las coordenadas N 3°22'54.8" W 76°30'11.45" en las áreas de cultivos de los ingenios de ese sector se considera la escena primaria, o lugar de interacción final de las víctimas y su(s) victimario(s).

(...)

- III. La secuencia de eventos, estructurando una línea de tiempo objetiva y lógica permite concluir que la ventana de la muerte de los jóvenes se circunscribe a las 11:30 horas del 11-08-2020 y que el rango en el que se desplegaron las acciones en las que se dieron las muertes se cierra entre las 12:15 y las 14:00 horas de ese 11-08-2020. Esta conclusión tiene soporte técnico científico en hallazgos de necropsia tales como los contenidos gástricos, el análisis de fenómenos cadavéricos, quemaduras por exposición al sol, así como algunas referencias directas e indirectas de hechos que ocurrieron ese día en el sector.

(...)

- V. Lo documentado en el expediente relativo a la hora de ingreso de las víctimas y demás circunstancias que dan cuenta de cómo se desarrollaron los hechos, así como indicadores en la escena que dan cuenta de todo un contexto de control y sometimiento, orientan a inferir un proceso mínimo de ideación, planificación y consecución de medios con el cual el - los victimario(s) se procuró (raron) los elementos y la oportunidad para alcanzar su objetivo.

- VI. En contra de las víctimas se produjo un ataque directo mediado por la sorpresa, que permitió su control y sometimiento, sumado al despliegue de una fuerza letal, con acciones de disparo únicas, con la anulación previa de toda posibilidad de reacción o defensa efectiva de los hoy occisos, en las que el número mínimo de participantes se estima en tres.


- VII. El contexto del caso y las acciones desplegadas en el hecho criminal denotan una acción coordinada, con roles y tareas específicas por parte de los participantes que permitieron el desarrollo y el éxito de su objetivo, enmarcados dentro de los parámetros mínimos que se describen en un modus operandi.

- VIII. En contra de todas las víctimas se desplegó una violencia de tipo instrumental, advirtiéndose en el caso particular de LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONES un trato diferencial con componentes adicionales de violencia expresiva.

(...)"



2.2.11. En el informe de perfilación criminal de fecha 27 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645 se registró:

Página 1 de 27	PROCESO DESARROLLAR INVESTIGACIÓN JUDICIAL	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2IJ-FR-0011		
Fecha: 09/08/2017	INFORME DE PERFILACIÓN CRIMINAL	
Versión: 0		


N° PROCESO												
7	6	0	0	1	6	0	0	0	1	9	3	2
Dpto.	Mpio	Ent	U. Receptora			Año			Consecutivo			

Departamento Valle del Cauca Municipio Santiago de Cali Fecha 27/08/2020 Hora: 17:00

De conformidad con lo estipulado en los artículos 255, 257, 261, 275, 373, 405, 415, 416 y 422 del Código d

(...)

6. VICTIMOLOGÍA

		VÍCTIMA 1
		
Nombre	LEIDER CARDENAS HURTADO	
Alias	N/A1	
Tarjeta de identidad	1.028.186.826	
Raza	Afrodescendiente	
Sexo	Masculino	
Edad	14 años	
Fecha y lugar de nacimiento	No fue documentado	
Talla	1.77	
Contextura	Delgada	
Escolaridad	No registra	
Dirección de domicilio	Cra. 46 C No. 56 I 15	
Teléfono	3178739058	
Señales particulares	No registra	
Registro SPOA	No registra	
Antecedentes penales y/o contravencionales	No registra	
Uso de alcohol o drogas	No se documentó	
Historial Familiar	Madre: Jhoana Cardenas Hurtado	

(...)



7.2. Descripción de la víctima en el lugar de los hechos

7.2.1. Víctima 1 LEIDER CÁRDENAS HURTADO

Se aprecia cuerpo sin vida de sexo masculino en posición de cubito abdominal, cabeza rotada a la izquierda con hemicara derecha sobre la superficie de soporte, extremidades superiores en semi flexión y abducción, tronco con leve rotación a la izquierda, extremidades inferiores en extensión; al momento de la inspección técnica a cadáver no se le hallan elementos de valor ni documentación como tal, no se le aprecian señales particulares; como signos externos de violencia; se aprecia (01) una herida abierta en región occipital, (01) una herida abierta en región maseterica, lado derecho, esfacelación de región dorsal derecha y escapular izquierda, se aprecian manchas rojizas consistentes con sangre en patrón de flujo y transferencia sobre la hemicara y mano derecha, viste pantaloneta de color azul, interior tipo bóxer color gris y sandalias color azul con blanco (ver imágenes de apoyo 3 a 6).



Imagen de apoyo No. 05

Imagen de apoyo No. 06

(...)

➤ VICTIMA 1: LEIDER CARDENAS HURTADO

(...) Principales hallazgos: Adolescente masculino quien sufre única herida en cabeza con proyectil arma de fuego presentando orificio de entrada y salida, fenómenos cadavéricos tempranos, ausencia de atención médica, trauma de tejidos blandos en cabeza, hematoma subgaleal, fractura de huesos de cráneo, laceraciones cerebrales, hemorragia subaracnoidea traumática.

Hallazgos incidentales: Ninguno

Conclusión pericial: La necropsia documenta adolescente masculino; semidesnudo, vestido de la cintura para abajo, con ausencia de signos de atención médica, quien presenta única herida con proyectil arma de fuego en cabeza región occipital, que le ocasiona, fractura de huesos de cráneo, laceraciones cerebrales y hemorragia subaracnoidea traumática, con orificio de salida en borde superior de cigomático derecho (Cara), lesiones que le ocasionan la muerte.

Causa básica de muerte: Herida en cabeza con proyectil arma de fuego

Manera de muerte: Diagnóstico médico legal. Violento. Homicidio (...)

(...)



i. **Uso de la fuerza:** el uso de la fuerza se refiere a la cantidad de fuerza utilizada por el agresor durante un ataque (Turvey, 2016). Tomando como referencia los protocolos de necropsia, así como las inspecciones técnicas a cadáver, se puede inferir que la cantidad de fuerza utilizada contra las víctimas, corresponde a **Fuerza-Letal⁸**, los agresores realizaron lesiones con arma de fuego a las cinco (5) víctimas, adicionalmente, y posterior al disparo letal, al menor de edad LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONES, le produjeron heridas incisas en el cuello, lo cual sugiere una conducta más allá de la necesaria por parte del agresor, para provocarle la muerte.

i. **Respuesta de la Víctima:** se refiere a la reacción de la víctima a la conducta del agresor (Turvey, 2016).

No se evidencia respuesta por parte de las víctimas, ante la ausencia de heridas defensivas y de ataduras en los cuerpos; pero no se descarta que los hoy occisos hayan reaccionado ante la presencia o amenaza de los agresores, hubiesen huido o se hubiesen enfrentado con alguno de sus victimarios, quienes posteriormente los sometieron y los concentraron en el lugar de disposición de los cuerpos.

(...)

✓ se puede inferir de manera razonable que la muerte violenta de las cinco víctimas menores de edad, **se pudo ejecutar en un tiempo no superior a 20 minutos**, lo anterior tiene sustento en que para someter a las víctimas de la manera en que fueron encontradas, no se necesita de mucho tiempo, atendiendo que fue ejecutado con la participación de más de dos personas, con tareas concertadas como seguridad, sometimiento de las víctimas y ejecución de las muertes violentas.

Asimismo teniendo en cuenta declaración jurada del señor JAIRO MEZA, vigilante que se encontraba el día de los hechos en el sector llamado como Llano 1, y sobre las 12:00 a 13:30, reporta haber escuchado tres voces diferentes, en horas cercanas a la ocurrencia de los hechos reportando lo siguiente: "escucho por el radio que tenía una voz que reporta "que ya había atrapado a uno y que subiera" otro le contesta "ya voy subiendo", seguidamente una tercera voz por radio reporta "estoy persiguiendo a otro..." Lo anterior puede guardar relación con que los menores lograron reaccionar al momento que fueron abordados en el punto de contacto y los victimarios consiguieron controlarlos de manera ágil y rápida, utilizando armas de fuego y cortopunzante; posteriormente a la agrupación de las víctimas en el lugar de disposición, los agresores someten, golpean y posterior impactan con proyectiles de arma de fuego sobre la humanidad de los menores y emprenden la huida.

(...)

Teniendo en cuenta la descripción de las lesiones de las víctimas plasmadas en los informes periciales de necropsia, los planos topográficos del lugar de los hechos y la evidencia hallada durante la inspección técnica a cadáver, el grupo de perfiladores asignados al caso, realizó diligencia de inspección a lugares con fines de reconstrucción el 25/08/2020 a las 09:00, con el propósito de recrear las dinámicas en que las víctimas fueron ultimadas, para ello se emplearon auxiliares de Policía como modelos de las víctimas (Ver Anexo 2. Acta de Inspección a Lugares), y como resultado se obtuvo la posición de cada una de las víctimas al momento de recibir el disparo letal, atendiendo la trayectoria generada por los proyectiles y las características del terreno, atendiendo la región anatómica impactada y la boca del arma de fuego como se indica a continuación:

(...)

DINÁMICA RESPECTO A LA VÍCTIMA 1

Leider Cárdenas
Hurtado



Inspección Técnica a Cadáver



Imagen de apoyo No. 23

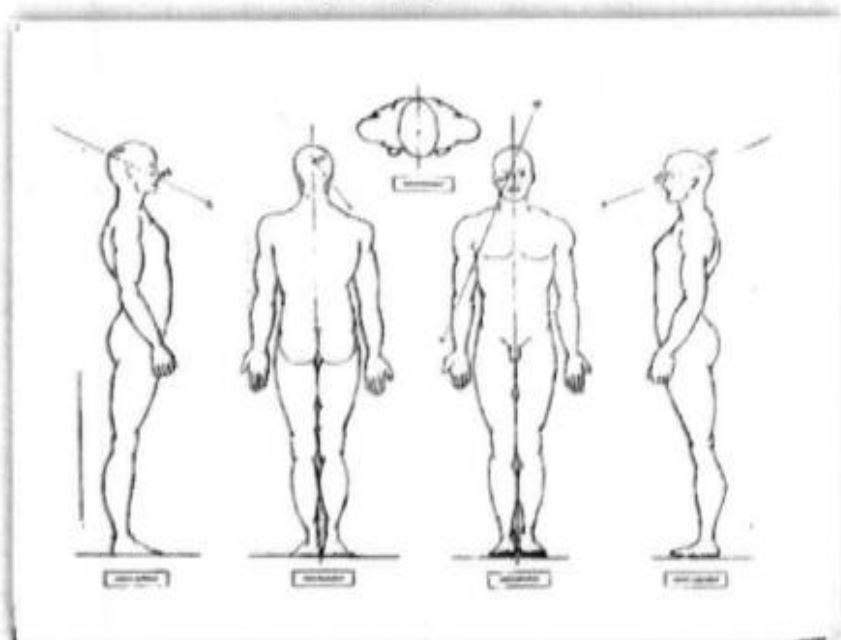


Imagen de apoyo No. 24



Imagen de apoyo No. 25

Dinámica T1: La materialización indica que la boca de fuego del arma se encontraba en la parte posterior de la víctima, a la derecha, en un plano superior y a una distancia mayor de + 1.51 m, respecto a la región anatómica impactada; hallazgo técnico que permite inferir de manera razonable, que la víctima al momento de recibir el impacto se encontraba en posición de cubito abdominal con las extremidades superiores flexionadas y la cabeza con rotación levemente a la izquierda.

(...)



8. Perfil Criminal

Las características del perfil criminal en el método deductivo deben ser el resultado directo de la reconstrucción del delito y las características del lugar de los hechos asociadas con el victimario, algunos que se pueden inferir acerca del perfil del agresor desconocido son los siguientes:

2.7.1 Conocimiento del lugar de los hechos: teniendo en cuenta el lugar de los hechos y las diferentes dinámicas descritas en este informe, frente a las diferentes conductas ejecutadas por los agresores, se puede inferir que los agresores, si conocían el lugar de los hechos, lo anterior apoyado en que ejecutaron la conducta en horas del día, con plena seguridad, puesto que sabían que en este lugar, era poco transitado y no iban a ser observados ni descubiertos fácilmente, tenían confianza que al detonar el arma de fuego no iban a ser escuchados por vecinos del sector o trabajadores de la zona.

2.7.2 Actos contradictorios: un acto contradictorio que se evidencia dentro del comportamiento de los agresores, tiene que ver con la posible utilización de medios de comunicación como lo fueron radios de comunicación que alertaron al señor JAIRO ANTONIO MEZA ROJAS, quien indica haber escuchado por el radio que tiene de dotación escuchar sobre las 12:00 a 13:30, reportó haber escuchado tres voces diferentes en horas cercanas a la ocurrencia de los hechos reportando lo siguiente: "escucho por el radio que tenía una voz que reporta "que ya habla atrapado a uno y que subiera" otro le contesta "ya voy subiendo", seguidamente una tercera voz por radio reporta "estoy persiguiendo a otro..."

2.7.3 Conocimiento de la víctima: se puede inferir a partir del análisis de los elementos entregados, que había un conocimiento previo de la víctima, teniendo en cuenta entrevistas anteriores donde presuntamente otros niños y adolescentes fueron víctimas de amenazas por parte de hombres con armas de fuego, donde se relaciona que fueron comparados con fotografías, como si estuvieran buscando a una persona en específico, a partir de testimonio recopilado en entrevista de fecha 22/08/2020, donde la señora LAURA VALENTINA MENA OSORIO, relaciona que por el lugar ya se encontraban buscando a alguien que al parecer se encontraba realizando hurtos en el sector.

2.7.4 Conocimiento de métodos y materiales: del análisis de los medios de prueba, se puede deducir un conocimiento del manejo de armas de fuego, teniendo en cuenta que las cinco (05) víctimas fueron ultimadas con disparos a larga distancia atacadas cada una con un proyectil de arma de fuego, causándoles la muerte, a una distancia intermedia alta, la cual corresponde a aquellos disparos realizados a distancias comprendidas entre ± 61 cm a ± 150 cm, ya que los bordes de orificio de entrada serán regulares y el anillo de contusión, abrasión y limpieza se enmascaron semejando uno solo, desaparece totalmente el ahumamiento y el tatuaje verdadero.

2.7.5 Evidencia de la habilidad criminal: de acuerdo a la información del presente proceso se puede inferir que la habilidad criminal de los actores criminales está definida a partir de algunas de las siguientes características:

- Los agresores conocen el manejo de las armas de fuego.
- Conocen la escena y sus alrededores, pues esto generó la ejecución de la conducta delictiva, sin ser observados o escuchados por habitantes o trabajadores del sector.



2.2.12. En el informe de investigador de campo –FPJ - 11 de fecha 14 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645 se registró:

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11												
Este informe será rendido por la Policía Judicial												
Departamento	Valle	Municipio	Cali	Fecha	2020	08	14	Hora	0	7	0	0

(...)

7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los resultados)
TENIENDO EN CUENTA HECHOS DE SANGRE ACONTECIDOS EL PASADO 11 DE AGOSTO DE 2020 EN EL SECTOR DE NAVARRO COORDENADAS COMUNA 15 DE CALI, DONDE FUERON VILMENTE ASESINADOS 05 ADOLESCENTES CON PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO Y ARMA BLANCA, EN UNA ZONA SEMIURBANA CON CULTIVOS DE CAÑA DE AZÚCAR.
LABORES DE VECINDARIOS
MEDIANTE LABORES DE CAMPO E INDAGACIONES ADELANTADAS POR UNIDADES JUDICIALES SE LOGRA OBTENER QUE LAS VICTIMAS SALIERON EN GRUPO DEL BARRIO LLANO VERDE CON RUMBO A LOS CULTIVOS DE CAÑA DE ESA JURISDICCIÓN, LUGAR DONDE FUERON HALLADOS LOS CUERPOS SIN VIDA POR PARTE DE TRABAJADORES DE ESE SECTOR ESPECÍFICAMENTE POR LOS SEÑORES RIQUELIO ANGEL SANCLEMENTE CARABALÍ Y CARLOS HUMBERTO OBREGON MENA

(...)."

2.2.13. En el informe de investigador de campo –FPJ-11 de fecha 12 de agosto de 2020 se consignó lo siguiente:

Número único de Noticia Criminal												
7 6 0 0 1 6 0 0 0 1 9 3 2 0 2 0 0 6 6 4 5												
Entidad	Radicado Interno			Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo			

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11											
Este informe será rendido por la Policía Judicial											
Departamento	VALLE	Municipio	SANTIAGO DE CALI	Fecha	2020-08-12	Hora	1	7	0	0	

(...)

4. ACTUACIONES REALIZADAS
Siendo las 23:00 horas del día 11-08-2020, se inicia desplazamiento a la zona rural de Llano Verde, ubicada en las coordenadas geográficas 03°22'54.53"N 76°30'11.36"W, nos dirigimos en compañía del y el señor IT. Sergio Alexander Moreno, Investigador del caso y los integrantes del laboratorio móvil e Criminalística los señores Jhonny Andres Unas, PT. Diego Alexander Tolosa Álvarez, PT. Carlos Castro Mayor.
Una vez se llega al lugar y de acuerdo a las indicaciones del señor investigador, se da inicio a la actividad topográfica siendo las 23:31 del 11-08-2020, procediendo a realizar la orientación geográfica (norte magnético), procediendo a realizar la orientación geográfica (norte magnético), se inicia la fijación topográfica tomando las coordenadas geográficas posteriormente se continua con la fijación del sitio y los occisos, es d anotar que según información del primer respondiente hubo alteración del lugar de los hechos por que al momento de llegar se encuentra aglomeración de personal en el sitio quienes manipulan el lugar de los hechos.
La actividad de topografía judicial se realizó aplicando el procedimiento de levantamiento y fijación topográfica teniendo en cuenta los siguientes pasos: observación, familiarización, ubicación, orientación geográfica y documentación.

(...)



Entidad		Radiado Interno		Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora		Año		Consecutivo	
				360016000193202006645											

BOSQUEJO TOPOGRÁFICO -FPJ- 16											
Este formato será diligenciado por Policía Judicial para fijar el lugar de los hechos											
Departamento	Municipio	Fecha	Hora								
VALL	Cali	2020	08	11	23	31					

TABLA DE CONVENCIONES	
1 2 3 4 5	Cuerpos
SIN VIDA SEXO MASCULINO	
VIA: DISTANCIA EN METROS	
NORTE MAGNETICO	
PR: PUNTO DE REFERENCIA	

Lugar de diligencia	Servidor que elaboró	Identificación
03°22'54.53" N 76°30'11.36" W SECTOR LLANO VERDE	Guillermo Alfonso Tosne	106169493A

Teléfono	Correo electrónico
3218509248	guillermo.tosne@correo.policia.gov.co

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Entidad		Radiado Interno		Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora		Año		Consecutivo	
				360016000193202006645											

BOSQUEJO TOPOGRÁFICO -FPJ- 16											
Este formato será diligenciado por Policía Judicial para fijar el lugar de los hechos											
Departamento	Municipio	Fecha	Hora								
VALL	Cali	2020	08	11	23	31					

TABLA DE CONVENCIONES	
1 2 3 4 5	Cuerpos
SIN VIDA SEXO MASCULINO	
PR: PUNTO DE REFERENCIA	
NORTE MAGNETICO	
DISTANCIA EN METROS	

Lugar de diligencia	Servidor que elaboró	Identificación
03°22'54.53" N 76°30'11.36" W SECTOR LLANO VERDE	Guillermo Alfonso Tosne	106169493A

Teléfono	Correo electrónico
3218509248	guillermo.tosne@correo.policia.gov.co

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.



2.2.14. En la declaración jurada –FPJ-15 de fecha 26 de agosto de 2020 se consignó lo siguiente:

Número Único de Noticia Criminal										
7 6 0 0 1 6 0 0 0 1 9 3 2 0 2 0 0 6 6 45										
Entidad	Radicado Interno				Departam	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

DECLARACIÓN JURADA – FPJ - 15	

Ciudad CALI , VALLE DEL CAUCA D 26 M 08 Año 2020 Hora 15:38 Lugar EDIFICIO SANTA MONICA – C.T.I

El suscrito servidor, identificado como aparece al pie de la firma, procede a recibir declaración jurada al señor (a) **JHON ALEXANDER VERA OCAMPO** Identificado (a) con cedula número 1.112.481.431 la dirección de residencia con efectos de notificación es por medio del investigador que toma la diligencia, con el propósito de proteger la vida del testigo al igual que la de su núcleo familiar
Correo electrónico y redes sociales: no aporta

En virtud a lo consagrado en la Constitución Política y las Leyes que rigen la presente diligencia, se resalta al declarante la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra el que declare falsamente, para lo cual se lee el artículo 442 C.P.; se le informa que no está obligado a declarar contra sí mismo, cónyuge o compañero (a) permanente, o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, de afinidad, o civil, ni a declarar sobre aquello que se la ha confiado o allegado a su conocimiento a razón de su ministerio, profesión u oficio.

Se procede a tomar el juramento: Indicándole la responsabilidad penal que asume con el juramento, ¿jura usted, decir toda la verdad, en la declaración que va a rendir? Si xxx NO __ PREGUNTADO: Sobre sus anotaciones personales y civiles expresó: Nombres y Apellidos **JHON ALEXANDER VERA OCAMPO** edad 26 años, estado civil UNION LIBRE, grado de instrucción técnico en sistemas, profesión oficio/ocupación supervisor **empresa** de vigilancia control interno y transporte sas natural _____ (se le pregunta qué tipo de relación tiene con el indiciado, imputado, víctima o denunciante y si lo conoce) NINGUNA

Realice las preguntas necesarias y conducentes a los hechos investigados.

Preguntado: cual es su ocupación actual, **Respuesta:** en la actualidad me desempeño como asistente de talento humano en la **empresa** control interno y transporte sas, **Preguntado:** que tiempo lleva laborado en dicha **empresa** y cuales son sus funciones, **Respuesta:** llevo laborando de .05 a 06 años, mis funciones **coordinar al personal en los puestos de servicio, manejar el tema de seguridad social,** **Preguntado:** detalle a que se refiere cuando dice coordinar el personal, **Respuesta:** me refiero que si piden un servicio algunos de los ingenieros de la obras que cuidamos, me toca ir a buscar quien esta disponible. Entregar los uniformes entre otras cosas, **Preguntado:** vamos a precisar sobre los hechos del día 11 de agosto de 2020 donde fueron asesinados con arma de fuego cinco adolescentes en los cañadulzales de la finca las flores, **Respuesta:** me entere de la noticia por una llamada del vigilante Estiven Sandoval Montaña, me dice que habían encontrado unos muertos en el cañal y que pasaba gente gritando, en moto y a pie, después de eso el señor Neil Márquez me envió una noticia donde hablaban de los hechos, con respecto a esos hechos el día siguiente 12 de agosto de 2020, le pregunté al señor Juan Carlos Loaiza que si sabía que había pasado y



él me dijo que no sabía nada, pero lo note muy nervioso pero no seguimos hablando de tema, ya el día sábado 22 de agosto de 2020 en horas de la mañana, le pregunte a Juan Carlos Loaiza porque había cambiado de moto, ya que él tenía una moto xtz blanca y ese día lo vi en una moto tvs apache blanca, me dijo que la moto la tenía el primo y por eso se había venido en esa, se notaba uy nervioso y me dijo sobre lo que me había preguntado la fiscalía en las entrevistas, le conteste que lo normal sobre mi rutina el día 11 de agosto, le pregunte que si sabia algo sobre el tema de los muchachos muertos y me contesto "se cogio la cabeza y se puso como recordando y lamentándose, me dijo la verdad Jhon ese día estuve presente cuando ocurrió el suceso" le pregunte que si fue el que los mato me dijo "no, que él estuvo ahí presente con Jefferson el que maneja una maquina del consorcio que nosotros cuidamos" le dije que quien había sido, no me respondió, le pregunte sobre cómo ocurrieron los hechos y me dijo que ellos iban saliendo cuando vieron que venían los muchachos, el mono les dijo que se devolvieran y los menores sacaron los cuchillos y se empezaron como a aletear, de ahí el mono los apunto y les dijo que se tiraran al piso, no me especifico si los metieron al cañal o que paso, pero que cuando estaban tendidos les quitaron los cuchillos y Jefferson los tiro al cañal, cuando boto los cuchillos y el voltea a mirar ya el mono les estaba disparando, de ahí que ellos se cogieron la cabeza diciendo que como iba a ser eso", de ahí no me siguió contando nada más, porque llegaron unos ingenieros ahí, **Preguntado:** las personas que le conto Juan Carlos Loaiza que participaron en el hecho usted las conoce y porque motivo, **Respuesta:** si, las distingo porque Juan Carlos Loaiza es trabajador de la empresa y le paso revista al puesto donde esta, Jefferson lo distingo porque lo he visto con el consorcio iron manejando una maquina retro excavadora o una de vibración que asienta el terreno, el mono se llama Gabriel Alejandro bejarano y le dio el mono esta persona la conozco porque el trabajo en el pasado con la empresa buhos, pero no le pasaba revista porque para ese tiempo no salía a la calle, lo vi varias veces en el sector cuando llegaba con el jefe a donde yo estaba, **Preguntado:** para el día 11 de agosto cuando usted manifestó que fue a pasarle revista al puesto de las maquinas de navarro donde estaba Juan Carlos Loaiza de turno a que personas vio allí, **Preguntado:** de los que distingo estaban hablando Juan Carlos Loaiza de turno, Leonardo Aristizábal, Jefferson el que maneja la maquina también lo vi, al mono Gabriel Alejandro también lo vi en el sector pero alejado de mí, ese día llegue más o menos a las 08:00 a 09:00 y me fui como a las 11:00 vi a Juan Carlos que se quedó en el puesto y los ingenieros que estaba de turno ese día. También lo vi varias veces andando de parrillero en la moto de Juan Carlos Loaiza, hasta en una ocasión se llegó a montar en mi moto pidiéndome que lo sacara hasta Llano Verde. **Preguntado:** que consignas tiene Juan Carlos Loaiza en el puesto asignado, **Preguntado:** la función de cuidar las maquinas y estar pendiente de los ingenieros, **Preguntado:** para este trabajo se le asigna algún tipo de arma, **Respuesta:** no, y él se contrató más que todo porque tiene moto, **Preguntado:** en alguna ocasión Juan Carlos Loaiza le requirió algún tipo de arma debido a la complejidad del sitio por el tema de la inseguridad, **Respuesta:** me solicito que si le podía ayudar con un arma ya que el sitio era muy caliente, le dije que no se podía, pero me dijo que iba ver que hacía, **Preguntado:** para el día 11 de agosto de 2020 tuvo comunicación telefónica con Loaiza, **Respuesta:** si, él me llamo en horas de la tarde no recuerdo la hora, ahí me dijo que Walter colinas el venezolano no podía ir, que consiguiera otro, de ahí no hablamos más, **Preguntado:** haga una descripción física de Juan Carlos Loaiza, Jefferson y el mono Gabriel Alejandro, si sabe sus datos, alias, en que se movilizan, entre otros, **Respuesta:** Juan Carlos Loaiza Ocampo, cedula 1.143.969.665 es de tez trigueña, mas o menos de 170, delgado, tiene un tatuaje en el cuello como una flor se moviliza en una moto blanca xtz color blanco, lo conozco hace mas o menos dos meses que entró a laborar en la empresa, los datos los tengo porque soy el encargado de todo lo de talento humano (se deja constancia que para los datos y fecha el entrevistado se apoya en la base de datos que tiene en su computador personal,) no se si tiene alias, Jefferson es de tez negra, como de 180 de estatura, labios gruesos, cejas delgadas, lo conozco hace mas o menos desde febrero de este año, las veces que he llegado a navarro está manejando la máquina, el mono, se llama Gabriel Alejandro bejarano cedula 1.114.208.639 es blanco, como de 1.56 o 1.60 de estatura, calvo y barbado, lo he visto desde el año 2017 para acá



esporádicamente, ya que el trabajaba en búho servicios, últimamente en ocasiones que iba a la obra lo llegue a ver, incluso algunas veces me pidió trabajo, plata prestada, para el día 11 de agosto lo vi en horas de la mañana pero retirado del otro grupo, las veces que lo vi andaba en cicla, el no siguió trabajando en la empresa búho servicios por un paro que hizo en la obra ya que no le pagaban, **Preguntado:** usted esta en la capacidad de reconocer a estas personas, **Respuesta:** si, porque como mencione antes los he visto antes, **Preguntado:** del día 11 de agosto del presente a la fecha ha vuelto a ver estas personas, **Respuesta:** si, pero solo a Juan Carlos y a Jefferson, al mono Gabriel Alejandro no lo he vuelto a ver, **Preguntado:** usted fue escuchado en diligencia de entrevista el día 15 de agosto de 2020 y posterior declaración juramentada al día 19/08/2020 porque en esas diligencias no aportó a información que acabó de narrar, **Respuesta:** porque solo me entere el día 22 de agosto de 2020 de acuerdo a lo que me conto Juan Carlos Loaiza, consulte con mi familia y ellos me dijeron que no contara nada por la seguridad de todos, pero el día de hoy cuando me cito el investigador comente en la casa y les dije que iba contar lo sucedido porque no quiero que este caso quede en la impunidad, **Preguntado:** como fu vinculado laboralmente cada uno de ellos. **Respuesta:** El mono Gabriel laboró con la empresa Buho con el antiguo dueño Luis Álvaro Aristizábal por eso contaba con sus datos; Juan Carlos Loaiza fue recomendado por Gabriel el mono para que yo lo contratara en la guardia. **Preguntado.** El señor Gabriel Alejandro porta uniforme de la empresa Control Interno y Transporte SAS (antiguo Buho). **Respondió:** no lo he visto, él usa un sombrero como una pava, me parece que un día le vi una pava como militar. **Preguntado:** conoce usted el lugar de residencia o ubicación actual de Jefferson, Gabriel y Juan Carlos Loaiza? **Respuesta:** solo podría aportar los datos que consignó Juan Carlos Loaiza en su hoja de vida. **Preguntado:** ¿la declaración que aporta hoy la hizo de manera libre y espontanea? **Respuesta:** si. **Preguntado:** tiene algo más que agregar a la presente diligencia, **Respuesta:** no, es todo.

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se aprueba y firman quienes en ella intervinieron.

Declarante

C.C. N°. 6112.481431

Nombre y firma Servidor PJ:

Identificación 9450290

Entidad: Poma - Sin

Teléfono

Correo electrónico

Fiscal que interviene

N° de Fiscal:

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.



2.2.15. El Distrito de Santiago de Cali en respuesta a derecho de petición incoado por el suscrito apoderado judicial, informó:

Calle 10 N° 5-77 Centro 01 piso
Santiago de Cali-Valle del Cauca

Asunto: Respuesta a Derecho de Petición en el que solicitó información Caso 760016000193202006645

Cordial Saludo,

En mi calidad de Secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de la Alcaldía de Santiago de Cali, organismo a cargo del Plan Jarillón de Cali, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 30 de junio de 2015, por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de manera atenta y respetuosa, doy respuesta a su petición distinguida con el radicado Orfeo Nro.202041730101238142 ,en los siguientes términos:

En atención a la solicitud de información de las personas relacionadas en oficio de la referencia, a continuación se procede a dar los datos obrantes en el sistema de consulta del Plan Jarillón De Cali:

(...)

- Leyder Cárdenas Hurtado: Quien habitaba con su señora madre y demás familiares en la vivienda de interés prioritario del proyecto habitacional Llano verde, Manzana 05 casa 23. Es de aclarar que la siguiente información es la generada desde el sistema de consulta del Plan Jarillón de Cali y es la obtenida en el proceso de verificación sociodemográfica por lo que se puede observar que el menor Leyder Cárdenas hurtado no fue verificado como

habitante del plan Jarillón de Cali en la zona de intervención.

Identificación			Nombre		
Cédula de ciudadanía	31.610.052	MARTHA		HURTADO	CARDENAS
Cédula de ciudadanía	1.028.186.553	JOHANA		CARDENAS	HURTADO
Cédula de ciudadanía	1.028.186.554	YEISON		CARDENAS	HURTADO
Tarjeta de identidad	1.028.186.868	FRANCIA	ELENA	CARDENAS	HURTADO
Cédula de ciudadanía	1.148.693.942	AURA	NELLY	GONZALEZ	CARDENAS
Tarjeta de identidad	1.028.186.864	LUIS	EDUARDO	CARDENAS	HURTADO
Tarjeta de identidad	1.115.448.658	VICTOR	MANUEL	PAZ	TORRES

(...)"



2.2.16. Por su parte, el canal digital Bluradio.com publicó el día 29 de agosto de 2020 el artículo denominado: ***“No dan razón de empresa que contrató a vigilantes vinculados en masacre de Llano Verde³⁵”***. (...)

*Hace algunos días se conoció el asesinato de cinco jóvenes en Cali, situación que generó una rápida investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que ordenó la captura de tres vigilantes que, al parecer, **serían quienes cometieron los hechos mientras cumplían con sus labores en un terreno del sector de Llano Verde.***

*Los hombres vinculados al proceso habrían manifestado que fueron contratados, informalmente, **para cuidar la zona donde aparecieron los jóvenes masacrados.*** (...) Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.17. El 31 de agosto de 2020 la DEFENSORIA DEL PUEBLO mediante respuesta a derecho de petición incoado por el suscrito apoderado judicial, radicado: 20200060342255681 manifestó:

“La Defensoría del Pueblo es una entidad que forma parte del Ministerio Público, dentro de sus funciones legales y constitucionales contenidas en la ley 24 del /92 debe velar por la defensa, promoción, desarrollo de los Derechos Humanos y del DIH.

*En virtud de lo anterior y ante la solicitud hecha a este despacho, en la cual requieren “2.1. Informe por favor si la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca denunció o decretó alerta temprana en los términos de lo contemplado en el Decreto 2124 de 20174, de cara a las posibles denuncias de los reclutamientos ilegales en las comunas 14, 15 y 21 del Municipio de Cali. En caso de ser así, por favor expídase copia de toda la documentación referente a la declaratoria de esta alerta temprana. O si se desplegó una actuación similar en caso de no haber actuado en el tenor literal de lo establecido en el Decreto 2124 de 2017, también sírvase aportar copia de esta última”. **Le informamos, que la Defensoría del Pueblo a través de la delegada del Sistema de Alertas Tempranas SAT, ha venido evidencio la situación de riesgo se viene presentando en las comunas del oriente de Cali, información que se ha dado conocer a través de los documentos de advertencia que emite la delegda (Alertas Tempranas).***

*Con relación al numeral “2.2. De igual manera se solicita que informe a este apoderado qué actuaciones, trámites o procedimientos ha adelantado con respecto a la situación que actualmente se presenta en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali, si ha se puesto en conocimiento de otras autoridades, locales departamentales o nacionales. No solo en lo que respecta a las denuncias por posibles reclutamientos ilegales, sino también lo corresponde a cualquier tipo manifestación violenta o de flagelos que atenten contra los derechos humanos de las personas que residen en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali. De igual modo se solicita que especifique desde qué fecha viene adelantando las respectivas actuaciones”. Con relación al punto dos, suscrito en la petición, en el documento de advertncia que se hizo para las comunas 14, 15 y 21 (AT 085-18) **se hicieron las respectivas recomendaciones referente a la seguridad, reclutamiento de menores y demás inversiones que se requieren para la ejecución de las políticas públicas en ese setor de la capital del Valle”.***

³⁵ Tomado el día 02 de agosto de 2022 de la dirección electrónica <https://www.bluradio.com/nacion/no-dan-razon-de-empresa-que-contrato-a-vigilantes-vinculados-en-masacre-de-llano-verde>



2.2.18. El canal digital Vanguardia.com el día viernes 15 de enero de 2021 publicó el artículo denominado: “**Capturan a alias ‘El Mono’, presunto responsable de la masacre de Llano Verde**”³⁶ Gabriel Bejarano, alias ‘El Mono’, presunto autor material de la masacre de Llano Verde, en la que cinco menores de edad fueron asesinados, fue capturado en la madrugada de este viernes.

La captura ha sido notificada por autoridades locales, sin embargo, será oficializada en el transcurso de este viernes por el Gobierno Nacional en Cali

En el crimen ocurrido el 11 de agosto de 2020 fueron asesinados Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean jair Cruz, Luis Fernando Montaña y Léider Cárdenas.

De acuerdo a una fuente de la Policía, Bejarano se encontraba en una finca ubicada en zona rural del municipio de Obando, norte del Valle.

Al parecer, un ciudadano reconoció a alias ‘El Mono’ y este habría puesto esta información en conocimiento de las autoridades, quienes procedieron a realizar la captura.

Es preciso señalar que el pasado 28 de agosto las autoridades capturaron Jefferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza, supuestos cómplices de la masacre, quienes señalaron a Gabriel Bejarano como el autor material e intelectual del crimen.

La investigación arrojó que Bejarano, alias ‘El Mono’, fue quien supuestamente disparó cinco tiros de un revólver calibre 38 contra los jóvenes. (...)

El segundo era vigilante de la empresa Control Interno y Transporte, subcontratada para cuidar las máquinas y acompañar a los ingenieros de estas obras, ubicadas junto a la finca donde hallaron los cadáveres.

Bejarano, por su parte, no tenía un empleo formal. A veces trabajaba como vigilante para Control Interno y Transporte. Él recomendó a Loaiza para su actual cargo en esa empresa. Sobre Bejarano confluyen dos estructuras delincuenciales: una red de invasores de tierra y otra de tráfico de armas.

Sin embargo, la hipótesis que el fiscal Barbosa resaltó tras el múltiple homicidio es simple: en un ataque de intolerancia, Bejarano mató a los menores porque entraron sin permiso al lugar para comer caña. Bejarano, delgado y de baja estatura, es un hombre callado, pero en los barrios Pizamos III, Villaluz y Villa Mercedes, donde vivió varios años, muchos le temen. Angulo y Loaiza también.

Cuando ocurrió la masacre, Bejarano vivía en una habitación del barrio República de Israel, pero su familia ya había vivido en la zona de Pizamos III y en Villa Mercedes. En este sector la Policía lo capturó dos veces por porte ilegal de armas. En 2011 fue detenido con un maletín donde llevaba un revólver 38 con seis cartuchos y una pistola CZ Browning 7,65 con silenciador.

En 2012 lo detuvieron con un revólver 38. Según el reporte, Bejarano opuso resistencia y golpeó a uno de los policías, mientras varias personas del barrio atacaron a los uniformados para evitar la captura”. (Se resalta). Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

³⁶ Publicado por El País De Cali. Viernes 15 de enero de 2021 - 10:06 AM <https://www.vanguardia.com/colombia/capturan-a-alias-el-mono-presunto-responsable-de-la-masacre-de-llano-verde-YH3292375>



2.2.19. Así mismo, la emisora de radio colombiana de programación generalista, propiedad de RCN, a través de su página web rcnradio.com, publicó el 09 de septiembre de 2020 el artículo denominado: **Masacre en Cali: tercer implicado tenía casa por cárcel**³⁷, en Cali, en el cual informaron lo siguiente: “(...) *Jhonatan Velásquez, el abogado de los familiares de los cinco menores de edad que fueron víctimas de la masacre en el barrio Llano Verde, oriente de Cali, reveló que **Gabriel Alejandro Bejarano, el tercer sospechoso del crimen, tenía dos sentencias condenatorias en su contra.***”

Según la consulta de procesos de la Rama Judicial, en una de las condenas el prófugo fue judicializado el 12 de octubre de 2011 por los delitos de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y recibió una pena de 7 años y 10 meses.

“Es una situación bastante grave, apenas el jueves llega la cartilla en la cual se demuestra que este delincuente tenía una medida de prisión domiciliaria desde el año 2016, y desde el año 2016 únicamente fue visitado por el Inpec para verificar que estuviera en su lugar de domicilio en nueve oportunidades, nueve oportunidades en 4 años y lo más grave es que de esas nueve oportunidades en las que fueron, en dos ocasiones no se encontraba en su lugar de domicilio”, explicó Velásquez.

Para el apoderado, en ese momento las autoridades debieron levantar la medida privativa de libertad domiciliaria y expedir orden de captura contra el hombre, a través de un juez de ejecución de penas.

“No se hizo ningún procedimiento y además de no levantar la medida privativa de libertad, la última vez que se visitó a esta persona en su lugar de domicilio, fue el 9 de agosto del 2019. El Inpec tiene una obligación legal de conformidad con el Código Penal, y es realizar unas visitas periódicas, ellos incumplieron con esto y es por esta razón que el delincuente pudo cometer estos hechos de sangre que dejó la muerte de estos cinco menores”, explicó el abogado. (...)”. Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.20. El día 06 de septiembre 2020 el canal de comunicación denominado: “eltiempo.com.co” publicó la noticia titulada: **Prófugo de la masacre de Cali incumplía casa por cárcel desde hace un año**³⁸, en dicho artículo informó: “(...) *Gabriel Alejandro Bejarano, quien presuntamente hizo los disparos que causaron la muerte a cinco adolescentes el pasado 11 de agosto, en un cañaduzal del oriente de la capital del Valle del Cauca, afrontaba dos condenas pero tenía beneficio de detención domiciliaria.*”

El último día que se le hizo una visita fue hace más de un año y ya no residía en el domicilio registrado, dato que el Inpec siempre supo. Abogados de las víctimas, en el barrio Llano Verde, no entienden por qué estaba libre.

Un análisis de su cartilla biográfica en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) indica que Bejarano había sido capturado el 18 de abril de 2011.

El 23 de junio de ese año el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado le dictó una condena de 3 años y 3 meses por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

³⁷ Pacífico 09 Sep 2020 - 07:21 pm. Diana Marcela Villegas. <https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/tercer-implicado-en-masacre-de-llano-verde-en-cali-tenia-casa-por-carcel>

³⁸ CALI 06 de septiembre 2020, 09:00 A. M. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/masacre-de-llano-verde-se-revelan-detalles-ineditos-del-profugo-de-la-masacre-ultimas-noticias-536148>



El 3 de diciembre de 2012 el Juzgado 10 Penal del Circuito le aplicó otra condena por 7 años y 10 meses también por porte, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

El 23 de mayo de 2013 le revocan el beneficio de la prisión domiciliaria por el incumplimiento a las obligaciones. Al tener otro proceso y habersele negado la acumulación jurídica de penas, el 10 de marzo de 2016 dentro del proceso 201200528 se le concedió la prisión domiciliaria.

En la cárcel tuvo dos años calificaciones de buenas conductas y los tres siguientes hasta 2016 se le calificó como ejemplar.

El 8 de enero de 2018, a las 7:03 p. m., la Policía se encontró con que el interno ya no vive en la residencia referida. Sus cambios de domicilio se repitieron. Su proceso estaba a cargo del Juzgado 5 de Ejecución de Penas de Cali. (...)

*En los años de reclusión, a Bejarano se le practicaron nueve visitas por parte del Inpec y la Policía. **El 13 de diciembre de 2017 a los patrulleros policiales se les informó que el procesado hace más de un mes no vivía en el lugar que debería permanecer.***

El 8 de enero de 2018, el reporte policial dice que se les indicó a los uniformados que ya no vivía en la residencia visitada. La situación no fue denunciada ante la Fiscalía como fuga de presos y está pendiente de establecer si se le reportó al Juzgado de Ejecución de Penas.

La última revista fue el 9 de agosto de 2019 y así desde hace 13 meses no se conocía su paradero y ahora es prófugo del múltiple crimen en Llano Verde. (...). Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.21. También, el canal de comunicación denominado: "eltiempo.com.co" publicó la noticia titulada: **Inpec responde por 'El Mono', sindicado de la masacre de Llano Verde**³⁹ el día 07 de septiembre 2020, indicando: "(...) Una fuente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec le aseguró a EL TIEMPO que **actúo con base en la ley frente a la situación de Gabriel Alejandro Bejarano, un hombre de 33 años, condenado, y que gozaba del beneficio de casa por cárcel.**

Bejarano, conocido con el alias de 'El Mono', está prófugo de la justicia desde el 11 de agosto, sindicado de haber disparado contra cinco adolescentes en la llamada masacre de Llano Verde en Cali.

La fuente señaló que el Inpec realizó el traslado - en dos ocasiones - de Bejarano a su residencia para cumplir en casa por cárcel la condena a 7 años de prisión por tráfico de armas.

Bejarano fue condenado a 3 años y 3 meses de prisión, en junio de 2011, por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En 2013, se le notificó de una segunda condena.

De acuerdo con el Inpec, Bejarano recibió por primera vez este beneficio - casa por cárcel - en 2013, medida que le fue revocada ese mismo año por un juez al recibir el reporte del Inpec de que no lo encontraron en la casa.

³⁹ CB Carolina Bohórquez 11 de agosto 2021, 11:09 A. M. **El misterio sin resolver de la tortura y masacre de cinco niños en Cali.** Publicación tomada el día 28 de julio de 2022 a las 7:30 pm de la página electrónica: <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/masacre-de-llano-verde-un-ano-del-crimen-de-5-jovenes-en-cali-609489>



En el 2016, le vuelven a conceder el beneficio de casa por cárcel a Bejarano, "cosa que no se entiende, ya que tenía el registro de haber incumplido con dicha medida", señaló el funcionario del Inpec.

Señaló el funcionario que no hubo irregularidades en su actuación, porque en 2018 los guardianes que fueron a verificar la situación de Bejarano notificaron que en dos ocasiones no lo encontraron en su casa, en febrero y marzo, "y es a un juez al que le corresponde al recibir nuestro reporte levantar la medida", puntualizó.

De igual forma, señaló que si bien - entre 2016 y 2019 - se realizaron 9 visitas para verificar si Bejarano se encontraba en su lugar de residencia, cifra que parece baja, pero explicó que "en la actualidad hay 73.188 personas con casa por cárcel, y son 12.000 guardianes para las cárceles y para verificar a los del beneficio, es imposible hacer los controles con regularidad".

Dijo que los controles se hacen, pero no con la frecuencia que algunos quisieran, "tenemos a cargo la seguridad de las cárceles", sumado a los controles externos. (...)", lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

El diario digital el tiempo.com en artículo publicado el 28 de agosto de 2020 y titulado como "Siempre supimos que los culpables eran los vigilantes del cañaduzal: familiares" informó: "(...) El alcalde Jorge Iván Ospina, manifestó que **los detenidos tienen antecedentes judiciales y falta una persona por capturar.**

"Invito a los dueños de este tipo de tierras que cuando paguen vigilancia siempre lo hagan con empresas certificadas porque estos asesinos habían sido contratados para cuidar el cañaduzal. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a un ser humano y menos a los menores de edad que solo ingresaron a comer caña. Esperemos que el peso de la ley les caiga encima", afirmó el mandatario⁴⁰ (...)". Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

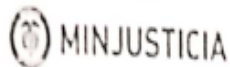
2.2.22. El diario digital rcnradio.com en artículo publicado el 28 de agosto de 2020 y titulado como "Siempre supimos que los culpables eran los vigilantes del cañaduzal: familiares" informó: "(...) El alcalde Jorge Iván Ospina, manifestó que **los detenidos tienen antecedentes judiciales y falta una persona por capturar.**

"Invito a los dueños de este tipo de tierras que cuando paguen vigilancia siempre lo hagan con empresas certificadas porque estos asesinos habían sido contratados para cuidar el cañaduzal. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a un ser humano y menos a los menores de edad que solo ingresaron a comer caña. Esperemos que el peso de la ley les caiga encima", afirmó el mandatario⁴¹ (...)". Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.23. El día 03 de septiembre de 2020 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC en respuesta a derecho de petición interpuesto por el suscrito apoderado judicial, informó y allegó los documentos que se relaciona a continuación:

⁴⁰ Tomado el día 1 de agosto de 2022 de la dirección electrónica <https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/siempre-supimos-que-los-culpables-eran-los-vigilantes-del-canaduzal-familiares> **María Mónica González Escandón@monicagesc**

⁴¹ Tomado el día 1 de agosto de 2022 de la dirección electrónica <https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/siempre-supimos-que-los-culpables-eran-los-vigilantes-del-canaduzal-familiares>



227-EPMSCBUG-AJUR-

Guadalajara de Buga, 03 de septiembre de 2020

Doctor

JHONATAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA

Representante Legal de Legalgroup Especialistas S.A.S

Pereira Risaralda

Asunto: Respuesta Derecho de petición

Cordial Saludo,

Por medio del presente, en atención a derecho de petición allegado a esta oficina jurídica y con observancia de la ley 1098 de 2006 "Código de infancia y Adolescencia" de manera respetuosa me dirijo a su despacho con el fin de atender cada uno de sus requerimientos en los siguientes términos:

1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- cuenta con un sistema Nacional de información SISIPEC WEB, creado, diseñado e implementado para suplir la necesidad de sistematización de la información de la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión del orden nacional adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
2. Una vez revisado el aplicativo SISIPEC WEB se puede observar que el señor **BEJARANO GABRIEL ALEJANDRO** se encuentra disfrutando del beneficio de la prisión domiciliaria dentro del proceso con radicación 2012-00528 a cargo del Juzgado 5° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali Valle, medida que actualmente es vigilada por el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali Valle.
3. El señor **BEJARANO GABRIEL ALEJANDRO** tiene proceso activo con beneficio de prisión domiciliaria radicación 2012-00528 condenado a la pena de prisión de




7 años y 10 meses por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de uso privativo de las fuerzas armadas, pena que vigila el Juzgado 5° de Ejecución de Penas de Cali Valle y con proceso requerido 201101119 condenado a la pena de prisión de 3 años y 3 meses por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pena que vigila igualmente el Juzgado 5° de Ejecución de Penas de Cali Valle.

4. En el campo XIII-I Programación Visitas Domiciliarias de la cartilla biográfica que se anexa podrá observar el registro de las Visitas programadas y efectuadas, con las diferentes novedades que se pudieran presentar respecto de cada una de ellas.

La anterior información es tomada del aplicativo SISIEP WEB y de la página única de la Rama Judicial.

Atentamente,


DS. OSORIO LONDOÑO YEISSON
Asesor Jurídico EPMSC Buga Valle

Revisado por: Ds. Osorio Londoño Yeisson

Elaborado por: Ds. Osorio Londoño Yeisson

Fecha de Elaboración: 31/08/2020



INPEC



EPMSC CALI (ERE) - REGIONAL OCCIDENTE

Fecha generación: 29/08/2020 08:36 AM

CARTILLA BIOGRÁFICA DEL INTERNO

N.U 362299 Apellidos y Nombres: BEJARANO GABRIEL ALEJANDRO * Identificado NO

* Sin verificar INTER-AFIS RNEC8826

I. IDENTIFICACIÓN DEL INTERNO

T.D 226173027 Identificación: 1114208639 Expedida en: La Victoria-Valle Del Cauca
Lugar y Fecha de Nacimiento: La Victoria-Valle Del Cauca, 01/04/1987
Sexo: Masculino Estado Civil: Soltero(a) Cónyuge:
No. Hijos: 1 Padre: DESCONOCIDO Madre: ESNEDA BEJARANO
Dirección: Kra 28 E - 4 No 113 A - 67 B/ Villa Mercedes Teléfono: 3132571634
Ciudad de Residencia: Santiago De Cali-Valle Del Cauca
No. de Ingresos: 1 Fecha Ingreso: 19/04/2011
Estado Ingreso: Prisión Domiciliaria Fecha Captura: 18/04/2011
Observación:



II. OTROS DATOS DEL INTERNO

Alias: Apodos:

III. INFORMACIÓN DEL PROCESO ACTIVO

No.Caso: 6605430 No.Proceso: 2012-00528 RUP 2012-02628 Situación Jurídica: Condenado
Autoridad a cargo: JUZGADO 5 EJECUCION DE PENAS DE SANTIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA
Disposición: 2124419 Fecha: 27/12/2012 Etapa: Ejecución de la pena Instancia: Primera
Disposición 2119903 Consecutivo 1042137 Número: Fecha: 03/12/2012
Providencia: Condenatoria Primera Instancia Pena: Prision Decisión: Condenar
Cuantía Años: 7 Meses: 10 Días: 15
Profirió Juzgado 10 penal del circuito santiago de cali valle - colombia Acción NSP:
Condenado por: Fabricacion trafico y porte de armas y municiones de uso
privativo de las fuerzas armadas

(...)

IV-I Historia Procesal - Requeridos

Numero Caso	Fecha	Autoridad	Etap	Instancia	Estado
445314	23/06/2011	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	Juzgamiento/Juicio	Primera	Inactiva
445314	25/10/2011	JUZGADO 5 EJECUCION DE PENAS DE SANTIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA	Ejecución de la pena	Primera	Activa
445314	18/04/2011	JUZGADO 31 PENAL MUNICIPAL CALI-VALLE DEL CAUCA	Instruccion/Investigacion	Primera	Inactiva

IV-II Documentos Soporte - Procesos Requeridos

V. INFORMACION DE OTROS PROCESOS

No.Caso: 6614119	No.Proceso: 2012-00528	S.J. Condenado	Estado: Juzgamiento/Juicio
Autoridad a cargo: JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CALI-VALLE DEL CAUCA	Disposición: 2100483	Fecha: 09/10/2012	Etap: Juzgamiento/Juicio Instancia: Primera
No.Caso: 6614119	No.Proceso: 2012-00528	S.J. Condenado	Estado: Juzgamiento/Juicio
Autoridad a cargo: JUZGADO 10 PENAL DEL CIRCUITO SANTIAGO DE CALI VALLE - COLOMBIA	Disposición: 2120016	Fecha: 03/12/2012	Etap: Juzgamiento/Juicio Instancia: Primera
No.Caso: 6614119	No.Proceso:	S.J. Condenado	Estado: Ejecución de la
Autoridad a cargo: JUZGADO 5 EJECUCION DE PENAS DE SANTIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA	Disposición: 2166623	Fecha:	Etap: Ejecución de la pena Instancia: Primera
No.Caso: 6830473	No.Proceso: 2012-02628	S.J. Sindicado	Estado: Juzgamiento/Juicio
Autoridad a cargo: JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	Disposición: 2675085	Fecha: 10/04/2013	Etap: Juzgamiento/Juicio Instancia: Primera

(...)

(6) 3211812 -(+57) 3174364677-(+57) 3014549829 www.legalgroup.co

Pereira - Risaralda Cra 12 bis #8- 45 Sector Circunvalar.

Bogotá • Cartagena • Medellín • Cali • Tuluá • Santander de Quilichao • Barranquilla • New York



CARTILLA BIOGRÁFICA DEL INTERNO							
N.U	362299	Apellidos y Nombres:	BEJARANO GABRIEL ALEJANDRO	* Identificado	NO		
XIII. INFORMACIÓN DOMICILIARIA							
Disposición:	2166623	No.	062	F. Domicilio:	14/03/2016	F. Inicio:	15/03/2016
T. Domiciliaria:	Prisión	T. Vigilancia:		E. Domiciliaria:	Activa		
F. Documento:	07/11/2017	Tipo	Cambio de Dirección Domiciliaria	Consec. Doc.:	1554918		
Ciudad:	Santiago De Cali-Valle Del Cauca	Barrio:	Lideres Iii	Teléfono:	0000		
Dirección Dom.	Carrera 28 D5 No. 113-24 B/Lideres Iii						

(...)

XIII-4 Programación Visitas Domiciliarias							
Visita:	6523170	F. Programada:	09/08/2019	F. Efectiva:	09/08/2019	Responsable:	Ramirez Osorio Diego Fernando
Tipo Novedad:	Se encuentra en su lugar de domicilio						
Observaciones:							
Visita:	6331654	F. Programada:	09/03/2018	F. Efectiva:	09/03/2018	Responsable:	Rivera Castaño Jose Alexander
Tipo Novedad:	Se encuentra en su lugar de domicilio						
Observaciones:	Fecha efectiva revista de la ponal el día 28/02/2018 a las 10:00 am por el pt ruben naranjo, se encuentra sin novedad.						
Visita:	6331621	F. Programada:	09/03/2018	F. Efectiva:	09/03/2018	Responsable:	Ospina Burgos John Edwar
Tipo Novedad:	Se encuentra en su lugar de domicilio						
Observaciones:	Fecha efectiva de revista 15/02/2018						
Visita:	6327540	F. Programada:	01/03/2018	F. Efectiva:	01/03/2018	Responsable:	Rivera Castaño Jose Alexander
Tipo Novedad:	No se encuentra en su lugar de domicilio						
Observaciones:	Fecha efectiva revista de la ponal el día 08/01/2018 a las 7:03 pm por el pt jhon chasebo, la señora saira restrepo con cc. 1107054808 manifiesta que el interno ya no vive en la residencia.						
Visita:	6325398	F. Programada:	23/02/2018	F. Efectiva:	23/02/2018	Responsable:	Rivera Castaño Jose Alexander
Tipo Novedad:	No se encuentra en su lugar de domicilio						
Observaciones:	Fecha efectiva revista de la ponal el día 13/12/2017 a las 3:00 pm por el pt wilson muñoz, no reside hace 1 mes.						

(...)"

2.2.24. Por su parte, el canal de comunicación denominado: “caracol.com.co” publicó la noticia titulada: **¿Qué está ocurriendo en Llano Verde al oriente de Cali?**⁴² el día doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020), es decir, un día después de que fuese asesinado el menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, reseñando que: “(...) **El barrio Llano Verde, ubicado al oriente de Cali, es azotado por la violencia e inseguridad: reclutamiento de menores, fronteras invisibles, limpieza social, microtráfico y amenazas, son algunas de las situaciones que se presentan en el sector y que preocupan a sus habitantes y a las autoridades.**

⁴² CALI. VIOLENCIA. 12 de agosto 2020, ¿Qué está ocurriendo en Llano Verde al oriente de Cali? Publicación tomada el día 17 de febrero de 2022 de la página electrónica: https://caracol.com.co/emisora/2020/08/12/cali/1597242447_938678.html



La comunidad está en alerta máxima, tras lo ocurrido en la noche del martes, donde fueron encontrados en un cañaduzal, los cuerpos sin vida de cinco menores de edad, con señales de heridas de armas blancas en el cuello y tiros de gracia.

Una lideresa de Llano Verde asegura que por más llamados atención que realizan a las autoridades, la muerte sigue estando presente en la zona.

"Que sí, que van a estar pendientes, pero la situación sigue, entonces **no sé la verdad qué es lo que se hace... las amenazas siguen, la muerte sigue y es muy triste**", dijo la mujer.

Por su parte, el concejal Fernando Tamayo, había denunciado desde el mes de enero, que **bandas delincuenciales estaban obligando a jóvenes de la zona a desplazarse a trabajar en actividades ilícitas y quienes se negaran eran amenazados (...)**

"Es una crónica de una muerte anunciada... lo que pasó definitivamente fue la punta del iceberg, del problema que se vive en el distrito", expresó el concejal, "sé que no es la solución definitiva, **pero es necesaria la presencia permanente del Ejército en algunos sectores de Cali**⁴³ (...)". Lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.25. La Personería de Santiago de Cali mediante oficio 210.10.1 rad. 20212100361341 en cumplimiento Fallo de Tutela No. 2021-00231 del 12 de noviembre de 2021 proferido por el Juzgado 2º Administrativo de Pereira. Radicado: 20212450255222 de noviembre 17 de 2021, manifestó: "(...) **3.6 "Dirá si la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas, desde el año 2.018 y en lo que va del año 2.020, relacionada con el orden público del barrio Llano verde del municipio de Cali y los llamados de la comunidad solicitando protección; en caso afirmativo, indicara que recomendaciones ha realizado la Defensoría del Pueblo para fortalecer la seguridad de la zona y que acciones concretas ha tomado la fiscalía general de la Nación para acatarlas"**.

Si bien es cierto, la Procuraduría General de la Nación, es la entidad competente para ejercer como ministerio público ante las Fiscalías Especializadas. En aras de dar cumplimiento al presente fallo de tutela de primera instancia en el cual se ordena dar respuesta de FONDO a la petición:

La Defensoría del Pueblo, conforme a su función emitió la alerta temprana 085 de 2015 para las comunas 13, 14 y 15 del Distrito de Santiago de Cali. En cumplimiento al deber funcional, la personería de Santiago de Cali le ha realizado el respectivo seguimiento a esta alerta temprana, **como se puede evidenciar en el acta de reunión de agosto 4 de 2020** denominada "acta de jornada de trabajo con la Mesa de Víctimas y el Dr. Carlos Alberto Rojas Secretario de Seguridad y Justicia, donde **la Personería Distrital de Santiago de Cali le hizo un llamado a la Alcaldía de Santiago de Cali sobre el tema de inseguridad que se estaba presentando en el barrio Llano verde ubicado en la comuna 15 de esta ciudad**. De igual manera se anexa acta de reunión consejo de seguridad con la Alcaldía de Cali del 29 de octubre de 2020, donde también intervino la Personería de Cali alertando sobre la situación de inseguridad de familiares de los líderes de la mesa en el del barrio Llano verde. Se anexan las referidas actas (...)"

⁴³ Resaltado y subrayado propio.



2.2.26. En la dirección electrónica institucional del Consejo Municipal de Santiago de Cali reposa la publicación electrónica efectuada el día 7 de octubre de 2020 denominada: *“Cali debe pasar de la excusa de falta de pie de fuerza a una política contundente contra las estructuras criminales”*⁴⁴ en la cual se consignó lo siguiente: *“(…) A raíz de los informes presentados por el gobierno distrital en materia de seguridad, el Concejal Roberto Rodríguez Zamudio, volvió a insistir en la necesidad de conocer los avances del proyecto de acuerdo que contiene la política pública que en esa materia reorientará toda la estrategia de inversión para contrarrestar el delito en el Distrito Especial.*

“Debemos pasar de la excusa de no tener pie de fuerza, a buscar alternativas de inversión en tecnología, integrar a la institucionalidad alrededor de la política de seguridad ciudadana y enfocar con inteligencia el desmonte de las estructuras criminales que operan en la zona metropolitana y la región, pero que ven a Cali como centro de negocios”, sostiene Roberto Rodríguez Zamudio.

Para Rodríguez Zamudio, la Policía Nacional ha realizado grandes esfuerzos dando captura a criminales reconocidos, pero no es suficiente, por lo que exigió que la Alcaldía de Cali formule la Política Pública de Seguridad y Convivencia con estrategias contundentes y un presupuesto acorde, que permitan que tanto Gobierno de Cali y la sociedad civil, coincidan en la resolución del problema que ya ampliamente está identificado.

“De no hacerlo continuaremos dando tumbos como ha venido ocurriendo, no podemos olvidar que la pasada administración nos dejó grandes problemas en materia de seguridad; cuatro años con la promesa de constituir la política pública, un presupuesto dilapidado, una sanción en FONSECOM por \$1.260.000 que imposibilitaron acceder a los recursos de tecnología y un salvo conducto para la invasión del espacio público y la propiedad”, advierte el Concejal.

Rodríguez Zamudio recordó *“que a 10 meses de esta Administración deberíamos conocer los avances de esa política de seguridad, pero llama la atención que estemos cayendo en la misma conducta del Alcalde Armitage, de festejar por la disminución de unos homicidios con campañas de medios a una ciudad que se encuentra secuestrada por el miedo”.*

El Concejal Roberto Rodríguez Zamudio, insto al equipo encargado de elaborar la política de seguridad, para que no se queden en el escritorio y vayan a la fuente “para entender lo que está ocurriendo en diferentes sectores como en el asentamiento (...) llano verde, con presencia de delincuentes y milicias con armas largas que deambulan en las noches generando pánico (...)”, lo cual constituye un hecho de notorio y de público conocimiento.

2.2.27. El periódico electrónico: “elcolombiano.com” publicó tres días después de que asesinaran a la víctima principal de la presente demanda, la nota de prensa que a continuación se relaciona: ***“Zona donde ocurrió la masacre de cinco jóvenes en Cali será militarizada”***⁴⁵ (...) El Ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo anunció, luego de un consejo de seguridad, que las **zonas aledañas del barrio Llano Verde de Cali, donde se registró una masacre de cinco jóvenes y la explosión de una granada, será militarizada.** (...). Tuvieron que ocurrir estos dos atentados terroristas para que el estado volviera sus ojos a Llano Verde, y se concientizara de la magnitud de la problemática social que agobia a esta población, (...), lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

⁴⁴ Consejo Municipal de Santiago de Cali. 07 de octubre 2020. Comunicaciones y Relaciones Corporativas. Comunicado Informativo: 21.2.3.680/2020. Publicación tomada el día 17 de febrero de 2022 de la página electrónica: http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/cali_debe_pasar_de_la_excusa_de_falta_de_pie_de_fuerza_a_una_politica_contundente_contra_las_estructuras_criminales

⁴⁵ 14 de agosto 2020, 04:27 P. M. Mindefensa anuncia equipo especial para esclarecer masacre en el barrio Llano Verde. Publicación tomada el día 17 de febrero de 2022 de la dirección electrónica: <https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/barrio-llano-verde-de-cali-sera-militarizado-KA13465258>



Zona donde ocurrió la masacre de cinco jóvenes en Cali será militarizada



COMPA

El ministro de Defensa visitó la zona afectada en Cali. FOTO CORTESÍA MINDEFENSA

2.2.28. El diario digital denominado: “elpais.com.co” publicó⁴⁶ el día catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020) lo siguiente: “(...) El jefe de la cartera de Defensa, confirmó que **el sábado 15 de agosto** llegarán a la ciudad cinco funcionarios élite del Gaula para apoyar la investigación, cinco investigadores élite de la Dijín, diez de inteligencia y 50 investigadores de la Policía Nacional. Adicionalmente, ratificó la llegada de 180 hombres de las Fuerzas Militares, **que harán presencia en el sector de manare permanente (...)**”, lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.29. El diario digital denominado: “www.eltiempo.com.co” publicó⁴⁷ el día catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020) lo siguiente: “(...) En Llano Verde viven familias en situación de desplazamiento por el conflicto armado, de reinsertados y de reubicados de zonas de riesgos de inundación en el jarillón del río Cauca. (...) Es un barrio marginal que colinda con cientos de hectáreas de cañaduzales dentro de los llamados ejidos de Cali, terrenos que en la época de la Corona Española fueron utilizados para que la servidumbre y para que la población pudiera tener actividades de esparcimiento. (...) **El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, indicó que este habría sido un genocidio generacional contra jóvenes que en su miseria y pobreza no cuentan con oportunidades de desarrollo y señaló que las autoridades deben detener a los 'escuadrones de la muerte'**. (...) La Policía y el Ejército informaron en un comienzo, que la masacre habría sido por grupos armados ilegales asociados a fuerzas del narcotráfico. (...) Tras tres casi tres semanas sin recibir información al respecto, la población en Llano Verde exigió respuestas, al tiempo que algunas familias denunciaron amenazas en su contra (...)”, lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

⁴⁶ Agosto 14, 2020 - 04:50 p. m. Por: Redacción de El País
<https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/mindefensa-anuncia-equipo-especial-para-esclarecer-masacre-en-el-barrio-llano-verde.html>

⁴⁷ COLOMBIA CALI 31 de agosto 2020, 12:03 P. M. Las autoridades reconstruyeron el crimen tras la captura de dos de los vigilantes del cañaduzal. Publicación tomada el día 17 de febrero de 2022 de la página electrónica: <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/masacre-de-llano-verde-reconstruccion-paso-a-paso-de-como-ocurrio-la-masacre-noticias-de-hoy-534478>



2.2.30. El diario electrónico denominado: “noticiasrcn.com” publicó el día 1º de septiembre de 2020 lo siguiente: ***“La Defensoría del Pueblo alzará su voz, no nos callaremos. Van a tener que oírnos”⁴⁸***: Carlos Camargo. El nuevo defensor del Pueblo manifestó su compromiso con la mejora del Sistema de Alertas tempranas, y ***señaló la importancia de desarrollar su gestión desde los territorios para acompañar a las comunidades que lo necesitan***. (...) En su intervención, el nuevo defensor del Pueblo ***pidió un minuto de silencio por las víctimas de las recientes masacres que han azotado al país, y llamó a las demás autoridades a “no permitir que se ensañen contra nuestros jóvenes”***. Se refirió a las capturas de los culpables de la masacre de Llano Verde, y pidió la misma contundencia en todos los hechos violentos (...). (Resaltado propio). (...), lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.31. El canal de comunicación denominado: “eltiempo.com.co” publicó la noticia titulada: **El misterio sin resolver de la tortura y masacre de cinco niños en Cali⁴⁹** el día once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021), es decir, un año después de que fuese asesinado el menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, informando que: “(...) El sol pegaba punzante sobre **Llano Verde**. En uno de los pasadizos de la calle con pequeñas viviendas en ladrillo a lado y lado, y donde habitan el hambre y los esfuerzos, el papá de **Álvaro Caicedo** arreglaba una moto para ganarse unos cuantos pesos.

Vio alejarse a su hijo, con su mismo nombre de pila, rumbo a las casas de sus amigos Jossmar Jean Paul Cruz y Léider Cárdenas.

Álvarito, de 14 años, como le decía el papá, caminó frente a la cancha de fútbol que siempre le inspiró su pasión por el balón, al igual que a Léider y a muchos de los chiquillos en Llano Verde, en pantalones cortos y chancas por un calor sofocante y por la escasez en este rincón olvidado de **Cali**. Allí, los sueños de progresar, estudiar una carrera universitaria o de tener empleo se quedan en eso, en sueños.

Después de una cuadra desde su casa, Álvarito dobló a la derecha para tomar la estrecha calle donde vivían Léider y Jean Paul. Él era el mayor de los cinco, con 16 años.

Al grupo se les unieron **Jair Andrés Cortés**, compañero de colegio de Álvaro, y **Luis Fernando Montaña**.

No sospechaban que la muerte los aguardaba en esa mañana del 11 de agosto de 2020, en el aledaño cañaduzal de la **hacienda Las Flores**, un extenso terreno cuyos dueños lo tienen en alquiler. (...)

Mientras el padre de Álvaro le dejaba el almuerzo listo a su hijo y se iba al rebusque, los menores estaban comiendo caña en ese lugar, distante de sus viviendas donde nadie los podía escuchar, si hubieran llegado a gritar con todas sus fuerzas. Habían llevado cuchillos para coger la caña y mascarla, a unos pasos de una especie de laguna, donde solían mitigar el sofoco, como en otras ocasiones lo hicieron. (...)

Tres hombres se comunicaban por radioteléfonos, cuando empezaron a perseguir a los adolescentes, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.

⁴⁸ Tomado de la página <https://www.noticiasrcn.com/nacional/en-vivo-carlos-ernesto-camargo-se-posesiona-como-nuevo-defensor-del-pueblo-362202>

⁴⁹ CB Carolina Bohórquez 11 de agosto 2021, 11:09 A. M. **El misterio sin resolver de la tortura y masacre de cinco niños en Cali**. Publicación tomada el día 28 de julio de 2022 a las 7:30 pm de la página electrónica: <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/masacre-de-llano-verde-un-ano-del-crimen-de-5-jovenes-en-cali-609489>



*“Ya lo atrapé”, dijo uno de ellos. Su interlocutor le respondió: “Téngalo ahí, ya voy subiendo” y otro dijo: “**Estoy persiguiendo a otro**”. Uno de los hombres se movilizaba en moto. Eran tres voces masculinas, como consta en declaraciones dentro de los procesos judiciales.*

*De acuerdo con la Fiscalía, los menores fueron rodeados, obligados a hincarse en tierra hasta someterlos con sus rostros hacia el suelo y las manos arriba. No tenían sus camisas puestas. **Luego retumbaron los disparos.** (...)*

Las víctimas recibieron tiros de gracia y quedaron tendidas boca abajo. Léider, a unos pasos de Luis Fernando. Más alejados estaban Jean Paul y el pequeño Álvaro, que tenía grandes cortadas. Una, en el cuello y otra, en la nariz. Luis Fernando también tenía una herida en cuello, al parecer, causada por un arma cortopunzante.

Tras el asesinato, los cinco cadáveres quedaron toda la tarde en el cañal con ese sol inclemente sobre sus espaldas. Allí también quedaron los cuchillos que habían llevado para comer caña. (...)

Don Álvaro volvió a su vivienda y la comida para su hijo seguía intacta en una olla. Supuso que no había regresado y ya eran las 5 de la tarde de ese martes.

*“**En mi corazón sentí algo raro**”, cuenta este padre adolorido, oriundo de **Caquetá** como lo era su hijo. Ambos arribaron a Llano Verde, desplazados por la violencia, en 2017.*

El padre, confundido salió hacia la casa de los Cárdenas, preguntando por Álvaro. Tampoco estaba Léider. Anochecía. El corazón le latió más fuerte y rápido, y el presentimiento creció. Podía estar en el cañaduzal.

“Vimos unas luces. Era como si se estuvieran haciendo señas y luego las apagaron. Después llegaron policías, pero hablaron pocos minutos con unos vigilantes. No se quedaron y no pareció más raro”, dicen las familias.

Ya era de noche y con una linterna, don Álvaro se abrió paso hasta que encontró a su hijo y lo volteó. Después llegaron Francia y los demás familiares de Léider, Jair y Jean Paul.

*En el colegio Llano Verde, donde estudiaron **Jair** y **Álvaro**, recuerdan a estos muchachos extrovertidos, el primero, en séptimo grado y el segundo, en octavo. Recorrían bulliciosos el segundo piso de las instalaciones hasta llegar a sus salones.*

“Eran como todo niño de acá de la zona, querían ser futbolistas”, dice Diana Milena Gómez, coordinadora en el plantel. (...)”, lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.32. A su vez, la revista digital semana.com, publicó el 11 de junio de 2022 el artículo denominado: **Condenan a otro responsable por masacre de cinco menores de edad en Llano Verde**⁵⁰, en el cual consignaron lo siguiente: “(...) ¿Qué ocurrió en Llano Verde? **SEMANA en su momento obtuvo el interrogatorio de los capturados por este crimen. En esos testimonios relatan cómo abordaron a los jóvenes y atribuyeron la culpa a un tercer implicado, que la Policía identificó como Gabriel Alejandro Bejarano, alias Mono,** quien finalmente habría accionado el arma de fuego contra Juan Manuel Montaña, Leyder Cárdenas, Jean Paul Perlaza, Jair Andrés Cortés y Álvaro José Caicedo, todos afrodescendientes entre los 14 y los 15 años.

⁵⁰ Tomado de la dirección electrónica <https://www.semana.com/nacion/articulo/condenan-a-otro-responsable-por-masacre-de-cinco-menores-de-edad-en-llano-verde-en-cali/202219/> el 28 de julio de 2022 a las 7:57 pm



Según los documentos que tuvo en su poder SEMANA, los cinco menores fueron vistos por sus agresores a eso de la una de la tarde, caminaban en grupo y tenían algunos cuchillos para cortar trozos de caña y comer.

Esto dijo Juan Carlos Loaiza, uno de los implicados, en el interrogatorio:

- Me llama el mono por radio y me dice que si puedo arrimar un momentico a la guaya (entrada vehicular al cañal), entonces yo cogí mi moto para recogerlo.

Jefferson estaba con el mono, cuando llegué Alejandro estaba detrás de una piedra escondido, entonces **yo fui frenando y él me hizo una seña con la mano derecha para que no arrimara tanto, le pregunté qué pasó y él me dice “allá vienen unos chinos”, yo le digo que son trabajadores y él me dice que no, que estaban robando**, entonces cuando los pelados se van acercando un poco, estaban con unos cuchillos, yo me monté en una montañita para mirar bien quiénes eran los que venían, los pelados voltearon por el cañaduzal.

Alejandro nos dice a Jefferson y a mí, háganse ustedes por la parte de atrás. Yo me fui por la izquierda y Jefferson por la derecha, Alejandro se mete por la parte de atrás de la caña, entonces Jefferson les dice: **“muchachos, qué hacen”. Yo me quedo más atrás y le digo a los muchachos que suelten los cuchillos; Jefferson se los quita y los tira por el cañaduzal**, yo le dije Alejandro (por radio) aquí tenemos a los pelados.

En ese momento me acerco más y les digo que mucho cuidado porque por acá estaban robando mucho, que si se pueden ir, luego le pregunté a uno de ellos cuántos años tenía, **y en ese momento salió Alejandro con la cara tapada con una pañoleta y les dice: “todos al suelo, que miraran al suelo, que no le miraran la cara”**, los menores no opusieron ninguna resistencia para entregar los cuchillos. Cuando les quitan los cuchillos, los muchachos dijeron que iban a coger caña y luego a bañar a un lago, yo me iba arrimar donde Alejandro cuando él detonó la primera bala en la cabeza, yo me cogí mi cabeza y dije Dios mío, salí asustado porque de pronto Alejandro atentaba contra mi vida, yo salí de una, y cuando prendo la moto escuchó dos impactos más y Jefferson también dijo: Dios mío, qué hizo ese man. Jefferson se fue conmigo, llegamos a las máquinas.

A los 15 minutos llegó Alejandro preocupado, quitándose la ropa para irse. Él mencionó “por allá pasó algo, como que estaban robando”, lo dijo todo nervioso, entonces sale en su bicicleta y yo me voy detrás de él y le preguntó qué había hecho, y él me levanta la voz y me dice “después hablamos, después hablamos”.

Jefferson Ángulo en su interrogatorio insistió en que los adolescentes no estaban robando -como lo aseguró Alejandro en su momento-, dijo que apenas fueron requeridos, ellos soltaron los cuchillos sin oponer resistencia. Contrario a lo que contó Juan Carlos, Jefferson asegura que él botó las armas blancas solo después de que los cinco menores fueron asesinados.

- Me dice Alejandro, el supuesto escolta que mantenía por allá en esa zona, no sé quién lo haya contratado, solo sé que recibía pagos de ahí, que tiene un porrito, llegamos a un punto donde hay una guaya (...) vemos un tumulto de gente y él llama a un compañero por radio y le dice que venga que hay unos manes que van a robar.

(...) Los muchachos inocentemente, niños que no tenía nada que ver con nada, ni con nadie, se meten al cañaduzal (...), lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.



2.2.33. En el escrito de preacuerdo suscrito por Juan Carlos Loaiza Ocampo con la Fiscalía General de la Nación se consignó lo siguiente:

“(…) HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES LLANO VERDE

En la ciudad de Cali (Valle del Cauca) El día 11 de agosto del año 2020, sector del barrio LLANO VERDE, parte Oriental, donde colinda con unos cañaduzales, Finca las Flores, coordenadas 3 22 59 87 “ N 76 30 11 48 “ O, cuando transcurrían entre las 12:30 y las 13:30 horas, los menores de edad JAIR ANDRÉS CORTÉS CASTRO, ÁLVARO JOSÉ CAICEDO SILVA, LEIDER CÁRDENAS HURTADO, JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA Y LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑÓNEZ, se encontraban departiendo dentro del cañaduzal suerte número 1, cuando son sorprendidos por los señores GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO, JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO y JEFFERSON MARCIAL ÁNGULO QUIÑÓNEZ, quienes mediando acuerdo previo se asignaron roles, se distribuyeron tareas, se hicieron aportes esenciales que se ejecutaron y consumaron, pues fueron perseguidos, encerrados, sometidos, puesto en condiciones de indefensión al hacerlos arrodillar y ejecutados con arma de fuego, donde el señor JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, contribuye de manera objetiva a la ejecución de este hecho, ya que se encarga junto con JEFFERSON MARCIAL ANGULO, a doblegar bajo amenazas con arma de fuego la voluntad de los menores, ejecutándose el homicidio, por quien dispara que no fue otro que el señor GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO, quien ya fue condenado por estos hechos a la pena de 38 años de prisión. Por lo anterior el ciudadano JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, se le acuso como coautor de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, en concurso homogéneo y sucesivo en cuatro oportunidades más, De a acuerdo a los presupuestos del artículo 103, 104 No. 4 y 7, de nuestro ordenamiento penal, en concurso homogéneo y sucesivo, en cuatro oportunidades más, además del concurso heterogéneo con el delito de FABRICACION, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES. Es importante aclarar que, si bien la imputación y la acusación, se hace partiendo de 400 meses en atención a que por error se tuvo en cuenta la circunstancias presupuestadas en el artículo 119 de nuestro ordenamiento penal, no lo es menos que al analizar de forma cuidadosa el texto de la norma, la misma se aplica para casos de lesiones personales y no para homicidios, lo que implica esta aclaración, señalando además que, como se trata de unos hechos donde las víctimas son menores de edad, no tendrían derecho a beneficio alguno, por lo tanto no se aplicaría la ley 890 del 2004, lo que quiere decir que la pena partiría por el homicidio agravado de 25 años de prisión, es decir 300 meses, y respecto del tráfico, fabricación y porte de armas de fuego accesorios o municiones, por la coparticipación criminal, artículo 365, numeral 5, del código penal partiría de 18 años, es decir 216 meses (...).”

2.2.34. En la sentencia de primera instancia (Preacuerdo) No. 010 proferida por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito Funciones de Conocimiento el día once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022) se consignó lo siguiente:



“(…) OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a proferir sentencia condenatoria en contra del ciudadano **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO** quien viene siendo procesado por los delitos de **HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO**, conforme al preacuerdo al que llegó la Fiscalía 4 Especializada de Cali, con el acusado, debidamente asesorado por su defensor y que fuera verificado y aprobado por este Despacho.

HECHOS

Tuvieron su ocurrencia el día 11 de agosto de 2020, en inmediaciones de la finca las flores, ubicada en las cercanías al barrio Llano Verde de esta ciudad y a la antigua vía al basurero Navarro, siendo aproximadamente entre las 12:30 y 13:30 horas, de acuerdo a todas las labores de investigación; el aquí implicado **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO**, en asocio con otras dos personas, quienes mediando acuerdo previo en el que se asignaron roles, y se distribuyeron tareas, hicieron aportes esenciales que se **ejecutaron y consumaron, persiguieron, encerraron, sometieron y asesinaron con arma de fuego, a CINCO MENORES DE EDAD identificados como JAIR ANDRÉS CORTÉS CASTRO, ÁLVARO JOSÉ CAICEDO SILVA, LEIDER CÁRDENAS HURTADO, JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA y LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONEZ, quienes se encontraban departiendo y perdieron la vida producto de impacto de arma de fuego en sus cabezas**

RESUELVE:

PRIMERO.- CONDENAR al acusado **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO**, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA Nº 1.143.969.665, de condiciones civiles y personales conocidas al interior del presente asunto, como COAUTOR penalmente responsable de la conducta punible de **HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, Y EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO**, a la pena principal de **CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (438) MESES DE PRISIÓN**, de conformidad a los planteamientos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO.- CONDENAR a **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO**, a las penas accesorias de la prohibición para el porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones por un término de quince (15) años y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo de veinte (20) años.

TERCERO.- NEGAR a **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO**, el subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena previsto en el artículo 63 del Código Penal, y la sustitutiva de prisión domiciliaria prevista en los artículos 38 y 38B del Código Penal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, debe cumplir su pena de prisión en establecimiento carcelario. A través del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de esta Capital se procederá a librar los oficios pertinentes para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto (...).

2.2.35. En la sentencia de preacuerdo de primera instancia No. 030 proferida por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito Funciones de Conocimiento el día diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022) se ordenó lo siguiente:



“(…) OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a proferir sentencia condenatoria en contra del ciudadano YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES, identificado con cédula de ciudadanía número 1.037'588.271, judicializado por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO, y que conforme al preacuerdo al que arribaron la Fiscalía 4 Especializado de esta ciudad, con el acusado, debidamente asesorado por su defensor, fuera verificado y aprobado por este Despacho judicial.

HECHOS

*Tuvieron su ocurrencia el día 11 de agosto de 2020, en inmediaciones de la finca las flores, ubicada en las cercanías al barrio Llano Verde de esta ciudad y a la antigua vía al basurero Navarro, siendo aproximadamente entre las 12:30 y 13:30 horas, de acuerdo a todas las labores de investigación; el aquí implicado YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES en asocio con los señores JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO y GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO, quienes mediando acuerdo previo en el que se asignaron roles, y se distribuyeron tareas, hicieron aportes esenciales que se **ejecutaron y consumaron, persiguieron, encerraron, sometieron y asesinaron con arma de fuego, a CINCO MENORES DE EDAD identificados como JAIR ANDRÉS CORTÉS CASTRO, ÁLVARO JOSÉ CAICEDO SILVA, LEIDER CÁRDENAS HURTADO, JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA y LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONEZ, quienes se encontraban departiendo y perdieron la vida producto de impacto de arma de fuego en sus cabezas***

RESUELVE:

PRIMERO.- CONDENAR al acusado **YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA N° 1.037'588.271**, de condiciones civiles y personales conocidas al interior del presente asunto, como AUTOR penalmente responsable de la comisión de las conductas de **HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO, Y EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO, a la pena principal de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (438) MESES DE PRISIÓN**, de conformidad a los planteamientos expuestos en la parte motiva de esta decisión.


SEGUNDO.- CONDENAR a YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES, a las penas accesorias de la prohibición para el porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal impuesta.

TERCERO.- DECLARAR que YEFERSON MARCIAL ANGULO QUIÑONES, no es beneficiario del subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena prevista en el artículo 63 del Código Penal, tampoco del sustituto de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38B ibidem, pero si al descuento del tiempo que ha permanecido en detención preventiva. En consecuencia, debe cumplir su pena de prisión en el establecimiento carcelario que para tal efecto dispongan las autoridades del INPEC. A través del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de esta Capital se procederá a librar los oficios pertinentes para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto. (...).”

2.2.36. En el reporte de iniciación –FPJ-1 de Policía Judicial de fecha 11 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645 se registró:



										Número Único de Noticia Criminal									
										7 6 0 0 1 6 0 0 1 9 3 2 0 2 0 0 6 6 4 5									
Entidad										Dpto Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo									

										REPORTE DE INICIACIÓN -FPJ-1																																																						
Este formato será diligenciado por Policía Judicial																																																																
Departamento					Valle del Cauca					Municipio					CALI					Fecha					2020					08					11					Hora					2					3					0					3				

1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS

Fecha de los hechos A M D Hora

Escriba una síntesis cronológica y concreta

SIN CAPTURADO. SIENDO LAS 22:30 HORAS DEL DIA DE HOY 11-08-2020 REPORTA LA UNIDAD PALACIO 8 QUE EN EL SECTOR RURAL DE LLANO VERDE, EN UN CAÑADUZAL, VIA PUBLICA, SE ENCUENTRAN CINCO (05) CUERPOS SIN VIDA POR ARMA DE FUEGO Y ARMA BLANCA, CNI MASCULINOS. SIN MAS DATOS. CONOCE CASO SIJIN. FISCAL 93 SECCIONAL URI CENTRO. CELULAR INVESTIGADOR DEL CASO 3187759285.

Medio utilizado para el reporte de iniciación: CENTRAL DE RADIO

(...)

Relato de los hechos

SIN CAPTURADO. SIENDO LAS 22:30 HORAS DEL DIA DE HOY 11-08-2020 REPORTA LA UNIDAD PALACIO 8 QUE EN EL SECTOR RURAL DE LLANO VERDE, EN UN CAÑADUZAL, VIA PUBLICA, SE ENCUENTRAN CINCO (05) CUERPOS SIN VIDA POR ARMA DE FUEGO Y ARMA BLANCA, CNI MASCULINOS. SIN MAS DATOS. CONOCE CASO SIJIN. FISCAL 93 SECCIONAL URI CENTRO. CELULAR INVESTIGADOR DEL CASO 3187759285.


EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SE PRESENTÓ EL HOMICIDIO DE 5 MENORES DENTRO

DE LAS INMEDIACIONES DE LA FINCA LAS VEGAS, INMEDIATAMENTE SE TRASLADA AL LUGAR DE LOS HECHOS, DONDE EFECTIVAMENTE SE OBSERVAN 5 CUERPOS TENDIDOS EN MEDIO DE CAÑADUZAL, EN ESE MISMO INSTANTE SE EMPEZÓ A CONTACTAR CON LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS QUIÉNES MANIFESTARON, QUE SUS FAMILIARES LOS HOY OCCISO HABÍAN SALIDO MÁS O MENOS A LAS 11 DE LA MAÑANA Y QUE SE HABÍAN DIRIGIDO HACIA EL CAÑAL QUE QUEDA COLINDANTE CON EL BARRIO LLANO VERDE, DESDE ESE INSTANTE NO SE VOLVIÓ A SABER DE LAS VÍCTIMAS, ES ASÍ COMO A LAS 17:00 HORAS APROXIMADAMENTE AL NOTAR QUE LOS JÓVENES NO LLEGARON A ALMOZAR Y NO APARECÍAN, PROCEDEN A SALIR A BUSCAR A ESTOS, SE DIRIGEN HASTA LA FINCA LAS VEGAS PUESTO QUE, SEGÚN TESTIGOS OBSERVAN QUE LOS MENORES SE DIRIGEN HASTA ESTE SITIO A CONSUMIR LA CAÑA DE LA FINCA LAS VEGAS, PASADAS LAS 19:00 HORAS SUS FAMILIARES ENCUENTRAN LOS CUERPOS CON LA AYUDA DE UNA PATRULLA DE POLICÍA LOS CUALES SE TRASLADABAN EN LAS MOTOCICLETAS DE SIGLAS 272647 Y OTRA MOTOCICLETA CON PLACAS RVW62D, CONOCIO CASO PATRULLA GRUPO G-5 DE LA SIJIN MECAL.

(...)"

2.2.37. En acta de inspección a lugares –FPJ-9 de Policía Judicial (Miranda Cauca) de fecha 12 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645 se registró:



				Número Único de Noticia Criminal																					
				7	6	0	0	1	6	0	0	0	1	9	3	2	0	2	0	0	6	6	4	5	
Entidad	Radicado Interno			Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo																
																									
ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES – FPJ - 9																									
Este formato será diligenciado por Policía Judicial																									
En <u>Miranda (Cauca)</u> , siendo las 17:30 horas del día 12 del mes agosto del año 2020 de conformidad con la normatividad vigente que aplique, los suscritos servidores de Policía Judicial: ARMANDO ALVAREZ, LEONORA ORTIZ MOLINA, JORGE HERNAN CUENCA, OSCAR RAMIREZ y el Señor Mayor de la Policía nacional SIJIN Carlos Enrique Cárdenas, bajo la coordinación del servidor de Policía Judicial CTI ARMANDO ALVAREZ, identificados como aparece al pie de su firma, se trasladaron al lugar ubicado en: la Planta INCAUCA SA., con el fin de efectuar inspección técnica.																									

(...)

2. DESCRIPCION DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA INCLUYENDO LOS HALLAZGOS Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS
Se trata de la oficina de seguridad física del ingenio INCAUCA SA, donde fuimos atendidos por el señor Carlos Alfonso Granados Rodríguez identificado con la CC 79.302.439 de Bta, teniendo en cuenta la OPJ N° 5783033 emanada de la fiscalía 47 Seccional URI Cali, en la cual se solicita informar que empresa de vigilancia presenta sus servicios de seguridad en sus predios de cultivo para los días 10, 11 y 12 de agosto del 2020, así como las armas utilizadas para el servicio de seguridad, a lo anterior el señor Granados Rodríguez, aporta informe de reporte de actividades del patrullaje N° 224 rendido por el supervisor Carlos A. Giraldo, igualmente se le solicita los contratos de vigilancia realizados con seguridad de occidente y acreditación del uso de los terrenos donde ocurren los hechos a cargo de INCAUCA, a lo que manifestó, no tenerlos en su oficina y se comprometió allegarlos al despacho para que obre dentro de las diligencias.

(...)"

2.2.38. El diario electrónico denominado: "eltiempo.com" publicó el día 16 de noviembre de 2020 lo siguiente: "**¿Quién los mató?, el clamor que se convirtió en una canción** ⁵¹" *Artistas de la región Pacífica compusieron esta canción sobre la masacre de Llano Verde.*

*Hace casi tres meses, el 11 de agosto, **cinco madres unieron su voz a ese grupo. Cinco niños entre los 14 y 15 años** (Luis Fernando Montaña, Léider Cárdenas, Josmar Jean Paul Cruz, Jair Andrés Cortés y Álvaro José Caicedo), todos con sueños e ilusiones, unos bailarines, otros futbolistas, todos amigos y casi hermanos, fueron masacrados en un cañaduzal de Llano Verde, en Cali.*

Fueron sus madres y padres quienes los encontraron sin vida entre esas plantaciones que son un símbolo de crueldad, pero también de tradición para todo el Valle del Cauca y en general para el Pacífico.

***El dolor de esa masacre se convirtió tiempo después en una canción que prolonga ese grito desatendido.** Músicos de la región Pacífica unieron sus voces de dolor a las de esas madres y se preguntan también: ¿Quién los mató?*

*La idea inicial surgió del director de cine chocoano, **Jhonny Hendrix Hinestroza, quien tuvo el deseo de plasmar en un videoclip la indignación y frustración que le causó el asesinato de los cinco jóvenes.** Sin embargo, encontró en la música una puerta mucho más amplia para compartir el sentimiento de pérdida. Con la voz de su sobrino, el cantautor Hendrix, junto a las voces de Nidia Góngora,*

⁵¹ Tomado de la dirección electrónica

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e1eYCumt3XkJ:https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/quien-los-mato-la-cancion-que-retrata-el-horror-de-la-masacre-de-llano-verde-546291+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co> SIMÓN GRANJA MATÍAS



*Alexis Play y Junior Jein, y dirigida musicalmente por Cristhian Salgado, **surgió esta canción que resalta la irresponsabilidad del Estado frente a la violencia hacia los jóvenes, cuya sangre está en ‘manos ajenas’.***

EL TIEMPO conversó con los artistas sobre los gritos de dolor, de denuncia y racismo, pero también de esperanza... (...)

Hay una frase en la canción que dice: “El llanto de una madre hace más eco que una bala...” (N. G): Yo pienso que gran parte de la memoria histórica se mantiene visible por los gritos de quienes de alguna manera no hemos tenido miedo, miedo de decir, de cantar. Yo soy madre. Las madres damos todo por nuestros hijos porque son parte de nosotras. Una madre que pierde un hijo de una forma tan cruel y violenta como lo perdieron las madres de Llano Verde, las de Soacha y otras tantas madres en Colombia, estoy segura de que pierde el miedo. Después de que a uno le maten a un hijo, uno puede decir: ‘nada peor me puede pasar’. En medio de ese grito, uno grita verdades y absolutamente todo lo que tenga que gritar porque ya no hay temor. Nosotras como madres somos las que estamos pariendo a los hijos que son víctimas pero también a los que son victimarios (...)

¿Cómo los afectó a ustedes esta masacre? N. G.: Cuando fue el asesinato de los chicos, yo estuve con las familias, estuve en el entierro, en el cementerio, lloré con las mamás, con los hermanitos. Yo viví 15 años en Ciudad Córdoba, el barrio que queda al lado de Llano Verde. En ese entonces no existía ese barrio. Pero de alguna manera yo estoy conectada con ellos. Muchos de estos jóvenes vienen del Pacífico, así como llegué yo. Encontramos en esta ciudad un lugar muy distinto al que nosotros estábamos acostumbrados; un lugar donde la familia se entiende de otra forma, donde la vida de comunidad es primordial. Pero llegan estos chicos a la ciudad, salen de sus territorios por la violencia a buscar un supuesto mejor vivir y llegan acá y son rechazados. Es una cruel realidad. Al principio fue impactante porque la canción es cruda y habla de manera contundente de unos hechos reales. Habla de lo que realmente está sucediendo. Nosotros seguiremos haciendo música con sentido, llevando un mensaje y siendo la voz que cuenta lo que este país se ha negado a aceptar y a visibilizar. Lo anterior constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.39. El canal digital aquí.today publicó hace dos años⁵² lo siguiente: ¿Quién los mató? La profunda canción dedicada a menores de Llano Verde y otras víctimas de masacres



⁵² Tomado de la dirección electrónica <https://aqui.today/tag/llano-verde/>



El dolor, las preguntas sin responder, la incertidumbre, el adiós que no se dio, el sinsabor que queda, fueron algunas de las razones que llevaron a un grupo de artistas del Pacífico a escribir una canción que reuniera todo aquello que Colombia quiere decir en medio de esta guerra silenciosa. La misma que le está arrebatando la vida a jóvenes inocentes, como los de Llano Verde o los de Samaniego. ¿Quién los mató?

*Esa pregunta que ronda en la cabeza de las madres que los vieron salir de sus casas, pero no regresar, es la misma que carcomió el corazón de **Hendrix**, nuevo artista emergente del Valle del Cauca; **Cristhian Salgado**, productor musical; los cantantes **Junior Jein**, **Nidia Góngora** y **Alexis Play**; y el director y productor de cine **Jhonny Hendrix Hinestroza**.*

A todos los unió el mismo sentir de impotencia ante el asesinato de cinco menores de edad el pasado 11 de agosto en un cañaduzal del oriente de Cali y juntos hicieron un homenaje a la memoria de ellos y de otras víctimas de masacres en el país.

Aquí Today habló con dos de los autores de esta canción: Junior Jein y Cristhian Salgado, quienes dieron detalles de esta catarsis emocional que los llevó a crear **el himno de las familias que hoy claman justicia por aquellos que no llegaron a la hora de la cena**.

¿Qué es realmente ‘Quién los mató’? Cuesta pensar que es solo una canción que salió del dolor, es mucho más

Junior Jein (JJ): Es una historia, es resistencia, es el clamor de una mamá, es un grito que pide justicia, es Colombia pidiendo explicaciones, rechazando el olvido, es todo lo que se quiso decir en ese momento.

De ahí nació, de que todos teníamos algo que decir respecto al asesinato de los jóvenes en Llano Verde, sin dejar de lado todas las demás masacres que han ocurrido en Colombia, en Samaniego, en Urabá, los falsos positivos de Soacha... Por eso es una pregunta, un interrogatorio en común: ¿Quién los mató? Con rabia, con dolor, con sufrimiento (...)", lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.

2.2.40. La canción reseñada puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica:
<https://music.youtube.com/watch?v=i7vBVvvHBYY&list=RDAMVMi7vBVvvHBYY>

Dicha canción tiene el siguiente extracto:

¿Quién los mató?

*Madre
No llegaré a la hora de la cena
Aparecí en un lugar
Que no era mi hogar
Me duele estar tan lejos
Oigo me están llamando
Madre
No llegaré a la hora de la cena
Aparecí en un lugar
Que no era mi hogar
Dicen que ven mi cuerpo
Oigo me están llorando
Volvió el monstruo que acecha
El que despoja las tierras
Y el que pudre las cosechas*



*Tiene la mirada fría y carece de empatía
Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía
No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas
Destruye lo que vé y no se conforma
Solo obedece intereses económicos
Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos
Hermanos de otras madres que salieron de sus casas
Se fueron hace un día y hace años que no abrazan
Ese monstruo llegó al cañaduzal
Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal
¿Por qué ser otro desaparecido?
¿Por qué darlo todo por perdido?
¿Por qué cambiar mi nombre y apellido?
¿O me quieren pasar por otro falso positivo?*

*Madre
No llegaré a la hora de la cena
Aparecí en un lugar
Que no era mi hogar
Me duele estar tan lejos
Oigo me están llamando
Madre
No llegaré a la hora de la cena
Aparecí en un lugar
Que no era mi hogar
Dicen que ven mi cuerpo
Oigo me están llorando
Hay sangre en la arena y esta vez no es del torero
Son cinco chicos que salieron pero nunca volvieron
Uno de ellos resistió de una manera inexplicable
Para señalar el camino y que lo pudiera encontrar su
madre
En medio de una escena con respuestas en potencia
Y unos cuántos que no se entendía que hacían allí
El dolor de familiares impulsados por el miedo
Queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir
Con vida a contarle al mundo lo ya sucedido
Si esta madre no se atreve todo estaría perdido
Y estaría en archivo y otra historia pa' contar
Del país con la clase obrera que se muere en la impunidad
Sangre
Hay sangre en unas manos ajenas
Si me convierto en canción
Solo recuérdame feliz
Aquí no pasa el tiempo
No hay pena o sufrimiento
Ahora soy yo quien va a escandalizarse
Con la fuerza de los gritos de Ruby Cortes en los cañaduzales
Le exijo a la justicia que este caso se aclare
Y que no quede impune como casi siempre hacen
Nada, la vida de los negros no importa nada
Lo primero que dicen es: "andaban en cosas raras"
Como Jean Paul, Jair, Léyder, Álvaro y Fernando
Somos víctimas del sistema y el abandono del estado
Pero el pueblo no se rinde carajo
¿Quién los mató?
¿Quién interrumpió sus sueños?, eso no era justo, no (¿quién
los mató?)
Eran universitarios los de Samaniego*



2.2.41. Los hechos que anteceden, esto es, el vil asesinato del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** cometido el día once (11) de agosto de dos mil veinte (2020), causó un daño a su grupo familiar, el cual debe ser calificado como antijurídico a la luz del artículo 90 Superior, lo cual determina la consecuente obligación para el Estado de resarcir los perjuicios causados a estos, a través de la entidad demandada.

Por todo lo anterior, **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional –PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** se consideran administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios generados a la familia de la víctima, esto es, del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, toda vez que, las entidades públicas en cita a pesar de ser garantes de su seguridad, actuaron de forma omisiva frente a sus deberes legales y constitucionales a sabiendas de la situación crítica de violencia que se vivenciaba en el barrio Llano Verde de Cali para la época de los hechos; situación que demandaba acciones contundentes en materia de seguridad ciudadana, más las mismas no se tomaron, y las actuaciones que si se emprendieron no fueron a todas luces suficientes para evitar la configuración del hecho dañoso plurimentado.

2.2.42. La omisión de los deberes constitucionales, legales y misionales de las entidades aquí demandadas, en especial lo atinente a la omisión de sus deberes de protección, causó a mis mandantes un daño que deberá catalogarse como antijurídico y por esa razón los perjuicios que causaron deberán ser resarcidos en acatamiento a los dispuesto en el artículo 90 Constitucional.

2.2.43. El 09 de agosto de 2022, fue radicada la solicitud de conciliación extrajudicial ante los Procuradores Judiciales para Asuntos Administrativos de Bogotá / D.C.⁵³

2.2.44. El 27 de octubre de 2022, se instaló la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 85 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá / D.C.; dicha diligencia fue declarada fallida por parte del Ministerio Público a causa de la falta de ánimo conciliatorio de las entidades públicas; por esa razón profirió constancia de no acuerdo, quedando así surtido el requisito de procedibilidad para acceder ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a la luz de lo normado en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del CPACA.

2.2.45. El daño que el Estado, a través de las entidades demandadas en cita, le ocasionó a los demandantes debe ser calificado como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para el Estado de resarcir los daños y perjuicios causados a quienes ostentan la legitimación en la causa por activa.

⁵³ Ver prueba 8. Constancia envío solicitud de conciliación.



3. Fundamentos de derecho de las pretensiones

3.1. De la responsabilidad del Estado

A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”⁵⁴, de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado, dicha cláusula se encuentra consagrada en lo dispuesto en su artículo 90, el cual, establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que se causen por la acción u omisión de las autoridades públicas o sus agentes, al respecto dicha norma reza el siguiente tenor:

“[...] El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.”

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir [...]” (se destaca)

Según lo prescrito en el artículo en cita, se desglosa que la responsabilidad administrativa, patrimonial y extracontractual del Estado tiene como fundamento la existencia de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública⁵⁵, tanto por su acción como por su omisión.

En atención a los postulados de la norma relacionada *ad supra*, la doctrina y la jurisprudencia han fundamentado diversos títulos de responsabilidad atribuibles al Estado dentro de los cuales se comprende la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional entre otros, aunque en últimas el verdadero y auténtico fundamento de la responsabilidad patrimonial de Estado está en el deber que tiene la administración de proteger y garantizar la efectividad de los derechos que se reconocen a los administrados, los cuales, no pueden verse vulnerados por daños que lesionen su patrimonio y que alteren la igualdad que se pregonaba de todos los ciudadanos frente a las cargas públicas.⁵⁶

En el marco de la jurisprudencia Constitucional, la Corte ha considerado como elementos de responsabilidad del Estado los siguientes:

“[...] Con fundamento en este postulado de principio, el instituto resarcitorio se configura siempre y cuando: (i) ocurra un daño antijurídico o lesión, (ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público y (iii) exista una relación de causalidad entre el daño y la acción u omisión del ente público; ampliándose de este modo el espectro de la responsabilidad estatal al superar el postulado inicial de la falla en el servicio, para adentrarse en el ámbito del daño antijurídico entendido como aquél daño patrimonial o extrapatrimonial que se causa en forma lícita o ilícita al ciudadano, sin

⁵⁴ La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley, sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Sentencia C-832 de 2001.

⁵⁵ De conformidad con lo establecido en el artículo 90 Superior “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. al respecto consúltese la Sentencia de 21 de octubre de 1999, Exps.10948-11643. Es “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Véase Sentencia de 13 de julio de 1993. La Corte constitucional en las sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002. Sostuvo: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”.

⁵⁶ Tamayo Jaramillo, Javier. La Responsabilidad del Estado. El daño antijurídico, P. 134



que éste se encuentre en la obligación jurídica de soportarlo -
. [...]” (Subrayado y negrilla fuera de texto)⁵⁷

3.2. De los elementos de la responsabilidad del Estado.

De acuerdo con el artículo 90 constitucional, se distinguen como elementos fundamentales de la responsabilidad del Estado, el daño antijurídico, la imputación y el nexo de causalidad.

3.2.1. Del daño antijurídico

En relación con el daño antijurídico, se ha establecido que tal noción, concierne a aquella carga que la víctima no estaba obligada a soportar, al respecto el Consejo de Estado ha expresado lo siguiente:

“[...] El daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos elementos: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (V.gr. la ocupación material del inmueble por una población específica) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada. De allí que, el daño antijurídico lejos de ser un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico se transforma para convertirse en una institución deontológica o axiológica, pues sólo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (Artículo 16 de la ley 446 de 1998) y, por lo tanto, sólo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga [...]”⁵⁸ (subraya y negrilla fuera del texto original)

3.2.2. De la imputación

La imputación como elemento constitutivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, se define como la atribución jurídica que se le hace a la entidad pública causante del daño antijurídico sufrido, por ser esta la generadora del mismo, frente a este tema, la Corte Constitucional ha señalado:

“[...] el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible⁵⁸. Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (No realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (Capacidad individual de acción). La muerte no le es

⁵⁷ Sentencia C-619 de 2002

⁵⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Sentencia Cinco (5) de julio de dos mil doce (2012). Rad. (21928) Consejero ponente: Enrique Gil Botero



*imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, **si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano [...]**⁵⁹ (Se destaca)*

De conformidad con lo anterior, la imputación exige analizar como primera medida el ámbito fáctico, y la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico. La imputación establece la obligación de responder por parte del Estado bajo cualquiera de los títulos de imputación, bien sea de falla en el servicio, riesgo excepcional o daño especial.

3.2.3. Del nexo de causalidad

Sobre la causalidad como elemento de la responsabilidad del estado, la Sección Tercera del Consejo de estado en su jurisprudencia ha señalado lo que se cita:

*“[...] El elemento de responsabilidad **“nexo causal”** se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico. Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías: **la equivalencia de las condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada por la de causalidad adecuada**, en la cual el daño se tiene causado por el hecho o fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo la primera teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen la misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”. Y sobre la teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es aquella que normalmente lo produce. **De estas teorías en materia de responsabilidad extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un correctivo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para evitar la extensión de la cadena causal hasta el infinito [...]**⁶⁰ (subraya y negrilla fuera de texto)*

De conformidad con lo anterior, el nexo causal atiende al análisis de las causas que contribuyeron a la producción del daño que se reclama, la actuación de la administración y quienes deben responder por este.

Así las cosas, para poder atribuir responsabilidad patrimonial alguna al Estado, es necesaria la concurrencia de los elementos antes enunciados, es decir, debe existir

⁵⁹ al respecto puede consultarse: Corte Constitucional, sentencia SU-1184 de 2001

⁶⁰ Al respecto pueden consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: María Elena Giraldo Gómez, sentencia del 11 de diciembre de 2002, Radicación número: 05001-23-24-000-1993-00288-01 (13818), Sentencia proferida el día 25 de julio de 2002. Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente 13.680 entre otras.



un daño y la antijuridicidad del mismo y este debe ser imputable a la administración a través de un nexo de causalidad.

3.3. Juicio de la responsabilidad del Estado en el caso concreto

Según lo hasta aquí discurrido, para que se pueda declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, se debe verificar la existencia de tres elementos, a saber: *i)* la existencia de un daño antijurídico; *ii)* la imputación del daño por la acción u omisión de la Autoridad Pública; y *iii)* el nexo de causalidad existente entre el daño y la imputación. En el presente caso, dichos elementos se configuran así:

3.3.1. De la existencia del daño antijurídico

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone la presente demanda, se analizará la demostración del daño, toda vez que, se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses, se entrará a estudiar la imputación del mismo a la parte demandada.

Señor Juez, el daño, como el primer elemento de responsabilidad, en el caso que ahora se pone en consideración de esta jurisdicción, está constituido por el homicidio del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** quien en vida se identificaba con el NUIP 1.028.186.826, el cual, se perpetró el día once (11) agosto del año dos mil veinte (2020), lo cual, es demostrado a través del correspondiente Registro Civil de Defunción⁶¹

En línea con lo antes señalado, el acta de inspección a lugares **–FPJ-9⁶²** de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 12 de agosto de 2020; El acta de inspección técnica a cadáver **–FPJ-10⁶³** de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 11 de agosto de 2020; El informe de investigador de laboratorio **–FPJ-13⁶⁴** de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 27 de agosto de 2020; **El informe de perfilación criminal⁶⁵** de fecha 27 de agosto de 2020; El informe de investigador de campo **–FPJ - 11⁶⁶** de fecha 14 de agosto de 2020; El informe de investigador de campo **–FPJ-11⁶⁷** de fecha 12 de agosto de 2020; y La declaración jurada **–FPJ-15⁶⁸** de fecha 26 de agosto de 2020, mismos que obran como pruebas de la presente demanda, y demuestran fehacientemente, el resultado dañoso consistente en el homicidio del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** perpetrado el día once (11) agosto del año dos mil veinte (2020).

Así mismo, la Alerta Temprana, de Inminencia, N° 085-18, proferida por la Defensoría del Pueblo el trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) dirigido a la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para respuesta rápida a las alertas tempranas (CIPRAT) para los habitantes de las comunas 14, 15 y 21 del Distrito de Santiago de Cali, Departamento Valle del Cauca; con el fin de adoptar medidas urgentes destinadas a salvaguardar la vida e integridad personal de la población civil, en especial de los pobladores de los barrios: Potrero Grande, Valle Grande y Desepaz Invicali; al igual que Llano Verde, El Retiro y Los Comuneros; **el acta de reunión No. 4161.010.3.2. de cuatro (04) de agosto de dos mil veinte (2020) de la secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali / Valle del Cauca** cuyo objetivo era: *“Realizar Jornada de trabajo con la Mesa*

⁶¹ Ver prueba 2

⁶² Ver prueba 12

⁶³ Ibídem

⁶⁴ Ibídem

⁶⁵ Ibídem

⁶⁶ Ibídem

⁶⁷ Ibídem

⁶⁸ Ibídem



Distrital de Participación Efectiva de Víctimas” (Virtual); el oficio 210.10.1 rad. 20212100361341 proferido por la Personería de Santiago de Cali en cumplimiento Fallo de Tutela No. 2021-00231 del 12 de noviembre de 2021 proferido por el Juzgado 2º Administrativo de Pereira. Radicado: 20212450255222 de noviembre 17 de 2021; La publicación electrónica en la página institucional del Consejo Municipal de Santiago de Cali el día 7 de octubre de 2020 denominada: “Cali debe pasar de la excusa de falta de pie de fuerza a una política contundente contra las estructuras criminales”⁶⁹ dan cuenta, de que las entidades demandadas eran perfectamente conscientes de la cruenta situación de violencia y miedo con que vivían los habitantes del Barrio de Llano Verde para la época en que segaron la vida del hijo de la señora Johana Cárdenas Hurtado, del hermano de Víctor Alfonso, Darwin Camilo, Brayan, Marolyn Tatiana, y Yari Camila Cárdenas Hurtado, del sobrino de Yeison, Luis Eduardo y Francia Elena Cárdenas Hurtado, y así mismo, del nieto de la señora Martha Hurtado Cárdenas

Empero, las entidades hoy demandadas desoyeron también los hechos de notorio y público conocimiento mediante los cuales, multiplicidad de medios noticiosos y de información denunciaban la triste realidad para los pobladores de la comuna 15 (Barrio Verde), optando la administración de forma impávida por la omisión de protección de la fuerza pública, pues a manera de ejemplo, fue solo hasta tres días después de que asesinaran a la víctima principal en que el entonces Ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo anunció que las zonas aledañas del barrio Llano Verde de Cali, donde se registró una masacre de cinco jóvenes y la explosión de una granada, sería militarizada⁷⁰.

De conformidad con lo anterior, es claro que el daño alegado a través del presente medio de control tiene el carácter de antijurídico, toda vez que, recae sobre un interés tutelado por el derecho (El derecho a la vida), y no existe un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique o que legitime la lesión al mismo, ni siquiera el Código penal o de procedimiento penal colombiano tienen contemplada la pena de muerte para quienes se ha logrado derruir la presunción de inocencia en la instancia judicial penal y se hubiese fallado condenatoriamente en su contra⁷¹.

3.3.2. De la imputación del daño a las demandadas

En el caso concreto, si bien, la muerte prematura del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** fue causada por terceros, también lo es que jurisprudencialmente se ha reconocido que el Estado es objeto de “*imputación al tener una “posición de garante institucional”, del que derivan los deberes jurídicos de protección consistentes en la precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado*”⁷²

Previo a desarrollar puntualmente este sustancial acápite del libelo genitor frente a cada una de las entidades aquí demandadas, debe tenerse en especial consideración lo siguiente:

“(…) El Estado colombiano, como sujeto activo que participa a diario en las dinámicas y en relaciones ciudadanas, con sus acciones u omisiones, puede causar afectaciones a bienes jurídicos legalmente protegidos de las personas y puede verse obligado a reparar esos perjuicios.

⁶⁹ Consejo Municipal de Santiago de Cali. 07 de octubre 2020. Comunicaciones y Relaciones Corporativas. Comunicado Informativo: 21.2.3.680/2020. Publicación tomada el día 17 de febrero de 2022 de la página electrónica: http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/cali_debe_pasar_de_la_excusa_de_falta_de_pie_de_fuerza_a_una_politica_contundente_contra_las_estructuras_criminales

⁷⁰ 14 de agosto 2020, Zona donde ocurrió la masacre de cinco jóvenes en Cali será militarizada. Publicación tomada el día 17 de febrero de 2022 de la dirección electrónica: <https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/barrio-llano-verde-de-cali-sera-militarizado-KA13465258>

⁷¹ Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1º de octubre de 2018, exp. 46328.

⁷² CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C. Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015). Radicación número: 85001-23-33-000-2013-00035-01(51388). Actor: FANNY LOZANO MORENO Y OTROS Demandado: NACION - EJERCITO NACIONAL Y OTROS Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA (APELACION SENTENCIA)



A pesar de esto, la obligación de reparar o conjurar daños causados, históricamente, no siempre ha sido exigible. Solo a finales del siglo XVIII, los juristas vieron la necesidad de establecer algunos límites al ejercicio de la administración en cabeza del Estado, pues a medida que crecía y se fortalecían sus instituciones, comenzó a tener un rol cada vez más activo, determinante y protagónico en la sociedad. Por esta razón, poco a poco se fueron creando contrapesos y límites a este poder que se tornaba muy concentrado, y de ahí que se decidiera someterlo a un sistema de normas de derecho, con la finalidad de obligarlo a reparar los daños que causaba. (Buitrago Quintero, 2018, p.1)

(...)

Dicha introducción formal al ordenamiento jurídico de la Responsabilidad Estatal, se evidencia en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual establece lo siguiente:

ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

(...)

Si bien este artículo es la base de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, el Consejo de Estado, mediante sus sentencias, ha ampliado este concepto y ha detallado y explicado los elementos que la componen, los cuales son el daño antijurídico y su imputación a la administración.

Sobre este aspecto, es necesario hacer las siguientes aclaraciones: por regla general, se habla de responsabilidad patrimonial, dado que el artículo mencionado habla específicamente del deber del Estado de responder por los daños que cause y, en general, la indemnización por parte del Estado, en la mayoría de casos, se traduce en una reparación en valor monetario.

No obstante, en caso de declararse responsabilidad extracontractual del Estado por su acción u omisión, deberá éste garantizar una indemnización integral por los perjuicios causados; es decir, para resarcirlos, puede que no baste con una reparación económica, sino que esta puede ir más allá de lo patrimonial, dependiendo de lo solicitado por la parte lesionada, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, reiterada por las altas cortes en repetidas ocasiones.

(...)

De igual forma, hablamos de responsabilidad propiamente extracontractual, debido a que es aplicable solo en el caso de que entre la administración y la persona afectada no exista un vínculo contractual previo al hecho dañoso. Este régimen, no analiza las actuaciones provenientes de un contrato, ya sea los regidos por la Ley 80 o los que se denominan contratos especiales, sino que analiza los actos que no están previstos en un acuerdo; esto es, hechos, omisiones, operaciones administrativas o aquellos que no puedan ser encuadrados en estos grupos, pero que de igual manera generan daños.

Ahora bien, respecto de la aplicación del citado artículo 90, debe decirse que es aplicable a todas las autoridades públicas, pues todas ellas son potencialmente generadoras de daños, así como también puede predicarse la responsabilidad de todo particular en ejercicio de funciones públicas.

(...)

El daño al que se refiere el artículo 90 de la Constitución Política es un aspecto jurídico y objetivo, que se refiere a la producción de una lesión o de una vulneración



a un bien jurídicamente protegido o a un interés lícito, que para ser fundamento de responsabilidad estatal debe tener como característica la antijuridicidad, ya que el daño, por sí solo, no es suficiente para declararse la responsabilidad del Estado.

En cuanto a la antijuridicidad, puede decirse que ésta se refiere a que la persona que sufre el daño no esté en la obligación normativa o jurídica de soportarlo, cuando no es consentido.

Es decir, es antijurídico porque el Estado no está cumpliendo con el deber de proteger ese interés tutelado y legítimo del ciudadano. Para que el Estado tenga entonces el deber de responder por un daño, este último debe cumplir con las siguientes características:

- Que sea cierto o real, es decir, que efectivamente haya lesionado un derecho del perjudicado, como son los daños presentes y los futuros reales.*
- Que sea especial, es decir, que sea particular a la persona o personas que solicitan la reparación y no a la generalidad de los miembros de una colectividad.*
- Que sea normal, esto es, que debe exceder los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio.*
- Que se refiera a una situación jurídicamente protegida, pues es lógico que quien se encuentra en una situación ilegal debe correr los riesgos que ella produce. (Aponte Rincón & Ardila Galindo, 2015 p. 27)*

Otro de los requisitos para poder atribuir responsabilidad al Estado y obtener una indemnización por parte suya es la imputación, la cual, se puede describir como la atribución jurídica del daño al Estado, atribución considerada como el nexo entre el daño y el servicio público. Esta imputación no es necesariamente material, pues también puede haber atribución del daño por conceptos normativos y jurídicos. Así pues, en caso de imputar un daño al Estado, éste tendrá la obligación de indemnizar integralmente al afectado y asumir la responsabilidad del daño producido.

De acuerdo con los autores Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, en su libro Curso de Derecho Administrativo II, explican el concepto de imputación en los siguientes términos:

Al precisar el concepto de lesión decíamos que para que surja la responsabilidad es preciso que esa lesión pueda ser imputada, esto es, jurídicamente atribuida, a un sujeto distinto de la propia víctima. La imputación es así un fenómeno jurídico consistente en la atribución a un sujeto determinado del deber de reparar un daño, en base a la relación existente entre aquel y éste... (2000)

De igual manera, en la sentencia del Consejo de Estado, con número de radicado 50001-23-31-000-1999-01215-01(22269) expone la imputabilidad de la siguiente forma:

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica.

Con base en lo anterior, es necesario entonces referirse a la forma en la que puede atribuirse o imputarse la responsabilidad al Estado; es aquí donde aparecen los títulos en virtud de los cuales se puede atribuir al Estado el deber de reparar.



(...)

De igual forma, la responsabilidad por falla del servicio es definida por Bustamante Ledesma (1998) como:

La responsabilidad administrativa por falta o falla del servicio es la consecuencia directa del deber que tiene el Estado de servir a la comunidad de forma eficiente y oportuna, de promover su prosperidad y garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución y si en las actividades desarrolladas para esos fines comete irregularidades o incurre en deficiencias u omisiones que lesionan a sus miembros, tiene que reparar el daño...

Este autor, además, en su texto La responsabilidad extracontractual del Estado refiere los requisitos para que pueda imputarse responsabilidad al Estado y basándose en el título de imputación de falta o falla en el servicio, esto es:

- a) Una falta o falla del servicio o de la Administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónimo de la Administración.*
- b) Lo anterior implica que la Administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano.*
- c) Un daño, que implica lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con todas las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como que sea cierto, determinado o determinable, etc.*
- d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la Administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización. (1998)*

Por su parte, el Consejo de Estado, adentrándose un poco más en la materia, explica a qué hace referencia la falla del servicio o la falta en su prestación por retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o por ausencia del servicio. Explica entonces que:

...el retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía. (C.P. Fajardo Gómez, 2011)

Es muy importante tener presente que, en este título de imputación se debe acreditar (por parte del demandante) la ocurrencia del daño antijurídico alegado; de igual manera, se debe probar la falla del servicio como tal, es decir, que el servicio estatal no funcionó, funcionó de forma errónea o tardía; además, el nexo causal entre el daño antijurídico y la falla en el servicio.



(...)

Tal como lo refiere Bustamante Ledesma (1998), la falla del servicio presunta consiste en lo siguiente:

Se fundamentó este régimen en la consideración de que el Estado para el cumplimiento de sus fines y a través de sus agentes realiza actividades peligrosas que implican riesgos a los administrados y que por ello mismo son más susceptibles de causarles daño.

...Se sostuvo, entonces, que cuando se trata de daños ocasionados por cosas utilizadas en el ejercicio de actividades peligrosas, como armas de dotación oficial, por vehículos automotores de la administración pública o por redes de conducción de energía, por ejemplo, la falla del servicio se presumía en contra de la Administración. Con esta presunción se le quitó al supuesto ofendido por un hecho dañoso de la Administración la obligación de probar la falla del servicio restándole solo demostrar que había recibido un daño indemnizable y que entre ese perjuicio y el hecho de la Administración hubo un vehículo de causalidad. (p. 61)

Para exonerarse de tal responsabilidad, la entidad tiene la posibilidad de acreditar que el hecho no se configuró como tardío o irregular ni tampoco por una omisión suya, es decir, que la falla del servicio no se configuró en tanto actuó de manera diligente y prudente.

Además, puede demostrar que se configuró alguno de los elementos que exoneran de la responsabilidad al romperse el nexo causal entre el daño y la falla, como en los casos de fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero. (Bustamante Ledesma, 1998) (...)”⁷³.

En igual sentido, debe recordarse que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar en el marco de la responsabilidad del Estado, al respecto esta Corporación ha indicado que la escogencia de régimen de responsabilidad aplicable dependerá de aquellos eventos que guarden ciertas aproximaciones fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso⁷⁴.

Lo antes referido, obedece a la aplicación del principio “*iura novit curia*”, con base en el cual, según el Alto Tribunal, el Juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede analizar el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado que corresponda a los hechos probados en el proceso, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa “*petendi*” suplicada por el demandante, ni que responda a la formulación de una hipótesis que

⁷³ Tomado de: Responsabilidad patrimonial y extracontractual del estado por delitos cometidos por personas privadas de la libertad que se encuentran en instituciones penitenciarias, carcelarias o en prisión domiciliaria y reclusos que tienen permisos de salida vigilada y controlada. Monografía para optar al título de Magíster en Derecho. Por: María Camila Muñoz Marín. Asesor de Monografía: Gonzalo Andrés Pérez M. UNIVERSIDAD EAFIT. 2021

⁷⁴ La Sección Tercera destacó que en vista de que la Constitución Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual, “sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar”, la jurisprudencia no podía establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que fácticamente semejantes. En todo caso, tales consideraciones no implican el desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad, reflejado en la construcción jurisprudencial de una argumentación específica constitutiva de un precedente por parte de esta Corporación en eventos de daños antijurídicos similares al ocasionado en este asunto. Al respecto: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera –en pleno–, sentencia del 19 de abril de 2012, rad. 21515.



se aleje de la realidad material del caso, o que se establezca un curso causal hipotético de manera arbitraria⁷⁵.

Cabe precisar que en el caso en concreto bajo análisis concurren (02) dos regímenes de responsabilidad o criterios de imputación, de un lado LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA (**Falla en la prestación**) e igualmente, opera LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA.

De conformidad con lo anterior, este apoderado judicial señalará las razones por las cuales están demostrados los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** tanto por un régimen como por el otro, así:

3.3.2.1. De la imputación de responsabilidad SUBJETIVA del Estado por falla en el servicio

La falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continúa siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado cuando esta tiene como objetivo final demostrar el incumplimiento de una obligación a cargo de la administración y así lo ha reseñado el Consejo de Estado - Sección Tercera -Subsección A, en la sentencia proferida el veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019):

“[...] La Constitución Política, en su artículo 2º, señala que las autoridades de la República **“están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades ...”**, mandato que debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención, de acuerdo con las circunstancias, tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra, entre otros, para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera.

En ese orden de ideas, **al Estado le resulta exigible la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, a pesar de su diligencia, en principio, no podrá quedar comprometida su responsabilidad**⁷⁶.

Así pues, **las obligaciones que están a cargo del Estado -y por tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, deben analizarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo [...]**⁷⁷. (Se destaca)

⁷⁵ Ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2015, expediente 17.037.

⁷⁶ Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 8 de abril de 1998, exp. 11837 y del 18 de octubre del 2007, exp. 15.828.

⁷⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección A. Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019). Radicación: 05001-23-31-000-2010-02149-01 (50.315)



Es importante entonces hacer hincapié en que la falla del servicio como título de imputación se presenta por la omisión del Estado precisamente cuando se evidencia la intervención de un tercero para la concreción del daño, así lo ha dilucidado el Consejo de Estado, a saber:

“(…) Así como por la reiterada posición de esta Sección, según la cual en tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, los mismos son imputables al Estado **cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una (...) omisión constitutivas de falla del servicio (...) cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección**⁷⁸ (…).”
(subrayado fuera de texto)

3.3.2.1.1. Circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama

Para el día once (11) de agosto del año dos mil veinte (2020) estaba rigiendo al menos jurídicamente la Ley 1098 de 2006⁷⁹, por la cual se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia con rango de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se estipuló que aplicaran de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes, de obligatorio cumplimiento en todo el país, sin que el Distrito de Santiago de Cali se pudiese sustraer, así como tampoco se pudiesen sustraer de las obligaciones allí contenidas ninguna de las otras entidades vinculadas a este proceso judicial.

De modo que todas las entidades demandadas debían ceñirse a lo consagrado en la norma en cita, tal como lo refería el artículo 11 relativo a la exigibilidad de los derechos de los adolescentes, y el artículo 1° atinente a su finalidad, donde hablaba que las disposiciones allí contenidas, así como las supraconstitucionales concernientes a la infancia y adolescencia eran de obligatorio cumplimiento para todas las entidades aquí vinculadas, a saber:

Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

⁷⁸ Consejo de Estado. Sección Tercera. 7 de abril 2011. Radicado: 20.750

⁷⁹ Dicha Ley consagraba en el artículo 1 que las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, hacían parte de dicho Código, y servían de guía para su interpretación y aplicación, y que su finalidad era garantizar a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crecieran en el seno de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalenciando el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna

⁸⁰ La Ley 1098 de 2006 se encuentra vigente incluso al momento de interponer la presente demanda.



3.3.2.1.1.1. Imputación de responsabilidad al Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional – PONAL, y en la Defensoría del Pueblo

Los artículos 17, 30 y 41 de la norma transcrita (Ley 1098 de 2006) hablaba de que los menores tenían derecho a la recreación, así:

Artículo 17. **Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano.** Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, **a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad** y goce de todos sus derechos en forma prevalente.

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. **Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección,** alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, **recreación** y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. (...).

Artículo 30. *Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes.* Los niños, las niñas y **los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes.** (...)

Artículo 41. Obligaciones del Estado. **El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los adolescentes.** En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, **distrital** y municipal deberá: (...)

24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y facilitar los materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada.

25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y producción artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y consagrar recursos especiales para esto. (...)

El contenido de dicha norma recae en el caso concreto en el **Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, en la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional –PONAL, y en la Defensoría del Pueblo**, por cuanto dicho ente territorial en coordinación **con la Policía Nacional –PONAL** debieron a la luz de la Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, y concretamente el **Artículo 3°**. Sobre las funciones de los municipios efectuar lo que se relaciona a continuación, así como también, su efectivo cumplimiento debió ser verificado por parte de la Defensoría del Pueblo:

Artículo 3°. Sobre las funciones de los municipios: Corresponde al municipio: (...) 2. ***Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio (...)***



Recordemos que, según el informe de perfilación criminal de 27 de agosto de 2020, el adolescente **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** era de raza afrodescendiente. (Ver hecho 2.2.11 de la presente demanda)

Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal.

*4. **Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes.***

5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. (...)."

Así mismo, tenemos que, en la NOTA DE SEGUIMIENTO N° 027-15⁸¹ Primera al Informe de Riesgo N° 002-14 Emitido el 4 de febrero de 2014 **Fecha: 3 de diciembre de 2015** LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO emitida por la Defensoría del Pueblo, dicha entidad como mínimo desde el año 2015 instó al **Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca a realizar diversas gestiones dirigidas a la población vulnerable por la violencia del barrio Llano Verde** (Entre otros barrios y Comunas de Cali), veamos:

“(...) A la Alcaldía de Santiago de Cali y de forma complementaria y subsidiaria a la Gobernación del Valle del Cauca, profundizar la inversión social en materia de educación, salud, empleo, cultura y recreación, de manera especial, impulsar proyectos productivos para los jóvenes en condición de riesgo y promoverles oportunidades de empleo. Se recomienda la destinación de recursos extraordinarios para estas inversiones en los siguientes barrios y comunas: (...) y Llano Verde (...).

En la entrevista realizada por el periodista Andrés Sanín del programa televisivo y periodístico colombiano de análisis y opinión del canal caracol denominado: Los Informantes⁸², a la señora Rubí Cortés, madre de otro de los 5 menores de edad, contó lo siguiente respecto al cañaduzal y la violación de las entidades aquí demandadas frente a la norma precitada:

⁸¹ FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos De Violaciones de Derechos Humanos y DIH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS – SAT. Tomada la información el día 17 de febrero de 2020 de la dirección electrónica: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/NS-N%C2%B0-027-15-a-IR-N%C2%B0-002-14-Cali-VAL.pdf>

⁸² Ver <https://www.caracoltv.com/los-informantes/el-clamor-de-justicia-por-el-asesinato-de-cinco-jovenes-en-un-canaduzal-de-llano-verde>

⁸³ Ver <https://www.youtube.com/watch?v=SBCvTBGrZng>

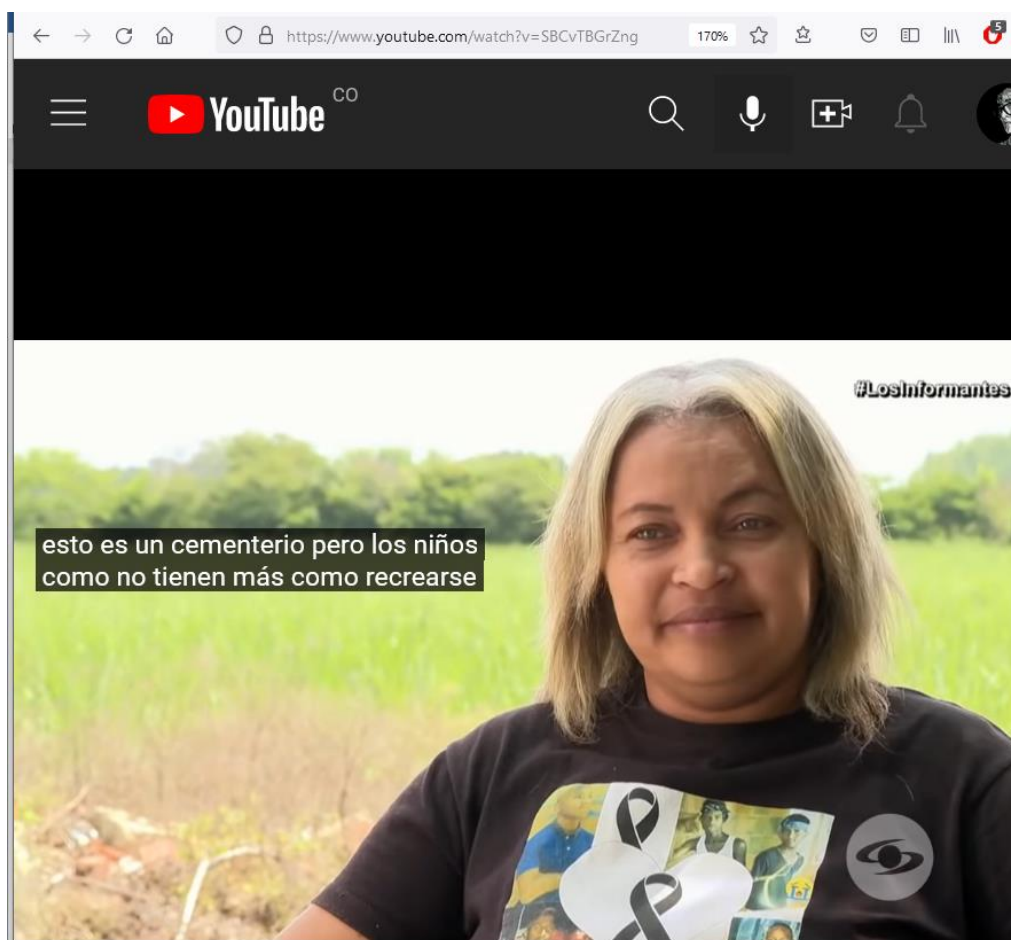


Por: Caracol Televisión | 21 de Febrero, 2021



Con un doloroso testimonio que estremece a quien la escucha, Rubí Cortés, madre de Jair Andrés, uno de los jóvenes torturados y asesinados en un cañaduzal en Llano Verde, cuenta los momentos de horror que vivió cuando en agosto de 2020, encontró los cuerpos de Luis Fernando Montaña, Álvaro Caicedo, Jean Paul Cruz, Leider Cárdenas y su hijo, unos menores con edades entre los 14 y 16 años que solo querían darse un chapuzón y comer caña.

Los familiares de los jóvenes asesinados en en Llano Verde, siguen alzando su voz para que este crimen no quede en el olvido y haya justicia. Junto a grandes artistas del Pacífico plasmaron en la canción '¿Quién los mató?', la indignación y dolor por el asesinato de los adolescentes. **Una tragedia que le rompió el corazón a todo el país y otra masacre que no puede quedar impune.**



En Colombia, el derecho a la recreación es reconocido como un derecho fundamental para los adolescentes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Nacional, veamos:

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación (...). Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. (...)

La categoría de derecho fundamental endilgada a la recreación de los adolescentes está dada por la importancia que reviste para su desarrollo físico y psicológico, además, porque a través de los espacios lúdicos se les pueden proteger los demás derechos con mayor asertividad.

Igualmente, el derecho a la recreación está consagrada en el Artículo 52 de la Constitución Nacional, en los siguientes términos:

Artículo 52 El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.



El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

Por tanto, dicho derecho para el día que ocurrieron los hechos que motivaron la interposición de la presente demanda, debió ser verificado en su implementación concretamente por el Distrito de Santiago de Cali, a través de sus dependencias específicas secretaría de cultura, recreación y/o deporte, de la cual debió ser beneficiario el menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, y los demás menores que con él fueron vilmente asesinados.

Ahora bien, no puede perderse de vista que, el DECRETO 25 DE 2014 por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, establece;

Artículo 1°. Naturaleza jurídica. La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y **le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos.**

La Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y presupuestal.

Artículo 2°. Objeto. **La Defensoría del Pueblo es la institución responsable de impulsar la efectividad de los Derechos Humanos** mediante las siguientes **acciones integradas: promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos y prevenir sus violaciones;** fomentar la observancia del Derecho Internacional Humanitario; atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior; y, proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la ley.

Artículo 5°. Despacho Defensor del Pueblo. Además de las señaladas en el artículo 282 de la Constitución Política, son funciones del Defensor del Pueblo, las siguientes:

2. Diseñar, dirigir y adoptar, con el Procurador General de la Nación, las políticas de promoción y divulgación de los Derechos Humanos en el país, en orden a tutelarlos y defenderlos.

3. Hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los Derechos Humanos **y velar por su promoción y ejercicio.** El Defensor podrá hacer públicas tales recomendaciones e informar al Congreso sobre la respuesta recibida

En igual sentido, el Artículo 277 de Nuestra Constitución Nacional también consagra:

Artículo 277: El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: (...)

2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. (...)



En este punto es preciso aclarar que si bien, la Defensoría del Pueblo emitió la NOTA DE SEGUIMIENTO N° 027-15⁸⁴ Primera al Informe de Riesgo N° 002-14 Emitido el 4 de febrero de 2014 Fecha: 3 de diciembre de 2015 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO instando al **Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca a realizar diversas gestiones dirigidas a la población vulnerable por la violencia del barrio Llano Verde** (Entre otros barrios y Comunas de Cali), así como también la **Alerta Temprana, de Inminencia, N° 085-18, para los habitantes de las comunas 14, 15 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali, departamento Valle del Cauca; para que se adopten las medidas urgentes destinadas a salvaguardar la vida e integridad personal de la población civil, en especial de los pobladores de los barrios: Potrero Grande, Valle Grande y Desepaz Invicali; al igual que Llano Verde, El Retiro y Los Comuneros. NO VELÓ POR LA PROMOCIÓN Y EJERCICIO DEL DERECHO A LA RECREACIÓN DE LOS POBLADORES DE LLANO VERDE** como era su obligación, lo cual conllevó a resultado dañoso aquí descrito.

3.3.2.1.1.2. Imputación de responsabilidad al Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional –PONAL

Por otra parte, la Ley 1098 de 2006 en su articulado disponía:

Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. (...) El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Artículo 3º. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.

Artículo 7º. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

Artículo 8º. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.

Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.

⁸⁴ FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos De Violaciones de Derechos Humanos y DIH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS – SAT. Tomada la información el día 17 de febrero de 2020 de la dirección electrónica: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/NS-N%C2%B0-027-15-a-IR-N%C2%B0-002-14-Cali-VAL.pdf>



La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. **Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren** desde la concepción **cuidado, protección**, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y **vivienda segura** dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. (...)

Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y **los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.** En especial, **tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de** sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado **y de los miembros de su grupo** familiar, escolar y **comunitario.**

Para los efectos de este Código, **se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico,** descuido, omisión o trato negligente, **malos tratos** o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación **y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de** sus padres, representantes legales o **cualquier otra persona.**

Artículo 20. *Derechos de protección.* Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra:

1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo (...) **de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.** (...)
5. El secuestro (...)
6. Las guerras y los conflictos armados internos. (...)
8. **La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria.** (...)
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos.

Artículo 41. Obligaciones del Estado. **El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los adolescentes.** En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, **distrital** y municipal deberá:

1. **Garantizar el ejercicio de todos los derechos** de los niños, las niñas y los adolescentes
2. **Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación** a través del diseño y la ejecución de **políticas públicas sobre infancia y adolescencia.**
3. **Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles** nacional, departamental, **distrital** y municipal **para asegurar la prevalencia de sus derechos.**



4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados.

5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social. (...)

7. **Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de sus derechos.**

8. Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la integridad física, psíquica e intelectual y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la forma de hacerlos efectivos. (...)

16. **Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de violencia y todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes. (...)**

27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia. (...)

Parágrafo. Esta enumeración no es taxativa y en todo caso el Estado deberá garantizar de manera prevalente, el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes consagrados en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos y en este código.

A su vez, La Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios en su **Artículo 3°**. Sobre las funciones de los municipios establecía:

(...) 2. ***Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio (...)***

Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;

3. *Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal.*

4. ***Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes.***

5. *Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. (...)*”



El Artículo 315 de la Constitución Política señalaba que era atribución del alcalde:

*“(...) 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. **El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio.** La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.*

La Ley 4 de 1991 por la cual se dictan normas sobre orden público interno, policía cívica local y se dictan otras disposiciones, estipula:

“ARTICULO 1o Informes Generales de Orden Público. Los alcaldes deberán enviar informes sobre la situación general del orden público al correspondiente Gobernador, Intendente o Comisario, relacionados con la seguridad, tranquilidad y salubridad. La periodicidad de los informes será fijada por los Gobernadores, Intendentes y Comisarios. Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y el Alcalde Mayor de Bogotá, deberán enviar al Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Gobierno, informes similares sobre la situación del orden público en su correspondiente jurisdicción.

Dichos informes versarán sobre las situaciones gestadoras o fomentadoras de perturbaciones del orden público con precisión de las medidas que se han tomado y de las que deban tomarse, para conjurar la situación, así como la solicitud precisa de la ayuda o colaboración que sea necesaria. (...)

ARTICULO 8o Normas y órdenes de Orden Público en lo Departamental, Distrital, Intendencial, Comisarial y Municipal. Para efectos de la conservación del orden público en los departamentos, intendencias y comisarías, las órdenes y decretos del gobierno departamental, intendencial o comisarial, **en materia de policía**, expedidas de conformidad con los principios consagrados en la Ley, **serán de aplicación preferente e inmediata frente a cualquier disposición u orden expedida por las autoridades municipales**

ARTICULO 9o Normas de Orden Público en lo Municipal. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores y para efectos de la conservación del orden público, las órdenes y decretos del Alcalde en materia de policía, serán de aplicación preferente a las disposiciones y medidas que adopten los inspectores y demás autoridades de policía de su jurisdicción.

ARTICULO 10. El Alcalde como Jefe de Policía. El Alcalde es el Jefe de Policía en el Municipio y el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en el mismo, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Alcalde deberá dictar las medidas de orden público que sean requeridas por el Presidente de la República, por el Gobernador, Intendente o Comisario, y las que considere indispensables cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.

ARTICULO 11. Ordenes a la Policía. La Policía Nacional, en el Municipio, estará operativamente a disposición del Alcalde, quien dará sus órdenes por intermedio del respectivo Comandante de Policía, o de quien haga sus veces. Dichas órdenes son de carácter obligatorio. (...)

ARTICULO 16. Incorporación de Policía Nacional para servicio exclusivo en los municipios. Cuando a juicio del alcalde sea necesario incrementar la prestación del servicio de policía en el territorio de su jurisdicción u obtener servicios especializados en la misma, los municipios podrán contratar con la Policía Nacional la incorporación del personal respectivo, el cual será asignado de manera exclusiva a atender las necesidades municipales requeridas por el alcalde”.



También es importante reiterar que, en la NOTA DE SEGUIMIENTO N° 027-15 Primera al Informe de Riesgo N° 002-14 Emitido el 4 de febrero de 2014 Fecha: 3 de diciembre de 2015 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO emitida por la Defensoría del Pueblo, dicha entidad como mínimo desde el año 2015 instó al **Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca a realizar diversas gestiones dirigidas a la población vulnerable por la violencia del barrio Llano Verde** (Entre otros barrios y Comunas de Cali), veamos:

“(…) A la Alcaldía de Santiago de Cali y de forma complementaria y subsidiaria a la Gobernación del Valle del Cauca, profundizar la inversión social en materia de educación, salud, empleo, cultura y recreación, de manera especial, impulsar proyectos productivos para los jóvenes en condición de riesgo y promoverles oportunidades de empleo. Se recomienda la destinación de recursos extraordinarios para estas inversiones en los siguientes barrios y comunas: (...) y Llano Verde (...).

A la Alcaldía de Santiago de Cali, establecer estrategias para, de forma concertada con las comunidades, identificar las particularidades de los problemas de seguridad y convivencia, a fin de establecer líneas de intervención para mejorar las condiciones de barrios y comunas. Se recomienda prestar especial atención a la conformación de barrios de beneficiarios de proyectos de vivienda para reasentamiento o reubicación, quienes traen conflictos por diversos aspectos sociales (víctimas/victimarios, pandillas/fronteras invisibles, enfrentamientos de grupos armados) y deben ser catalizados antes de su llegada a los nuevos lugares de hábitat. La evidencia argumentada por ciudadanos, comunidades y organizaciones que trabajan con personas vulnerables y víctimas de la violencia como la Vicaría para la Reconciliación de la Arquidiócesis de Cali, ha manifestado la continuidad e incluso **agravamiento en las condiciones de seguridad en los nuevos espacios territoriales que fueron asignados a familias reasentadas o reubicadas, producto de las disputas entre pandillas y bandas que provenían de sus lugares de origen. Esta situación que puede ser evitada** con intervenciones adecuadamente planeadas en nuevos barrios que se creen, así como en los que ya afrontan estos problemas como Potrero Grande y Llano Verde (...).

El contenido de dichas normas recae en el caso concreto en el Distrito de Santiago de Cali, por cuanto dicho ente territorial debió actuar oportunamente para garantizar la protección integral de los derechos fundamentales del adolescente **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, así como también debió haber tomado las medidas necesarias para procurar prevaleciera su Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano, más al obviar sus obligaciones legales y constitucionales de protección se ocasionó el hecho dañoso que enlutó a los hoy demandantes.

Lo anterior se encuentra debidamente acreditado en el acápite número 2 del presente escrito denominado: “Fundamentación Fáctica y Jurídica que sustenta la demanda”, y especialmente se acredita con los hechos **2.2.6, 2.2.7, 2.2.17, 2.2.24, 2.2.26, 2.2.27, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.30, y 2.2.38** allí relacionados.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, debió acatar lo dispuesto en el Decreto 25 de 2014 por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, así:



Artículo 1°. *La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y **le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos.** (...) La Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y presupuestal.*

Artículo 2°. *del Decreto en cita dispone respecto de su objeto que: **La Defensoría del Pueblo es la institución responsable de impulsar la efectividad de los Derechos Humanos** mediante las siguientes acciones integradas: promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos **y prevenir sus violaciones**; fomentar la observancia del Derecho Internacional Humanitario; atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior; y, proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la ley.*

Máxime, cuando al tenor de lo consignado en la NOTA DE SEGUIMIENTO N° 027-15⁸⁵ Primera al Informe de Riesgo N° 002-14 Emitido el 4 de febrero de 2014 Fecha: 3 de diciembre de 2015 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO emitida por la Defensoría del Pueblo, dicha entidad como mínimo desde el año 2014 tenía conocimiento de que:

*“(...) Los líderes comunitarios del barrio Llano Verde han manifestado la existencia de los mismos problemas sociales y de vulnerabilidad que se presentaron durante la conformación del barrio Potrero Grande, donde **se entregaron viviendas a los habitantes de distintos asentamientos subnormales sin evaluar previamente los conflictos subyacentes y la existencia de pandillas en los mismos sectores, calles y pasadizos, lo que produce permanentes situaciones de tensión que sirven a los intereses de los grupos armados ilegales que se constituyen en fuente de exacerbación de la violencia al implantar actividades ilegales como el tráfico de armas, la distribución de estupefacientes, el homicidio en la modalidad de sicariato, la extorsión, entre otros (actividades que en algunos casos es una fuente de ingresos para las familias que habitan esos barrios).** (...) Resaltado propio.*

Al cruzar las conductas de mayor impacto en la ciudad de Cali (homicidios, desapariciones, extorsiones, amenazas, etc.) y la influencia de los grupos armados ilegales, las comunas y barrios más afectados por hechos de violencia en 2014 y 2015, son:

COMUNA	BARRIO
(...)	
15	El Vallado, Mojica, Llano Verde, Brisas de Comuneros, Invasión Valladito, Laureano Gómez, El Retiro, Comuneros I

(...)

La Personería de Cali, con corte al mes de julio de 2015 recibió 46 declaraciones (por hechos victimizantes ocurridos en 2015) presuntamente por acción de Los Rastrojos, Los Urabeños, “Los Buenaventureños”, “Águilas Negras”, entre otros. Afectando habitantes de los barrios Potrero Grande, Puertas del Sol, Simón Bolívar,

⁸⁵ FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos De Violaciones de Derechos Humanos y DIH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS – SAT. Tomada la información el día 17 de febrero de 2020 de la dirección electrónica: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/NS-N%C2%B0-027-15-a-IR-N%C2%B0-002-14-Cali-VAL.pdf>



*Villa San Marcos, Barrio Taller, La Estrella (Siloé), Tomás Uribe Uribe, Altos de Santa Elena, Puerto Nuevo, Tercer Milenio, Terrón Colorado, Montebello, **Llano Verde**, Floralia, Ciudad del Campo, Alto Jardín, La Casona, El Retiro, La Paz, Pueblo Joven, Alirio Mora Beltrán, Comuneros, Guayaquil, Mojica, Villanueva y Píizamos I.*

Empero, la Defensoría del Pueblo no veló por la promoción, y el ejercicio de los Derechos Humanos del adolescente **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, ni de los otros 4 menores que fueron vilmente asesinados con este, el día 11 de agosto de 2020, ya que, no protegió ni defendió los Derechos Humanos de dichos adolescentes, ni previno su violación, puesto que como lo evidencian los hechos 2.2.6, 2.2.7, 2.2.17, y 2.2.26 del presente escrito, dicho ente de control era conocedor de la cruenta realidad que padecían los pobladores de Llano Verde desde el año 2015, como quedó consignado en la NOTA DE SEGUIMIENTO N° 027-15⁸⁶ Primera al Informe de Riesgo N° 002-14 Emitido el 4 de febrero de 2014 Fecha: 3 de diciembre de 2015 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO emitida por la Defensoría del Pueblo, instando al **Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca a realizar diversas gestiones dirigidas a la población vulnerable por la violencia del barrio Llano Verde** (Entre otros barrios y Comunas de Cali).

O bien, en el escrito dirigido a la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para respuesta rápida a las alertas tempranas (CIPRAT) del trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) la Defensoría del Pueblo en la que se consignó:

“(…) Referencia: Alerta Temprana, de Inminencia, N° 085-18, para los habitantes de las comunas 14, 15 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali, departamento Valle del Cauca; para que se adopten las medidas urgentes destinadas a salvaguardar la vida e integridad personal de la población civil, en especial de los pobladores de los barrios: Potrero Grande, Valle Grande y Desepaz Invicali; al igual que Llano Verde, El Retiro y Los Comuneros (…)

11. A las autoridades civiles y a la Fuerza Pública, informar de manera periódica a la Dirección del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las actuaciones y medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones formuladas en la presente advertencia conforme a lo previsto en la Corte Constitucional y la Ley 24 de 1992. Dicha información deberá ser allegada según lo estipulado en el artículo 15 y subsiguientes de la Ley 24 del 15 de diciembre de 1992, en concordancia con el Decreto 2124 (…). Subrayado y negrilla propio.

Prueba de la omisión de las funciones y obligaciones legales y constitucionales antes referidas, es el acta de reunión No. 4161.010.3.2. de cuatro (04) de agosto de dos mil veinte (2020) (ANTES DE PERPETRARSE LA MASACRE DE LLANO VERDE) de la secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali / Valle del Cauca cuyo objetivo era: “Realizar Jornada de trabajo con la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas” (Virtual), en la que se determinó lo siguiente: “(…) En referencia con las alertas tempranas revisadas de la Defensoría se encuentran las comunas 14 y 15 pero no se ha visto una revisión de esas alertas desde el 2018, la última revisión de la administración distrital fue en el año 2018. En este aspecto se solicita por parte de la administración se realice una revisión y unos avances en referencia a estas alertas tempranas para evitar tantas muertes de niñas, niños y jóvenes en estas comunas (Subrayado y resaltado propio.)

⁸⁶ FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos De Violaciones de Derechos Humanos y DIH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS – SAT. Tomada la información el día 17 de febrero de 2020 de la dirección electrónica: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/NS-N%C2%B0-027-15-a-IR-N%C2%B0-002-14-Cali-VAL.pdf>



Recordemos que el 31 de agosto de 2020 la DEFENSORIA DEL PUEBLO mediante respuesta a derecho de petición incoado por el suscrito apoderado judicial, radicado: 20200060342255681 manifestó:

*Con relación al numeral “2.2. De igual manera se solicita que informe a este apoderado qué actuaciones, trámites o procedimientos ha adelantado con respecto a la situación que actualmente se presenta en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali, si ha se puesto en conocimiento de otras autoridades, locales departamentales o nacionales. **No solo en lo que respecta a las denuncias por posibles reclutamientos ilegales, sino también lo corresponde a cualquier tipo manifestación violenta o de flagelos que atenten contra los derechos humanos de las personas que residen en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali.** De igual modo se solicita que especifique **desde qué fecha viene adelantando las respectivas actuaciones**”.*

*Con relación al punto dos, suscrito en la petición, **en el documento de advertencia que se hizo para las comunas 14, 15 y 21 (AT 085-18)** se hicieron las respectivas recomendaciones referente a la seguridad, reclutamiento de menores y demás inversiones que se requieren para la ejecución de las políticas públicas en ese setor de la capital del Valle”.*

Posteriormente, la Personería de Santiago de Cali mediante oficio 210.10.1 rad. 20212100361341 en cumplimiento Fallo de Tutela No. 2021-00231 del 12 de noviembre de 2021 proferido por el Juzgado 2º Administrativo de Pereira. Radicado: 20212450255222 de noviembre 17 de 2021, manifestó: “(...) **3.6 “Dirá si la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas, desde el año 2.018 y en lo que va del año 2.020, relacionada con el orden público del barrio llano verde del municipio de Cali y los llamados de la comunidad solicitando protección; en caso afirmativo, indicara que recomendaciones ha realizado la Defensoría del Pueblo para fortalecer la seguridad de la zona y que acciones concretas ha tomado la fiscalía general de la Nación para acatarlas”.**

(...) La Defensoría del Pueblo, conforme a su función emitió la alerta temprana 085 de 2015 para las comunas 13, 14 y 15 del Distrito de Santiago de Cali. En cumplimiento al deber funcional, la personería de Santiago de Cali le ha realizado el respectivo seguimiento a esta alerta temprana, **como se puede evidenciar en el acta de reunión de agosto 4 de 2020 denominada “acta de jornada de trabajo con la Mesa de Víctimas y el Dr. Carlos Alberto Rojas Secretario de Seguridad y Justicia, donde la Personería Distrital de Santiago de Cali le hizo un llamado a la Alcaldía de Santiago de Cali sobre el tema de inseguridad que se estaba presentando en el barrio llano verde ubicado en la comuna 15 de esta ciudad.** De igual manera se anexa acta de reunión consejo de seguridad con la Alcaldía de Cali del 29 de octubre de 2020, donde también intervino la Personería de Cali alertando sobre la situación de inseguridad de familiares de los líderes de la mesa en el del barrio llano verde. Se anexan las referidas actas (...).”

Además, frente a la temática en comentario, tenemos que el diario electrónico denominado: “noticiasrcn.com” publicó el día 1º de septiembre de 2020 lo siguiente:

“La Defensoría del Pueblo alzaré su voz, no nos callaremos. Van a tener que oírnos⁸⁷”: Carlos Camargo. El nuevo defensor

⁸⁷ Tomado de la página <https://www.noticiasrcn.com/nacional/en-vivo-carlos-ernesto-camargo-se-posesiona-como-nuevo-defensor-del-pueblo-362202>



*del Pueblo manifestó su compromiso con la mejora del Sistema de Alertas tempranas, y **señaló la importancia de desarrollar su gestión desde los territorios para acompañar a las comunidades que lo necesitan**. (...) En su intervención, el nuevo defensor del Pueblo **pidió un minuto de silencio por las víctimas de las recientes masacres que han azotado al país, y llamó a las demás autoridades a “no permitir que se ensañen contra nuestros jóvenes”**. Se refirió a las capturas de los culpables de la masacre de Llano Verde, y pidió la misma contundencia en todos los hechos violentos (...). (Resaltado propio). (...), lo cual constituye un hecho de notorio y público conocimiento.*

Es ostensible entonces que en dicha nota de prensa el propio Defensor del Pueblo **reconoció las falencias presentadas con las alertas tempranas que emite esta entidad pública**, garante de los derechos humanos, pues es ostensible también que la Defensoría del Pueblo no acompañó a la comunidad de Llano Verde que tanto la necesitaba para la época de los hechos en comento, al punto de acontecer el asesinato bajo la modalidad de tortura del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, quien requería de parte de la Defensoría del Pueblo que hubiese adelantado acciones contundentes para prevenirlo y evitarlo, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 2°. del Decreto 25 de 2014 por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

Por lo expuesto, se concluye palmariamente, que la Defensoría del Pueblo tenía la posición de garante con deber jurídico de evitar el resultado dañoso del fallecimiento de la víctima principal en mención, más su omisión de proteger y defender los Derechos del adolescente **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, y de no prevenir su violación, aunque legal y constitucionalmente estaba obligada a ello fue de la entidad suficiente para que el mismo acaeciera.

De igual forma, el contenido de la Ley 1098 de 2006 recae en el caso concreto en **La Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional**, por cuanto dicho ente territorial debió haber *mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas* del adolescente **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, *asegurándole convivir en paz* como solo ordena el Artículo 218 de la Constitución Política, a saber:

“La ley organizará el cuerpo de Policía.

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Así como tampoco cumplió lo que le ordenaba la LEY 1801 DE 2016 por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, veamos.

Artículo 7°. Finalidades de la convivencia. Son fines esenciales de las normas de convivencia social previstas en este Código:

1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana.
2. Protección y respeto a los derechos humanos.
3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su protección integral. (...)



Artículo 38. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no deben realizarse. (...) Parágrafo 5°. En los casos en los que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados se aplicará lo dispuesto en la Ley 1098 2006.

Por la omisión de la Policía Nacional de proteger a la población civil de Llano Verde, y especialmente al adolescente **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** del peligro al que estaban expuestos, como se referenció en la Alerta Temprana 085 de 2018 se debe **condenar⁸⁸ también a la entidad demandada por el daño antijurídico consistente en la muerte del menor de edad en mención**, toda vez que **el peligro al que estaban expuestos los habitantes de la Comuna 15 del Barrio Llano Verde donde ocurrieron los hechos, fue puesto en conocimiento**, sin embargo, no buscaron proteger realmente a la población civil menor de edad de los riesgos que suponía la presencia de este grupo poblacional en su mayoría afrodescendiente en el cañaduzal en que fueron asesinados 5 menores, y que como tantos otros niños y adolescentes lo visitaban para departir, recrearse, jugar, elevar cometas, darse un chapuzón y comer caña.

De ahí que, la prematura muerte del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, es el resultado del actuar omisivo y anómalo del personal adscrito a esta institución, sin que mediaran circunstancias para ello por parte del adolescente.

Por otra parte, es forzoso traer a colación el Informe Final MIRA: Municipio Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Comunas 9, 15, 18 y 21, producto del estudio realizado del 23/09/2014 al 29/09/2014, mediante el cual visitaron la Comuna 15 (Llano Verde); entre otras comunas de Cali, en el cual participaron la Organización líder: OCHA, y las Organizaciones participantes: Arquidiócesis de Cali, HelpAge International, OCHA, OIM, ONU DDHH, OPS, Save the Children. No. de entrevistas realizadas: 25

“(…)

Datos generales

	Municipio Santiago de Cali	Comunidades visitadas ¹			
		Comuna 9	Comuna 15	Comuna 18	Comuna 21
Población	2.344.734 (DANE 2014)	45.349	156.267	127.752	110.332
%Afrocolombianos / %Indígenas	26,2% (mayoría en comunas 7, 12, 13, 14, 15 y 21). / 0,46% (en comunas 1, 3, 18, 20 y 22). (DANE, 2005)	16,8% / 0,47%	49,9% / 0,27%	13% / 0,81%	44,7% / 0,44%
%Urbano / %Resto	98,44 % (21 comunas)/ 1,56 % (15 corregimientos). (DANE, Estimado 2014)	-			

⁸⁸ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 68001-23-31-000-2005-00986-00(37894) Actor: LUZ STELLA CANCINO VARGAS Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA



Colombia - Informe Final MIRA: Municipio Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Comunas 9, 15, 18 y 21
23/09/2014 - 29/09/2014

Indicadores de violencia Santiago de Cali

Desaparición forzosa (Enero - Octubre 2013, Fuente: Personería de Cali)	392 casos
Violencia intrafamiliar (Enero-junio 2013 Fuente: Sistema Integral de Vigilancia de Salud Pública, Sivigila)	1.011 casos
Violencia contra la mujer (Enero-junio 2013, Fuente: Sivigila)	947 casos
Violencia sexual (Enero-junio 2013, Fuente: Sivigila)	219 casos
Muerte violenta menores de edad (Enero-noviembre 2013, Fuente: Personería de Cali)	223 casos
Homicidios (Enero - Octubre 2014, Fuente: OCHA-Monitor)	101
Intentos de homicidio (Enero - Octubre 2014, Fuente: OCHA-Monitor)	12
Amenazas individuales o colectivas (Enero - Octubre 2014, Fuente: OCHA-Monitor)	14
Víctimas de artefactos explosivos improvisados (Enero - Octubre 2014, Fuente: OCHA-Monitor)	494 víctimas
Desplazamiento (Enero - Octubre 2014, Fuente: UARIV)	Expulsión: 1.167 / Recepción: 3.164

Caracterización general de zonas de evaluación

- La mayoría de la población de las zonas de evaluación no supera los 8,5 años de escolaridad.
- En las comunas 15 y 21 se encuentra la población con mayores niveles de exclusión del sistema de seguridad social en salud.
- Todas las poblaciones viven bajo fronteras invisibles o restricciones a la movilidad por presencia de actores armados no estatales, especialmente las comunas 15 y 21.
- Las restricciones impiden el acceso a la educación en los barrios o los circunvecinos.
- Existe alto riesgo de reclutamiento forzado e incursión de jóvenes en actividades delictivas.
- Según el informe Cali Cómo vamos- 2013, estas zonas presentan las mayores tasas de fecundidad y embarazo adolescente de la ciudad.
- Necesidades Básicas Insatisfechas: 11% para Cali (DANE, 2005). El 19% de la población ubicada en la comuna 18 tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha, en el conglomerado oriente es del 17%.
- El promedio de homicidios en agosto de 2014 para las comunas evaluadas fue de 12,6 según la Policía Metropolitana.
- La Personería de Cali reportó que en 2013, el conglomerado oriente tuvo el mayor número de muertes violentas: comuna 15 (185 muertes) y comuna 21 (112 muertes).
- Con respecto a los móviles de los homicidios, las venganzas ocupan el primer lugar y los enfrentamientos entre pandillas el segundo. Las niñas, niños y adolescentes, son el grupo poblacional más afectado como víctimas y ejecutores.

(...)

Prioridades humanitarias

	Percepciones de la población		Recomendaciones del equipo evaluador (*)
1	Protección	1	Protección
2	Otro sector (Medios de vida)	2	Medios de vida
3	Seguridad alimentaria y nutrición	3	Educación

Identifique las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre todos los elementos que se identifican como "un problema severo"

(*) Nota: La priorización del grupo evaluador difiere de percepción de la población, debido a que el equipo integra el sector de Medios de vida con Seguridad alimentaria, e incluye como tercera prioridad la Educación. Los sectores Medios de vida y Seguridad alimentaria, se integran considerando que el limitado acceso a medios de vida suficientes y adecuados, afecta drásticamente el acceso a los alimentos y el estado nutricional de niños, niñas y jóvenes.

Recomendaciones – Estrategias de intervención

Sector	Recomendaciones
1 Protección	Fortalecimiento de las redes sociales para la prevención de conflictos comunitarios, solución de conflictos y formación en derechos. Programas para transformar la estigmatización hacia los jóvenes y consumidores de SPA, e integrarlos a las redes comunitarias. Programas y acciones sociales para prevenir y desvanecer las fronteras invisibles que afectan a toda la población. Programas sobre violencia intrafamiliar y sexual. Fortalecimiento y creación de estrategias comunitarias de protección y acciones de incidencia que visibilicen a la población víctima de desplazamiento intraurbano. Programas enfocados al reconocimiento y cumplimiento de los derechos de niños y niñas.
2 Medios de vida	Se requieren programas efectivos, continuos y de larga duración para fortalecer la generación de empleo, acceso justo al mercado laboral y generación de ingresos. Promover emprendimientos productivos asociados a la cualificación de los saberes y haceres presentes en los territorios, énfasis en programas para mujeres cabezas de hogar, facilitación de microcrédito y alternativas para quienes cambiaron sus actividades originales. Promover programas sociales para facilitar acceso a bienes y servicios, como programas alimentarios y de nutrición infantil. Programas para desincentivar la mendicidad y actividades ilegales.
3 Educación	Se requieren programas para asegurar la permanencia escolar, además de alternativas educativas luego del bachillerato, con modelos flexibles de formación, educación especial para adultos y extra-edad ³ . Alternativas que consideren el carácter etno-educativo, reconociendo las diversas expresiones culturales que caracterizan a los habitantes de los barrios. Fortalecimiento y creación de entornos protectores, formación en derechos para la población en general, acompañamiento psicosocial e incentivos artísticos y culturales para los habitantes.

³ Se refiere a niños o jóvenes que tienen dos o tres años más por encima de la edad promedio esperada para cursar un determinado grado.



Protección

Sector priorizado 1

Escenario general del sector

Los tres conglomerados sociales visitados, aunque presentan impactos similares en la población que los habita, presentan algunas particularidades que deben ser consideradas en la planificación de acciones de respuesta.

Violencia contra la mujer: Las fronteras invisibles han afectado particularmente a las mujeres. En el caso de Potrero Grande, en los sectores 5-10 o 2-9, las mujeres no pueden transitar con seguridad, se arriesgan a ataques sexuales o violación simultánea por los miembros de las pandillas. Estas mujeres no reciben ningún tipo de atención psicológica, en salud o acompañamiento en los casos de embarazo; tampoco existen denuncias de los casos expuestos. Las víctimas son estigmatizadas por la misma comunidad y no reciben apoyo. En todos los barrios, las niñas son altamente vulnerables a ingresar a las redes de prostitución. Esto evidencia como en las dinámicas del conflicto, el cuerpo de las mujeres se constituye en un botín de guerra y en una forma de delimitar el control territorial de los grupos y estructuras armadas. La comuna 15, en la que se ubica Llano Verde, presenta uno de los índices más altos de casos de muertes violentas de mujeres, lo que constituiría situaciones de violencia de género en las que se presume la participación de integrantes de grupos armados no estatales u organizaciones delictivas. Se señalan varios casos de embarazos de mujeres menores de 18 años en los barrios.

Presencia de actores armados y confrontación: En los barrios se ha identificado la presencia de reductos de grupos posdemoviliación y de milicias urbanas de grupos armados no estatales. Se reporta presencia de las Águilas Negras, los Rastrojos y El Clan Úsuga; quienes realizan actividades como cobro de vacunas e imponen permisos/condiciones para la realización de actividades en los barrios. Así mismo se han presenciado enfrentamientos entre grupos de barrios y comunas diferentes, por ejemplo, en el sector 2 de Potrero Grande hay más control y presencia de los grupos armados o bandas, quienes se enfrentan constantemente con sectores como el 5 y el 10, ocasionando afectaciones a la población civil. En Llano Verde, en este año se han presentado enfrentamientos con armas de fuego en el parque entre grupos armados; las pandillas del sector El Palo se enfrentan con las de Charco Azul. Se considera que este sector potencialmente puede llegar a presentar niveles de violencia de Potrero Grande. En Sucre, en 2014 se han dado enfrentamientos entre bandas o combos, causando heridos y muertos, estos enfrentamientos estarían relacionados con el control del microtráfico.

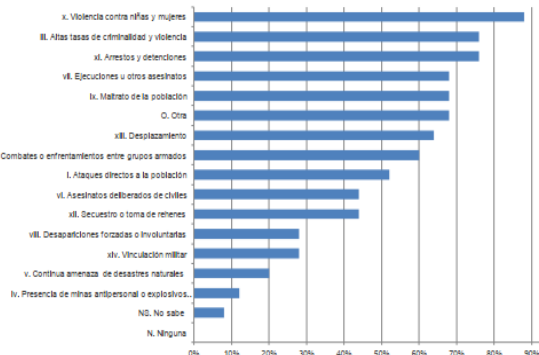
Restricciones a la movilidad: A excepción de Sucre, en todos los barrios se presentan restricciones a la movilidad, esta dinámica es más grave en Potrero Grande, donde la población conoce las fronteras invisibles, algunas de ellas se dan entre los sectores 2 y 3, 2 y 5, 5 y 4, 5 y 6, 6 y 10, y dentro del sector 9. Los más afectados son los jóvenes, especialmente del sector 5. Por las fronteras invisibles, muchos jóvenes no tienen acceso a la infraestructura comunitaria. A su vez, hay restricciones para la libre movilidad en barrios vecinos para el caso de Llano Verde, El Árbol y La Arboleda. A excepción de Potrero Grande, en los barrios han circulado panfletos manifestando restricciones y amenazas, esta tendencia ha aumentado desde 2013. Estos panfletos advierten sobre restricciones a la movilidad para jóvenes y menores de edad, anunciando homicidios a partir de las 11:00 p.m.; las amenazas más recientes circularon en abril de 2014. En los barrios donde se han dado estas acciones no se han denunciado las muertes.

Trabajo previo inserción social: En los barrios como Potrero Grande y Llano Verde, que son soluciones de vivienda para población desplazada por el conflicto armado o reubicada por desastres naturales, el trabajo previo y de acompañamiento continuo no fue suficiente para evitar las disputa y los conflictos entre los habitantes.

Desplazamiento: Los enfrentamientos entre grupos y estructuras armadas, han causado desplazamientos intraurbanos, en ocasiones desplazamientos en el mismo barrio. En el caso de Potrero Grande, un barrio conformado por 11 sectores, varias familias han vivido desplazamientos entre los sectores. Estos desplazamientos se relacionan con: extorsiones impuestas por los grupos que los habitantes no pueden cumplir; amenazas a líderes o líderes que son obligados/as a dejar los barrios; las fronteras invisibles; el temor por los enfrentamientos que se dan entre los grupos armados.

Homicidios: Es alto el índice de homicidios de hombres jóvenes entre los 14 y 25 años. Para Sucre, según datos de la comunidad, se presentaron 5 personas asesinadas en septiembre de 2014.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas en su comunidad, en términos de seguridad?



(...)

Reclutamiento y utilización de menores de edad: A excepción de Sucre, en todos los barrios se han presentado casos de utilización o reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, en Potrero Grande a partir de los 13 años los menores de edad son vulnerables para ser víctimas de las redes de reclutamiento de las pandillas que vigilan los expendios (4 por sector) y las oficinas de cobro (3 o 2 por sector). Al ingresar a estas redes los jóvenes reciben un sueldo o un dinero diario (desde 500 mil pesos hasta un millón de pesos) para cometer delitos que van desde el campañeo (vigilancia), expendio o hasta el sicariato. Es fácil el acceso a armas improvisadas, conocidas como *trabucas* o *pachas* (alrededor de \$10.000) y a alucinógenos. Las oficinas de cobro están asociadas con lo que se conoce como "Las Firmas" grandes empresas delincuenciales, asociadas presuntamente con los grupos posdemoviliación que operan en Cali. Para el caso del Árbol y Arboleda, los niños y niñas son utilizados para realizar diferentes actividades, a través de estrategias de reclutamiento, en algunas ocasiones los inducen al consumo de drogas ilícitas que generan adicción y los utilizan para realizar acciones delictivas. Se encuentran muchos jóvenes en las calles, sin que tengan la oportunidad de realizar alguna actividad lúdica, académica o de formación para el trabajo. Esto incrementa su vulnerabilidad a ser incorporados a las bandas o a grupos armados no estatales.

Espacios comunitarios: En general, se evidencia ausencia o insuficiencia de infraestructura comunitaria para la recreación, el deporte y actividades de fortalecimiento social. La oferta de servicios sociales que necesitan las familias para el derecho a una vida digna es limitada. Los pocos espacios son restringidos por la presencia de fronteras invisibles o no cuentan con condiciones dignas para su uso, o están destinados a actividades no relacionadas con la comunidad. Potrero Grande cuenta con el Tecnocentro, sin embargo muchos jóvenes no pueden acceder por la presencia de las fronteras invisibles. La zona comunitaria más importante del Árbol es el control de buses de la empresa Cañaveral (zona de reunión de los vecinos, y de juego y recreación para los niños), allí se presenta alto nivel de riesgo para la niñez teniendo en cuenta el tráfico de vehículos, la contaminación por basuras y la presencia de consumidores de SPA. Adicionalmente, el espacio está proyectado para ser control de transporte del Sistema MIO, lo que está generando movilización de la población para la defensa del espacio con fines recreativos para la niñez y juventud. En La Arboleda, está el comedor escolar que funciona como espacio amigable. En Llano Verde no se cuenta con espacios comunitarios hasta el momento.

Amenazas a líderes y líderes: En Llano Verde, en 2014 han circulado panfletos amenazantes a nombre de Los Rastrojos contra los líderes y líderes del barrio, quienes les obligan a retirarse de las Juntas de Acción Comunal (JAC). En algunos casos, mujeres líderes han sido atacadas con ácido y no han recibido atención psicosocial del Estado. Actualmente, los líderes y líderes han bajado el perfil de sus actividades por las recurrentes amenazas. Cuando los líderes realizan actividades sin autorización de los grupos, hay altas probabilidades de que se presente desplazamiento. En 2012, un líder que tuvo que desplazarse a otra comuna de la ciudad por amenazas de los grupos.

Desapariciones: Se han identificado casos de desaparición, afectando particularmente a niños, niñas y mujeres jóvenes. En el sector de La Arboleda, la comunidad expresa que dos niños han desaparecido en 2014. En Potrero Grande, se registran cinco casos de desapariciones en 2014, entre ellas dos jóvenes y un menor de edad.

Expendio y consumo de SPA: Hay una estrecha relación entre la problemática de la drogadicción, la presencia de sitios de expendio de droga y la alianza a los grupos o pandillas para desempeñar acciones criminales. Las comunidades manifiestan los altos riesgos que enfrentan los niños, niñas y jóvenes por la proliferación de expendios de droga, en algunas zonas se restringe la movilidad por la presencia de consumidores de droga.

Convivencia: Son frecuentes los conflictos entre vecinos, amenazas y ataques entre ellos mismos. Se evidencian graves problemas de convivencia. Se señalan casos de abuso de autoridad de la Policía, lo que ha producido desconfianza en la fuerza pública.

Estigmatización y discriminación: Los pobladores de los barrios visitados manifiestan que sufren altos niveles de discriminación y estigmatización. Esto restringe sus posibilidades de acceso a derechos educativos, de trabajo, etc.

Embarazos adolescentes, violencia intrafamiliar y sexual: En todos los barrios se identificaron casos de violencia intrafamiliar y maltrato. Los niños, niñas y jóvenes que permanecen solos, porque sus padres deben salir a trabajar (muchas son familias con mujeres cabezas de hogar), tienen alto riesgo de sufrir abusos sexuales.

Movilidad y transporte: En Potrero Grande y Llano Verde se identificaron problemas con la cobertura de transporte, este factor limita las posibilidades de acceder a educación, fuentes de trabajo y la conexión de los habitantes con otros sectores de la ciudad.

Desastres naturales: Los asentamientos humanos como El Árbol (conformado por 186 casas, 210 familias), se encuentran en alto riesgo de afectación por eventos naturales o antrópicos, por posibles deslizamientos de tierra y por la cercanía de viviendas a una torre de energía eléctrica.

Capacidades nacionales y respuesta

- En octubre de 2013, con directriz del Alcalde, se conforma el Comité Interinstitucional para la Intervención Social en la Urbanización Casas de Llano Verde, con participación de las dependencias de la Administración Municipal, entidades externas y líderes comunitarios; con el fin de generar acciones articuladas para el bienestar de las familias, enfocadas en cuatro lineamientos dados por el Departamento para la Prosperidad Social: Atención a primera infancia; acceso a educación y permanencia; seguridad, convivencia, medio ambiente y entorno; generación de ingresos. Las JAC, Secretaría de Cultura y deporte, UARIV, ANSPE, Secretaría de Vivienda y Estrategia TIOS, desarrollan intervenciones en protección, prevención, incidencias en movilidad y para la construcción de centros comunitarios como CDI, colegio, centro de salud y adecuación de zonas verdes.



(...)

- El personal de la Unidad Móvil del ICBF en Llano Verde, que se encuentra realizando acompañamiento psicosocial y nutricional, y actividades colectivas y familiares que tienden a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, **es limitado**.

Capacidades internacionales y respuesta

- En la Comuna 18, específicamente en los sectores Árbol, Arboleda, Alto Nápoles y Altos de la Cruz, Save the Children implementa el proyecto Crezcamos con Derechos, para prevención de reclutamiento forzado, y la Campaña Every One, todos y todas por la salud y protección de la niñez, a través de cuatro Espacios Amigables para la niñez y juventud, donde se brindan procesos de formación en artes con enfoque de derechos, habilidades para la vida, autocuidado, crianza positiva, así como el desarrollo de la estrategia del Centro de Participación y Comunicación (PACO), en el cual los niños, niñas y jóvenes aprenden sobre comunicación, utilización de medios con enfoque de derechos.
- OIM ejecuta, a través de la Fundación Arvaralce, el proyecto Jóvenes Constructores de Paz, que busca promover capacidades, habilidades y destrezas en líderes juveniles comunitarios y agentes sociales de cambio, para restaurar lazos de convivencia y desarrollar iniciativas de reconciliación y cultura de paz en el barrio Potrero Grande.

Brechas identificadas

- La ausencia o insuficiencia de intervenciones está relacionada con la limitada articulación entre Estado, cooperación internacional y organizaciones sociales nacionales, así como la débil articulación de éstas con las organizaciones comunitarias de los barrios o sectores.
- No se están reconociendo y atendiendo los desplazamientos intraurbanos que son generados por la disputa y el control territorial de los actores armados que operan en el barrio. La población experimenta una presión constante.
- Insuficiencia de programas específicos para adultos mayores y con cobertura amplia.
- Insuficiencia de programas para el uso del tiempo libre, principalmente en Potrero Grande, Llano Verde y Sucre. En el Árbol y Arboleda, aunque hay presencia, es necesario fortalecimiento Estatal.
- Insuficiencia o ausencia de espacios protectores comunitarios y recreativos enfocados a niños y niñas y jóvenes, para prevención de acciones violentas y reclutamiento forzado.
- Insuficiencia de proyectos de atención psicosocial y mental.
- Insuficiencia de programas de prevención de consumo de drogas psicoactivas y alcohol.
- Es necesario que las instituciones reconozcan que las problemáticas que atraviesan los barrios no sólo son enfocadas a problemas de delincuencia común.
- La comunidad evidencia la debilidad del Estado y la fuerza pública frente a la acción de los grupos delictivos.
- En casos como Potrero Grande y Llano Verde las intervenciones se realizan casi siempre en puntos geográficos comunes, lo que imposibilita que varios habitantes las conozcan, y puedan participar.
- Los cambios en las administraciones municipales no permiten la continuidad de los programas o proyectos sociales.

Intervenciones claves

- Fortalecer y promover espacios institucionales como el Comité Interinstitucional para Llano Verde y el de Potrero Grande que se encuentra en consolidación, con el fin de coordinar las intervenciones que se estén implementando o se tengan proyectadas.
- Aumentar la cobertura de programas para el fortalecimiento de redes sociales para la prevención de conflictos comunitarios, solución de conflictos y formación en derechos.
- Trabajo comunitario para transformar la estigmatización hacia los jóvenes y consumidores de SPA, para integrarlos a las redes comunitarias. Se requieren acciones sociales para prevenir y desvanecer las fronteras invisibles que afectan a toda la población, programas sobre violencia intrafamiliar y sexual; al igual que el fortalecimiento y creación de estrategias comunitarias de mecanismos de protección y seguimiento a la población víctima de desplazamiento intraurbano. En el caso de Potrero Grande, es necesario realizar intervenciones entre los sectores, para evitar que las fronteras invisibles se vuelvan consuetudinarias en la comunidad.
- Fortalecer programas de protección y prevención dirigidos a jóvenes, niños y niñas, con enfoque individual fortaleciendo valores como la autoestima, sujetos de derechos. Así mismo programas con enfoque familiar, donde la familia se convierta en un entorno protector; y enfoque colectivo, donde se fortalezcan los espacios comunitarios como espacios protectores.
- Promover iniciativas comunitarias para el uso del tiempo libre.
- Desarrollar o fortalecer programas de atención y orientación a jóvenes y adolescentes, que promuevan la construcción de proyectos de vida viables y realizables.
- Propiciar espacios que fortalezcan la identidad cultural.
- Desarrollar dinámicas de promoción de los derechos de la mujer, fomentar la construcción de espacios de cohesión de mujeres.
- Con relación a la violencia intrafamiliar y sexual, establecer hogares para personas víctimas de estas situaciones.
- Programas de prevención de embarazos adolescentes.
- Fortalecer personal de la Unidad móvil del ICBF, que interviene en Llano Verde.
- Fortalecer los medios de transporte para Potrero Grande y Llano Verde.
- Descentralizar las intervenciones ejecutadas para lograr mayor visibilidad y cobertura.
- Aumentar la participación de las organizaciones de base comunitarias para la ejecución de nuevos proyectos e intervenciones.
- Generar más políticas públicas en protección y prevención, para que el cambio de administración no impida su seguimiento y ejecución.
- Desde el área de protección de derechos humanos realizar seguimiento a las preocupaciones frente al actuar de la fuerza pública en los barrios.

(...)

Brechas identificadas

- La ausencia o insuficiencia de intervenciones está relacionada con la limitada articulación entre Estado, cooperación internacional y nacional, y la poca articulación de éstas con las organizaciones comunitarias de los barrios o sectores.
- En casos como Potrero Grande y Llano Verde, las intervenciones se realizan casi siempre en puntos geográficos comunes, lo que imposibilita que varios habitantes los conozcan y participen, y que se reconozcan las intervenciones por parte de las comunidades.
- Las capacitaciones ofrecidas por el Estado o por ONG, no siempre priorizan las cualidades y fortalezas de las personas. En general, estas intervenciones llegan con acciones preestablecidas. Muchas personas han participado en capacitaciones pero siguen desempleadas.
- El acceso a programas de empleabilidad para mujeres es limitado.
- La estigmatización de las fuentes empleadoras hace más reducida la posibilidad para acceder a medios de vida adecuados.

Intervenciones claves

- Promover ofertas que faciliten, especialmente a las mujeres, el ingreso al mercado laboral. Facilitación de microcrédito y alternativas para quienes cambiaron sus actividades originales.
- Programas para la desincentivación de la mendicidad y actividades ilegales.
- Campañas para eliminar la estigmatización, en el resto de la ciudad y entre las posibles fuentes de empleo, especialmente para Llano Verde y Potrero Grande.
- Descentralizar las intervenciones ejecutadas, para lograr mayor visibilidad y cobertura.
- Aumentar la participación de las organizaciones de base comunitarias para la ejecución de nuevos proyectos e intervenciones.
- Fortalecer y promover espacios institucionales como el Comité Interinstitucional para Llano Verde y el de Potrero Grande, que se encuentra en consolidación, con el fin de coordinar las intervenciones que se estén adelantando o se tengan proyectadas.
- Generar más políticas públicas en temas de empleabilidad y medios de vida, para que el cambio de administración no impida su seguimiento y ejecución.
- Aumentar la cobertura de programas como Desayunos con amor y comedores infantiles.
- Programas alimentarios, de seguimiento y control nutricional.

(...)



enviar a sus hijos al colegio, por los grupos o pandillas que rondan el barrio, que incitan a los niños y niñas a ser parte de ellos. No se ha cumplido por parte del Gobierno el acuerdo sobre la construcción del colegio.

En el barrio **Sucre** no hay escuela ni colegio. Los niños, niñas y jóvenes deben desplazarse a otros barrios. Problemas fuertes de drogadicción en las familias, limitan la posibilidad de sus para acceder a escuelas y colegios. La falta de recursos de las familias para comprar útiles escolares y pagar las matrículas, causa inestabilidad escolar en los niños y niñas. Muchos niños, niñas y jóvenes se han dedicado a trabajar para ayudar a sus familias y han tenido que abandonar la educación.

Capacidades nacionales y respuesta

Al no existir oferta al interior del barrio **Llano Verde**, la Alcaldía está apoyando con el transporte escolar a otras zonas⁴. En el marco del Comité Interinstitucional de Llano Verde, el ICBF se encuentra desarrollando el programa Generación con Bienestar. En **Potrero Grande**, organizaciones de base como Fundación Afrocolombiana Koretta King, realizan intervenciones educativas. Organizaciones como Cruz Roja Colombiana, Visión Mundial, Estrategia TIOS, Tecnocentro y Comfandi, desarrollan intervenciones en educación.

Capacidades internacionales y respuesta

En El Árbol y La Arboleda, Save the Children a través del proyecto para la prevención del reclutamiento forzado, realizó procesos de formación con enfoque de derechos y protección de la niñez, en instituciones educativas. A través de la Campaña Every One, se desarrollan estrategias de salud y protección en las instituciones. Mediante la Fundación Arvaralce, OIM ejecuta el proyecto "Jóvenes constructores de paz" que busca promover capacidades, habilidades y destrezas en líderes juveniles comunitarios y agentes sociales de cambio para restaurar lazos de convivencia y desarrollar iniciativas de reconciliación y cultura de paz en el barrio **Potrero Grande**.

Brechas identificadas

- La población infantil y adolescente sufre graves consecuencias por la estigmatización, aislamiento social, riesgos por violencia y control de los grupos que operan en sus barrios, así como por la falta de oportunidades para continuar en el sistema educativo o ingresar al mundo laboral.
- Baja cobertura educativa, especialmente en **Llano Verde** y **Sucre**. Muchas de las instituciones educativas no tienen programas de comedores alimentarios para todo los grados educativos.
- Las restricciones a la movilidad son una de las principales causas de deserción escolar. No se cuentan con datos estadísticos sobre indicadores de deserción escolar por barrios.

Intervenciones claves

- Mejorar las condiciones para acceder a instituciones educativas, construyendo escuelas y colegios, o fortaleciendo los existentes.
- Programas para la mitigación de la deserción escolar. Programas escolares fundamentados en los contextos específicos, las problemáticas de los territorios, siendo la escuela un espacio protector.
- Alternativas educativas luego del bachillerato, con modelos flexibles de formación, en educación especial para adultos y extra edad. Generar alternativas considerando el carácter etno-educativo, reconociendo las diversas expresiones culturales que caracterizan a los habitantes de los barrios.
- Fortalecimiento y creación de entornos protectores comunitarios para niños, niñas y jóvenes.
- Formación en derechos para la población en general, acompañamiento psicosocial e incentivos artísticos y culturales para los habitantes. Ampliar la cobertura en cupos escolares.

⁴ Entre las instituciones educativas donde estudia la población en edad escolar se encuentran: Isaías Duarte Cancino, Gabriel García Márquez, Ciudad Córdoba, Carlos Holmes Trujillo y Cristóbal Colón, ubicados en las comunas 10, 15 y 18.

Otros hallazgos

Vivienda

La **Arboleda** se compone de 68 viviendas, muchas familias son desplazadas del departamento del Cauca. **Potrero Grande** en 2006, se asignaron 3.867 viviendas en las que se reubicaron familias que invadían zonas de alto riesgo o desplazados principalmente por la violencia y problemáticas sociales, adicionalmente algunas familias reubicadas por un incendio ocurrido en Brisas de un Nuevo Amanecer en 2006 (1.178 personas). Con la reubicación de las familias se rompieron los lazos de vecindad construidos, hasta en algunos casos se encontraron víctimas y victimarios. Las familias afirman que en el proceso de reubicación no hubo seguimiento ni asesoría. **Llano Verde**, barrio de reubicación desde 2013, tiene población de comunidades desplazadas de diferentes sectores de Cali y reubicadas de zonas de alto riesgo natural. Los habitantes manifiestan que no hubo ninguna gestión social después de la reubicación, esto ha llevado a conflictos internos en la población, ataques físicos y directos y falta de organización comunitaria.

En todos los barrios visitados, la vivienda es un problema central por la inseguridad en la tenencia, acceso físico o económico, o por las condiciones precarias que las caracterizan: fallencias en servicios públicos, espacio público, infraestructura de movilidad, infraestructura comunitaria como escenarios deportivos y culturales, comedores comunitarios, espacios de apoyo a la tercera edad y acceso a servicios institucionales como salud y educación.

Los temas de titulación y acceso efectivo a la propiedad e infraestructura adecuada, son problemáticas visibles en los sectores del Árbol y La Arboleda (comuna 18). Independientemente del tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad en la titulación, que les garantice una protección legal.

Una de las problemáticas identificadas en los barrios del centro de Cali, a los que pertenece el **Barrio Sucre** (Comuna 9), son los procesos de renovación urbana donde se requiere acción social activa para evitar futuros conflictos comunitarios, y disminuir el riesgo de los habitantes al despojo y violación de sus derechos. En el barrio **Sucre**, los habitantes están en riesgo de desalojo. Cuando un desalojo se considere justificado por el Estado, este debería llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad.

En **Llano Verde** y **Potrero Grande**, se construyen soluciones de vivienda del Estado para población desplazada o reubicada, sin embargo, tienen deficiencias para cumplir adecuadamente este derecho y en algunos casos solo se presentan como una solución de accesibilidad económica. En el desarrollo del proyecto no se tuvieron en cuenta las características y modos de vida culturales, en su mayoría es población afrocolombiana, indígena o campesina. La ubicación no tuvo en cuenta el acceso a opciones de empleo y a servicios básicos, aunque se han identificado avances en ese sentido.

Dentro de la perspectiva del derecho a tener una vivienda adecuada, en los casos de **Potrero Grande** y **Llano Verde**, es necesario un plan social de seguimiento a la reubicación y a los problemas sociales que conllevó la reunión de población de diferentes zonas del país, y la convivencia con población desplazada. Se requiere enfatizar en la seguridad de la titulación, especialmente en los sectores del Árbol y Arboleda. Dar seguimiento a los proyectos de vivienda subsidiada con relación al acceso físico y económico, aspectos culturales, aspectos de género, amueblamientos comunitarios, etc.

Información de contacto

Nombre: OCHA Cali
Organización: OCHA
E-mail: anananieto@un.org
Dirección: Carrera 37 número 6-28, Cali
Teléfono: (57-2) 5573696

(...)"⁸⁹

⁸⁹ Tomado de: <https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-informe-flash-mira-urbano-municipio-de-cali-comunas-9-15-18-y-21-valle-del>



En consecuencia, este apoderado judicial solicita a la judicatura, que **se tenga como legitimados en la causa por pasiva al Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional –PONAL, y la Defensoría del Pueblo**, puesto que como se demuestra con las pruebas allegadas al proceso, las entidades antes mencionadas, pese a tener la calidad de garantes, incurrieron manifiestamente en omisión de protección a la población civil de la comuna de Llano Verde, pese a la multiplicidad de indicaciones sobre la cruenta realidad que se cernía sobre dicha población, como las recomendaciones que realizó la Defensoría del Pueblo, *(Aunque también resulta imperativo mencionar que la Defensoría del Pueblo no hizo el seguimiento, ni el acompañamiento que la difícil situación ameritaba)*, así como de advertencias de su recrudecimiento de no tomarse las acciones necesarias para mitigar el riesgo, de modo que los habitantes y residentes pudiesen vivir con tranquilidad, dignidad, en paz, en este estado social de derecho donde la igualdad y el derecho a la no discriminación se elevan a la categoría de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, lo que en último término conllevó a que se materializara el hecho dañoso que hoy nos convoca.

3.3.2.1.1.3. Imputación de responsabilidad al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

El Decreto 4151 DE 2011 por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras disposiciones, establece:

Artículo 1º. Objeto. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos.

Artículo 2º. Funciones. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrá las siguientes funciones: (...)

7. Vigilar a las personas privadas de la libertad fuera de los establecimientos de reclusión para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial.

8. Garantizar el control sobre la ubicación y traslado de la población privada de la libertad. (...)

11. Realizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las modalidades privativas de la libertad que establezca la ley. (...)

18. Coordinar sus actividades con las entidades que ejerzan funciones relacionadas con la gestión penitenciaria y carcelaria, todo ello en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

24. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la entidad.

Igualmente, la Ley 65 de 1993 Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario establece:

Artículo 14. Contenido de las funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Corresponde al Gobierno Nacional por



conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, **la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través de una sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de aseguramiento**, del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado. (...)

ARTICULO 140. EVASION. **Cuando ocurra la evasión de un interno de un establecimiento de reclusión o en remisión o en permiso, el director del mismo procederá de inmediato**, por medio del personal de su dependencia, a adelantar las primeras pesquisas, y a iniciar la respectiva investigación administrativa; **al mismo tiempo pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes y de la Dirección con el fin que se preste el apoyo necesario para obtener su recaptura**.

La omisión de estos deberes constituye causal de mala conducta.

En los casos en que la dirección del instituto considere que ella misma debe iniciar y proseguir la investigación, lo comunicará al director del establecimiento donde haya ocurrido la fuga.

Ahora bien, frente a la legitimación en la causa del INPEC, el Consejo de Estado en su sección tercera ha dicho:

“Sobre la naturaleza jurídica y las funciones del INPEC, tenemos que los artículos 2° y 4° del Decreto 2160 de 1992 declaran:

“(...) es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa. (...)”

La formulación y ejecución de los planes y programas de gestión carcelaria y penitenciaria; la dirección, administración y control de los centros carcelarios y penitenciarios; y la determinación de los sistemas de seguridad, vigilancia y control al interior y exterior de los establecimientos de reclusión (...).”

Mientras que los numerales 2 y 3 del artículo 7 del Decreto 1170 de 1999, disponen:

“ARTÍCULO 7o. FUNCIONES. Son Funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, las siguientes: (...)”

2. Ejercer la Dirección, Administración y Control de los Centros Carcelarios y Penitenciarios del Orden Nacional, y atender la vigilancia interna de los mismos a través del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, o por conducto de otros cuerpos administrativos de vigilancia interna.

3. Proponer y participar en los diseños de los sistemas y esquemas de seguridad, vigilancia y control al interior y al exterior de los Establecimientos de Reclusión y evaluarlos permanentemente.”

*58 Así las cosas, esta Corporación encuentra que a pesar de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, sea una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, **la misma se encuentra dotada de autonomía administrativa, patrimonio independiente y personería jurídica propia, lo cual le permite ejercer derechos y contraer obligaciones, y por ende, tiene la facultad de fungir como sujeto procesal cuando, a iniciativa propia o en contra de ella, se***



adelante un proceso judicial.⁹⁰ (Negrillas y subrayas fuera de texto original).

Téngase especialmente en cuenta que, frente al tema en comentario, el **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B. Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH**, el veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 25000-23-26-000-2002-00151-01(30181) Actor: LEONIDAS BASTIDAS CHURQUE. Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL se pronunció en el siguiente sentido:

“(…) Las políticas de ejecución de penas en materia carcelaria están radicadas en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC y sus obligaciones en materia de cumplimiento de las medidas de aseguramiento y la ejecución de las penas privativas de la libertad personal se encuentran consagradas en la Ley 65 de 1993, mediante la cual se expidió el Código Penitenciario y Carcelario, modificada por las Leyes 415 de 1997 y 504 de 1999. Bajo esta normatividad, los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria tienen la obligación de proteger y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, y requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados, así como a quienes ingresan al penal conforme al reglamento. Conforme a tales normas, constituye también una carga para la institución carcelaria a través del personal de guardianes ejercer un control permanente sobre los reclusos e impedir cualquier conducta que atente contra la disciplina que se exige en el centro carcelario y por supuesto, que implique un intento de fuga.

DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / LESIONES PERSONALES AL CIVIL / INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE PARCIAL / CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE FUGA DE PRESOS / DELITO DE FUGA DE PRESOS / FAVORECIMIENTO DE LA FUGA / ATAQUE POR GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / DELITO CON MINAS ANTIPERSONALES / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL

Este daño tiene el carácter de antijurídico pues surge de la materialización de un riesgo excepcional, cual es el plan de fuga concertado entre la guerrilla y los prisioneros del centro carcelario. Es evidente que los actores no tenían el deber de soportar las consecuencias derivadas de esa huida masiva de los internos, por lo cual deberán ser indemnizados por el Estado en observancia de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política. (...)” Se destaca.

Igualmente, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil dos (2002) Radicación número: 76001-23-31-000-1994-01010-01(13760) Actor: Efraín Hernández Ramírez Y Otros Demandado:

⁹⁰ Consejo De Estado, Sección Tercera - Subsección C- Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil trece (2013). Radicación número: 41001-23-31-000-1994-07643-01(27213), Actor: Mery Cuellar y Otros, Demandado: Ministerio de Justicia Referencia: Acción de Reparación Directa (Apelación Sentencia).



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC- Referencia:
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, señaló:

“(…) INPEC - Naturaleza Jurídica. Responsabilidad por omisión de deberes de custodia de los presos y de vigilancia del centro carcelario / FALLA DEL SERVICIO CARCELARIO - Omisión de los deberes de custodia y vigilancia en centro carcelario / FALLA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS CARCELES - Omisión de funciones / RECLUSOS - Muerte en centro carcelario a manos de otro recluso / HECHO DE UN TERCERO - Concurrencia de causas

El INPEC como máxima autoridad carcelaria tiene dos clases de obligaciones: La de custodia, entendida como el deber de cuidado, la asistencia y conservación de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios y carcelarios **y la de vigilancia, que conlleva el deber de atención exacta en las conductas de las personas a su cargo, es decir, que las personas reclusas en los centros penitenciarios, no realicen conductas atentatorias contra sus propios compañeros y la comunidad en general.** En consecuencia, desde el punto de vista jurídico del deber de la Autoridad Carcelaria la tarea protectora tiene como objeto mantener al recluso en las mismas condiciones psicofísicas que presentaba al momento de la privación de la libertad, por cuanto el deber de esa protección se amplía a la custodia y vigilancia constante de los internos. **Lo anterior permite concluir que la realización de una conducta criminal dentro de un centro carcelario, quebranta por omisión el deber de vigilancia impuesta al Estado, por cuanto la muerte producida fue consecuencia de una persona que se encontraba sometida a la vigilancia estatal; como también quebranta por omisión esos deberes legales porque un recluso, que no se identificó, portaba un arma de fabricación carcelaria y agredió con ella a un interno, que igualmente se encontraba bajo la custodia del establecimiento penitenciario,** sin perder de vista de que el hecho de la agresión ocurrió en presencia de la vigilancia de los guardas de la penitenciaria, a la hora del desayuno. **Por consiguiente, con las pruebas se infiere y ante el ordenamiento que el INPEC no cumplió con sus deberes de custodia de los presos y de vigilancia del centro carcelario (conducta irregular por omisión), que infringe el ordenamiento jurídico legal visto, y el constitucional (art. 2º sobre el deber de proteger la vida).** Respecto del daño moral, para la Sala resultan demostrados los hechos del parentesco, entre los demandantes y la víctima directa, y la pérdida de afecto que padecieron con su muerte. Además si no se hubieran recepcionado los testimonios o recepcionados no concluyeran sobre el daño afectivo que aquellos padecieron, se presumiría de hombre (indicio judicial) que ellos sufrieron con la muerte de su hijo y hermano, porque es de la naturaleza humana que un pariente, como son los padres y hermanos entre otros, sufren con la muerte de uno de ellos. **El nexo de causalidad también se configura, pues el daño moral deviene de la conducta omisiva del INPEC y de la activa de uno de los reclusos.** Tal situación de concurrencia de conductas, OMISIVA del INPEC y ACTIVA de un recluso no identificado (tercero ajeno al proceso), deja ver que en la producción del daño confluyeron dos conductas ilícitas, y por tanto a términos del Código Civil puede exigirse indemnización a cualquiera de los que participaron en la producción del daño. (...)” Se destaca.



Así mismo, este apoderado judicial estima oportuno reforzar la presente línea discursiva, respecto a la temática que hoy nos convoca, con la sentencia proferida el día veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016) por parte de la SUBSECCION A de la SECCION TERCERA de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO. Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON. Radicación número: 23001-23-31-000-2003-01182-01(37103) Actor: JAIRO RAFAEL LOPEZ VILLALOBOS Y OTRO. Demandado: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL INPEC. Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA (APELACION SENTENCIA), a saber:

“(...) ACCION DE REPARACION DIRECTA - Accede, condena al INPEC por muerte de recluso que contaba con permiso de trabajo fuera del establecimiento carcelario, Cárcel Nacional de Las Mercedes de Montería / FALLA DEL SERVICIO - Omisión en el deber de custodia permanente del procesado, recluso. Recluso con permiso de trabajo fuera de establecimiento carcelario / FALLA DEL SERVICIO - Si bien muerte de recluso se ocasionó por terceros, el INPEC incurrió en falla en sus deberes legales

Descendiendo al caso concreto, se tiene acreditado que el INPEC le había otorgado un permiso al sindicado Gabriel Guillermo López Villalobos para trabajar fuera del establecimiento carcelario en un lugar específico, no obstante, lo cual fue asesinado por unos terceros en un lugar diferente. Además, según el testimonio del señor Robinson Manuel Mejía Osorio, quien frecuentaba la casa de su madre que quedaba muy cerca de la finca donde fue asesinada la víctima e igualmente trabajaba para ella, indicó que los primeros días del permiso concedido al sindicado, los guardianes del INPEC lo acompañaban tanto a la empresa INSUAGRO como a la finca “Nueva Esperanza”, pero que después el señor Gabriel Guillermo López Villalobos llegaba sin ellos y que quien lo recogía y llevaba al establecimiento carcelario era un señor llamado Hernán Ramos. Así entonces, **la Sala observa que la entidad demandada incumplió con su deber legal de custodiar permanentemente al sindicado, lo cual repercutió directamente en el daño causado a los demandantes, dado que, en primer lugar, permitió que el hoy occiso cambiara de lugar de trabajo y, en segundo lugar, al no haber contado con guardianes que lo estuvieran vigilando y protegiendo, lo sometió a un peligro que tuvo como consecuencia el ataque violento por parte de unos terceros sin identificar, que le causó su muerte.** (...) Ahora bien, aunque el Tribunal de primera instancia y el Ministerio Público argumentaron que el sindicado no se encontraba amenazado, circunstancia que eximía a la entidad demandada de asignarle guardianes que los custodiaran, lo cierto es que **la norma le impone la obligación de custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento y emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias y evasiones, sin discriminar circunstancia alguna.** (...) De otra parte, consideraron que el daño tuvo su causa en el hecho exclusivo de la víctima por haberse fugado, en el sentido en que el propio sindicado fue quien cambió su sitio de trabajo; sin embargo, **el INPEC omitió su obligación legal de custodiarlo permanentemente, dado que el trabajo extramuros es una extensión del centro penitenciario y, además, existe un deber legal específico a cumplir por el INPEC para la circunstancia**



en que se encontraba el recluso, consistente en brindar un estricto control de seguridad a los reclusos que trabajen fuera del establecimiento carcelario. (...) El hecho de un tercero alegado por la entidad demandada no tiene tal entidad que la exima de responsabilidad dado que su conducta omisiva fue determinante en la causación del daño y, **si bien quienes segaron la vida del señor Gabriel Guillermo López Villalobos fueron unos terceros, lo cierto es que en el momento en que ocurrieron los hechos, no se encontraba custodiado por personal del INPEC, debiendo estarlo.** De este modo, **la Sala encuentra probada la falla del servicio por parte del INPEC** y, en consecuencia, revocará la sentencia apelada para en su lugar declarar la responsabilidad administrativa de dicha entidad (...)” Se destaca.

Por lo relacionado anteriormente, se colige que el INPEC tenía la obligación de controlar que Gabriel Alejandro Bejarano, alias Mono cumpliera con la medida de aseguramiento de prisión domiciliaria impuesta por el Juez competente, con lo cual, se hubiese evitado el resultado dañoso del fallecimiento de la víctima principal en mención, para la fecha en que le fue arrebatada abruptamente su vida, razón por la cual ostenta la legitimación por pasiva para concurrir a la presente demanda.

3.3.2.1.1.4. Imputación de responsabilidad a La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La Ley 1709 de 2014 Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones, consagra lo siguiente:

Artículo 5°. Adiciónese un artículo 7A en la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 7A. Obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad. Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad **tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.**

Los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la defensoría pública o de la Procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respectivos requisitos.

La inobservancia de los deberes contenidos en este artículo será considerada como falta gravísima, sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar.

El Consejo Superior de la Judicatura garantizará la presencia permanente de al menos un Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en aquellos establecimientos que así lo requieran de acuerdo con solicitud que haga el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En los demás establecimientos se garantizarán visitas permanentes.

Las normas precitadas en este numeral, de obligatorio cumplimiento para **La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**, fueron desatendidas por esta entidad pública, por cuanto, pese a que para el día 11 de agosto de 2020, el señor Gabriel Alejandro Bejarano estaba condenado por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, en razón a la providencia proferida por el juzgado 10 Penal del circuito de Santiago de Cali por más de 7 años, y disfrutando de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en la modalidad domiciliaria, cuya autoridad



a cargo era el Juzgado 5 de ejecución de penas de Santiago de Cali, y por supuesto el INPEC, convergió con cinco menores de edad, entre ellos **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** en el cañaduzal en el cual, estos menores frecuentaban para darse un chapuzón, comer caña y elevar cometas.

Siendo el resultado de dicho encuentro amplia y suficientemente detallado El acta de inspección a lugares **–FPJ-9⁹¹** de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 12 de agosto de 2020; El acta de inspección técnica a cadáver **–FPJ-10⁹²** de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 11 de agosto de 2020; El informe de investigador de laboratorio **–FPJ-13⁹³** de Policía Judicial (Santiago de Cali) de fecha 27 de agosto de 2020; **El informe de perfilación criminal⁹⁴** de fecha 27 de agosto de 2020; El informe de investigador de campo **–FPJ - 11⁹⁵** de fecha 14 de agosto de 2020; El informe de investigador de campo **–FPJ-11⁹⁶** de fecha 12 de agosto de 2020; y La declaración jurada **–FPJ-15⁹⁷** de fecha 26 de agosto de 2020, mismos que obran como pruebas de la presente demanda, y demuestran fehacientemente, el resultado dañoso consistente en el homicidio del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**

Por lo cual, se concluye ostensiblemente que La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tenía la obligación de **vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de la medida de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria** de Gabriel Alejandro Bejarano, alias Mono, pero no lo hizo; de haber acatado su obligación legal, ese día 11 de agosto de 2020 hubiese sido un día como cualquier otro para el adolescente **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.) sus cuatro amigos, y sus familiares**, los cinco menores de edad hubiesen regresado a almorzar a sus hogares, a departir con sus familiares, a soñar, a bailar, a jugar futbol con sus amigos, a vivir un día más en el Barrio Llano Verde del Distrito de Santiago de Cali / Colombia.

Por consiguiente, con las pruebas aportadas con el libelo genitor se colige que, el Juzgado 5 de ejecución de penas de Santiago de Cali no cumplió con sus deberes de **vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de la medida de seguridad** de alias Mono (Conducta irregular por omisión), que infringe el ordenamiento jurídico legal visto, y el constitucional (art. 2º sobre el deber de proteger la vida)⁹⁸

3.3.2.1.2. Su mayor o menor previsibilidad

Inicialmente es menester señalar que, el Estado normativamente desde el preámbulo y los artículos primero y segundo de la Constitución Política se encuentra obligado a brindar protección a sus administrados, a saber:

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA PREAMBULO EL PUEBLO DE COLOMBIA,

*en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y **asegurar a sus***

⁹¹ Ver prueba 12

⁹² Ibidem

⁹³ Ibidem

⁹⁴ Ibidem

⁹⁵ Ibidem

⁹⁶ Ibidem

⁹⁷ Ibidem

⁹⁸ Ver Sentencia del Consejo de Estado. Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil dos (2002) Radicación número: 76001-23-31-000-1994-01010-01(13760) Actor: Efraín Hernández Ramírez Y Otros Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC- Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. Interpretación analógica extensiva aplicada.



integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

TITULO I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, **fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.**

Artículo 2. **Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.**

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Recordemos, además, que la Seguridad Personal es un derecho fundamental de todos los colombianos, que no hace alusión a la seguridad individual, sino a la seguridad pública, como un elemento de orden público, que debe entenderse desde tres dimensiones: la primera, como un **valor y una finalidad del Estado** que permea la totalidad del texto constitucional; la segunda como **un derecho colectivo**; y, la tercera como un **derecho individual**, derivado entre otras causales de las garantías previstas en la Carta Política contra los riesgos extraordinarios a los que se pueden ver sujetas las personas.

En este orden de ideas, tenemos que el derecho fundamental a la Seguridad Personal también fue conculcado por parte del Estado, y concretamente por las entidades demandadas, puesto que como se acreditó amplia y suficientemente en los **acápites del escrito de demanda el numeral 1.2. alusivo a la Legitimación en la causa por pasiva de las autoridades públicas demandadas, numeral 2. De la Fundamentación fáctica**, las entidades aquí demandadas pese a tener conocimiento de su obligación de proteger a las personas del Barrio Llano Verde, así como también que en dicho Barrio se requería otorgar efectiva protección, de conformidad con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no lo hicieron, y por su reiterativa omisión fue asesinado **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**.

Con esto en mente, este apoderado judicial, quiere enfatizar en el hecho de que pese a que la comunidad del Barrio Llano Verde le puso de presente su miedo, su dolor, su angustia a las autoridades públicas demandadas y le solicitaron protección antes de que el menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** fuese asesinado como copiosamente se encuentra acreditado en este escrito de demanda, la respuesta de tales entidades ondeó entre omisiva y cuando mucho insuficiente, de razón que la estadística de violaciones a los derechos humanos que el Estado



Colombiano debió proteger en el Barrio Llano Verde anega a borbotones sangre inocente y lágrimas de familiares que impotentes pierden a sus seres queridos.

Así mismo, es de resaltar en este punto que, aunque el daño antijurídico causado por terceros ajenos al Estado le es imputable a éste, por cuando el hecho del tercero, en el caso en concreto el homicidio del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** quien en vida se identificaba con el NUIP 1.028.186.826, el cual se perpetró el día once (11) agosto del año dos mil veinte (2020), sin que mediaran circunstancias para ello por parte del adolescente, fue facilitado por el mismo Estado, por haber omitido su deber de protección a la población de la comuna 15 de Cali / Valle del Cauca; concretamente el Barrio de Llano Verde, y por cuanto quién puntualmente le asesinó tenía vigente la medida de aseguramiento de prisión domiciliaria.

Ahora bien, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el régimen de responsabilidad subjetiva por daños causados en razón a la omisión del deber normativo de protección de los ciudadanos cuando el Estado tiene la Posición de garante es el de Falla en el Servicio.

Lo anterior, parte de que en un Estado Social Derecho como lo es el colombiano, de conformidad con el artículo primero de la Carta Magna, el Estado está obligado a brindar vigilancia y seguridad a sus administrados, se entendería que mínimamente esto se procura con equipos de comunicación y de video grabación en funcionamiento operativo, cosa que en Llano Verde como manifestó la Policía no se cumplió.

Precisamente, el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de febrero dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-26-000-2004-01061-01(34440) Actor: CARLOS GUILLERMO RUIZ LUNA Y OTROS Demandado: NACION - RAMA JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION, señaló:

*ACCION DE REPARACION DIRECTA - Falla del servicio por la omisión del deber normativo de protección de ciudadano y funcionario. Posición de garante / FALLA DEL SERVICIO - Omisión del deber normativo de protección de ciudadano y funcionario. Elementos para establecer la responsabilidad De acuerdo con la doctrina y el precedente jurisprudencial interamericano de Derechos Humanos (...) "... tratándose de hechos de terceros que no han actuado en connivencia con la fuerza pública, y, en los cuáles no hay un hecho imputable a un agente estatal, la jurisprudencia internacional estructura la responsabilidad sobre la base de que se reúnan dos elementos: **i) que el Estado incumpla con los deberes de diligencia que le son exigibles en la evitación de graves violaciones a los derechos humanos, y ii) que se trate de riesgos inminentes y cognoscibles. Es decir, que en esta estructura el fundamento de la responsabilidad no es objetivo y está basado en la ausencia de una prevención razonable a las graves violaciones a los derechos humanos. Por ende, si se presenta la violación a pesar de que el Estado ha adoptado medidas adecuadas, orientadas a impedir la vulneración, el hecho no le es imputable al Estado**". (...). Luego, no puede ofrecerse como única vía la aplicación de la posición de garante ya que cuando dicha violación se produce como consecuencia de la acción de "actores-no estatales", se exige determinar que la situación fáctica existió y que respecto a ella se concretaron tres elementos: "i) los instrumentos de prevención utilizados; ii) la calidad de la respuesta y iii) la reacción del Estado ante tal conducta", que en términos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se entiende como el estándar de diligencia exigible al Estado*

Recordemos que el Consejo de Estado vía jurisprudencial, en sendas ocasiones ha concluido que a quien le corresponde el cuidado y custodia de las personas que se encuentran privadas de la libertad con detención domiciliaria o bien en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios es al INPEC, veamos:

"(...) DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA - Del Ministerio de Defensa Nación Policía / FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA - Por evidenciarse



que la seguridad interna de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios es atribuida exclusivamente al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional

*Se considera que respecto a la Policía Nacional y el Teniente Humberto Vargas, no existe legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que el transcrito Código Penitenciario y Carcelario, atribuye en el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional la seguridad interna de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, exclusivamente, y la seguridad externa de dichos establecimientos, le corresponde a la Policía, y **como quiera que el deceso del privado de la libertad en la cárcel “La Picota”, se produjo en la celda por homicidio desplegado por su compañero, forzoso es concluir que a quien le correspondía el cuidado y custodia del señor Gaitán era al INPEC (...)**⁹⁹.*

Adicionalmente, debe considerarse severamente el hecho de que si el INPEC, hubiese atendido el llamado que le efectuó el Departamento del Valle del Cauca desde el año 2017, los cinco jóvenes que fueron vilmente asesinados el día once (11) agosto del año dos mil veinte (2020) en el cañaduzal, no hubiesen perdido ese día la vida a manos de “Alias el Mono”, como se pasa a reseñar:

“(...) Santiago de Cali, noviembre 10 de 2017. Durante la realización de la ‘Comisión de inspección y seguimiento al régimen penitenciario del Valle del Cauca’, la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento hizo un llamado al Inpec para que tome medidas necesarias con algunos internos que tienen casa por cárcel en el Valle del Cauca.

“Hemos sido enérgicos en pedirle al Inpec que haga un control y seguimiento a quienes están privados de la libertad con detención domiciliaria, porque ahí tenemos problemas de seguridad donde se requieren vigilancia sobre estos internos que tienen detención en su casa”, dijo, Noralba García, Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

*Palmira se ha visto afectado por las detenciones domiciliarias, la Alcaldía realizó operativos de verificación con la Policía Nacional. **“La directora de la penitenciaría entregó el listado y con base en este documento se hicieron alrededor de 30 revisiones y se encontraron, de esta muestra selectiva, que 15 personas que tienen esta medida no estaban en su casa y en otros casos no se encontraron las direcciones”, dijo, Carlos Zapata, Secretario de Seguridad de Palmira.***

El director regional del Inpec, Harvy Mosquera, aclaró que esta institución realiza las visitas a estas personas que tienen casa por cárcel de acuerdo a lo que establece la Ley, “Hoy tenemos un personal sindicado y condenado en domiciliaria, pero hay que decir que de acuerdo a la Ley 1709 la responsabilidad en primera instancia es del juez de ejecución de penas, el Inpec tiene como mandato hacer una vigilancia sin establecerse con qué periodicidad.

⁹⁹ Consejo de Estado. nr: 2077077 25000-23-26-000-2001-02834-01 30221 sentencia sustento normativo: codigo contencioso administrativo - articulo 129 / ley 446 de 1998 - articulo 37 / acuerdo 58 de 1999 - articulo 13 norma demandada: fecha: 03/03/2014 seccion : seccion tercera ponente : olga melida valle de de la hoz actor : consuelo franco marin y otros demandado : instituto nacional penitenciario y carcelariofalta



El funcionario agregó que “lo que hemos buscado es que también, como lo señala la ley, acompañarnos de la Policía Nacional, por eso hemos georreferenciado la ubicación de cada uno de estos domiciliarios para que los cuadrantes de la Policía puedan ayudarnos en la parte de la vigilancia”.

*En el informe de la 'Comisión de inspección y seguimiento al régimen penitenciario del Valle del Cauca' también se detalló que la Gobernación ha realizado visitas a los centros carcelarios del departamento llevando la oferta institucional en salud, educación, y la Unidad Ejecutora de Saneamiento. **Diego Fernando Lozano periodista Gobernación del Valle (...)**¹⁰⁰*

La postura adoptada por el INPEC respecto del llamado precitado, no es consonante con sus obligaciones constitucionales, legales e incluso misionales que le asisten, veamos:

“(...) se evidencia que el Estado, representado por el INPEC, tiene una posición de garante en relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, bajo su control y vigilancia y, además del deber de vigilarlos, tienen también el deber jurídico de evitar que se vean lesionados los bienes jurídicos que estas personas tienen a pesar de encontrarse en tal situación, donde ven reducida la posibilidad de defender por sí mismos dichos bienes jurídicos, es decir, se encuentran en una posición de vulnerabilidad.

*Es importante abordar tanto el concepto de relación de especial sujeción como el de posición de garante, toda vez que en virtud de estos conceptos, es que puede llegar a considerarse que existe responsabilidad de la administración cuando dichas personas cometen delitos estando bajo su control y vigilancia (...)*¹⁰¹

Todo lo cual evidencia que el resultado dañoso en comento constituía un riesgo inminente, cognoscible y previsible por parte de las Entidades públicas demandadas.

3.3.2.1.3. Los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo

Inicialmente, resulta imperativo resaltar que:

“(...) El Consejo de Estado, refirió en una de las sentencias analizadas, que existió una falla del servicio en cabeza del INPEC, toda vez que “es deber de los guardianes de los centros penitenciarios custodiar a los condenados o detenidos que salgan del establecimiento carcelario para trabajar y evitar violencias y evasiones, y en este caso, la entidad demandada no cumplió con este deber, toda vez que no ejercieron una custodia permanente al sindicado lo cual es impuesto por la norma como una obligación, siendo ello la razón para que se produjera el daño que hoy se alega en la demanda, debido a dos razones; la primera, que se permitió que

¹⁰⁰ Tomado de:
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/40019/llamado_al_inpec_para_que_realicen_controles_a_personas_con_detencion_domiciliaria/

¹⁰¹ Tomado de: Responsabilidad patrimonial y extracontractual del estado por delitos cometidos por personas privadas de la libertad que se encuentran en instituciones penitenciarias, carcelarias o en prisión domiciliaria y reclusos que tienen permisos de salida vigilada y controlada. Monografía para optar al título de Magister en Derecho. Por: María Camila Muñoz Marín. Asesor de Monografía: Gonzalo Andrés Pérez M. UNIVERSIDAD EAFIT. 2021



el preso cambiara de lugar de trabajo (porque el fallecimiento no se dio en el lugar que en principio fue autorizado para que el señor López Villalobos laborara) y, en segundo lugar, porque no contó con guardianes que lo vigilaran y protegieran”.

Lo anterior, se ha explicado pues de acuerdo con la jurisprudencia que ha venido planteando el Consejo de Estado, “el trabajo extramuros es una extensión del centro penitenciario” y de acuerdo a esto, debe el Estado garantizar un “estricto control de seguridad a los reclusos que trabajen fuera del establecimiento carcelario” (Consejo de Estado, C.P Andrade Rincón, 2016), lo cual, demuestra que el deber de control y vigilancia en cabeza del Estado, debe cumplirse por dentro y por fuera del centro penitenciario y carcelario, o el lugar donde el privado de la libertad esté cumpliendo su condena.

Así, se establece que el INPEC, como entidad estatal, tiene el deber de vigilar, controlar y proteger a los reclusos aun estando por fuera del penal ejerciendo sus labores, lo que demuestra que, eventualmente, podría configurarse una falla en el servicio, cuando uno de los privados de la libertad, no sea debidamente vigilado y cometa algún delito estando por fuera del penal con permiso para ejercer sus labores. (...) En suma, este estudio jurisprudencial, ha permitido evidenciar que el Consejo de Estado, ha sido enfático en cuanto a las causales de justificación en los casos de responsabilidad estatal en materia carcelaria, sobre lo cual, ha referido que cuando los internos cometen delitos, no puede prosperar la causal de justificación de hecho de un tercero, toda vez que el Estado también incurre en una omisión al permitir que el hecho suceda, por lo tanto, no es un hecho exclusivo de tercero, sino que ambos tienen responsabilidad, por lo tanto, no prospera al no contar con la característica de exclusividad (Consejo de Estado, Sentencia 15001-23-31-000- 1994-04365-01(16186), 23 de abril de 2008). Además, afirma el Consejo de Estado que no prospera tan justificación, pues existe entre los reclusos y la autoridad, una relación de especial sujeción (Consejo de Estado, Sentencia 19001-23-31-000-1997-05005-01(20587), 14 de abril de 2011). (...)

se evidencia que el Estado, representado por el INPEC, tiene una posición de garante en relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, bajo su control y vigilancia y, además del deber de vigilarlos, tienen también el deber jurídico de evitar que se vean lesionados los bienes jurídicos que estas personas tienen a pesar de encontrarse en tal situación, donde ven reducida la posibilidad de defender por sí mismos dichos bienes jurídicos, es decir, se encuentran en una posición de vulnerabilidad.

Es importante abordar tanto el concepto de relación de especial sujeción como el de posición de garante, toda vez que, en virtud de estos conceptos, es que puede llegar a considerarse que existe responsabilidad de la administración cuando dichas personas cometen delitos estando bajo su control y vigilancia (...)

Luego de analizar las sentencias aludidas, queda una gran inquietud sobre la forma en que es observado el problema de los delitos cometidos por las PPL en nuestra sociedad, que consiste en que la población colombiana no demanda al Estado por los delitos que cometen los presos, solo se observa el reproche frente a la responsabilidad del estado por el hecho de que alguien dentro de un instituto carcelario vea afectada su persona, o incluso cuando se ve afectado por fuera de la cárcel, un privado de la libertad.

Con esto se observa que se le da mayor relevancia al deber de custodia en cabeza del INPEC, que al de vigilancia, pues los reproches van en una dirección en la que solo se imputa responsabilidad si una



PPL ve afectada su humanidad, es decir, cuando se viola por parte de la entidad pública el deber de proteger estas personas, pero poco se observa que haya una reclamación y una condena, por el hecho de que una PPL haya cometido un delito que afecte a personas que se encuentren por fuera del penal, pasando desapercibida la vigilancia que debe haber sobre ellos desde del INPEC. (...)”¹⁰².

Así mismo, véase como concibe el Consejo de Estado la falla presunta del servicio al aterrizarla al caso concreto es absolutamente aplicable para imputar responsabilidad a las entidades públicas demandadas, como sigue:

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011)

Radicación número: 66001-23-31-000-1998-00496-01(22745)

Actor: LIGIA PEREZ VARGAS Y OTROS

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y OTRO

Referencia: APELACION SENTENCIA. REPARACION DIRECTA

“(…)

RELATIVIDAD DE LA FALLA DEL SERVICIO - Disponibilidad de medios físicos y jurídicos / RELATIVIDAD DE LA FALLA DEL SERVICIO - Previsibilidad del daño / RELATIVIDAD DE LA FALLA DEL SERVICIO - Circunstancias del caso concreto / FALLA RELATIVA DEL SERVICIO - Disponibilidad de medios físicos y jurídicos / FALLA RELATIVA DEL SERVICIO - Previsibilidad del daño / FALLA RELATIVA DEL SERVICIO - Circunstancias del caso concreto

También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2 inciso 2, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera, así, las obligaciones que están a cargo del Estado --y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión--, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

(…)”

¹⁰² Ibídem.



Dicho “aterrizaje” se fundamenta en que las autoridades demandadas no dispusieron de las facultades jurídicas, administrativas, económicas, estratégicas de que gozaban, para cumplir con su misión de protección a los demandantes, ni particularmente al adolescente **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, como se encuentra acreditado a referencia en los numerales 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4 y 1.2.5., **del acápite contenido en el numeral 1.2. alusivo a la Legitimación en la causa por pasiva de las autoridades públicas demandas**, así como también, a los numerales **2.2.6, 2.2.7, 2.2.17, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.23, 2.2.24, 2.2.26, 2.2.27, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.30, y 2.2.38 del acápite numeral 2. De la Fundamentación fáctica del presente escrito de demanda.**

Pese a que las entidades públicas demandas contaban con los recursos financieros y logísticos suficientes para efectuar dicha protección y procurar eficientemente evitar el resultado dañoso, fueron negligentes con los recursos destinados a brindar seguridad directa o indirectamente, prueba ostensible de ello se encuentra consignado a manera de ejemplo en los numerales **2.2.6, 2.2.7, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.20, 2.2.23, 2.2.24, 2.2.26, 2.2.27, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.30, y 2.2.38 del acápite número 2. De la Fundamentación fáctica de la demanda en comento**, así como también en los numerales **3.3.2.1.1.1, y 3.3.2.1.1.2.**, del presente escrito.

Por lo anterior, el daño es imputable a las entidades demandadas a título de falla del servicio, por la omisión en el cumplimiento del deber de vigilancia y protección que el Estado está obligado a prestar para asegurar la vida y seguridad de sus ciudadanos.

3.3.2.2. De la imputación de responsabilidad Objetiva del Estado

La razón de atribución para imputarle responsabilidad al Estado por los daños padecidos por la víctima principal y su grupo familiar, es que el Estado siendo conocedor de la cruenta violencia desatada en el Barrio Llano verde no tomó las medidas proporcionales, ni razonadas que hubiesen podido evitar que mi prohijado fuese asesinado¹⁰³ ¿Acaso el grupo familiar del adolescente **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** no pagaban impuestos?, ¿Acaso no pagaban impuestos los demás pobladores de Llano Verde? ¿Acaso el adolescente **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** asesinado vilmente el día once (11) de agosto de dos mil veinte (2020) no era Colombiano o bien, residente en este país?

¿Cómo puede la Defensoría del Pueblo emitir una alerta temprana en el año 2018 y no efectuar debido seguimiento para evitar que la vulneración de los derechos humanos se siga presentando en dicha zona?

¿De verdad era absolutamente imposible para el Estado militarizar la zona de Llano Verde antes de que se registrara la masacre de los cinco jóvenes, dentro de los cuales se encontraba **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**? ¿Acaso la normalización del miedo y la angustia en razón a la violencia padecida por los pobladores de Llano Verde está acorde con la política de Estado? ¿Acaso el Barrio Llano Verde de la Comuna 15 de Santiago de Cali debe continuar viendo diezmada su población de niños, niñas y adolescentes, porque esa es su realidad? ¿Acaso en el ordenamiento jurídico Colombiano hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, y de conformidad con dicha categorización el Estado Colombiano, enfila recursos humanos, financieros, logísticos, administrativos, y económicos?

¹⁰³ Sentencia SU353/20. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del propio precedente del Consejo de Estado en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por actos terroristas. Referencia: Expediente: T-7.532.245. Asunto: Acción de tutela interpuesta por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Magistrado: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020).



¿Acaso la entidad pública llamada a proteger la vida e integridad de los habitantes y residentes de Llano Verde para el día once (11) de agosto de dos mil veinte (2020) era individualmente considerada **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional, La Nación -Policía Nacional –PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, o bien la Defensoría del Pueblo?** ¿Acaso en la Constitución Nacional no establece que para dar cabal aplicación a sus obligaciones para con los asociados, las diferentes entidades públicas pueden efectivizar los principios de coordinación, cooperación, solidaridad y concurrencia? ¿Acaso era imposible que el **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y La Nación Colombiana – Rama Judicial**, efectivizaran la medida de privación de libertad del señor Gabriel Alejandro Bejarano, quien estaba condenado por el delito de Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, en razón a la providencia proferida por el juzgado 10 Penal del circuito de Santiago de Cali por más de 7 años, y disfrutando de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en la modalidad domiciliaria?

¿Acaso si el **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y La Nación Colombiana – Rama Judicial** hubiesen controlado que el señor Gabriel Alejandro Bejarano estuviese confinado en su domicilio o bien en un centro de reclusión para el día once (11) de agosto de dos mil veinte (2020), como era su obligación legal y misional, los cinco menores de edad, entre ellos **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** hubiesen sido igualmente ejecutados en el cañaduzal, el cual frecuentaban (Como tantos otros niños y adolescentes del Barrio Llano Verde) para darse un chapuzón, comer caña y elevar cometas?

Las respuestas a estas preguntas son de tal obviedad que, al menos para este apoderado judicial dejan un regusto amargo y llano dolor de patria, al poner en evidencia que, respecto a los demandantes acaeció un daño antijurídico en el mismo instante en el cual el menor de edad fue asesinado, que el *vínculo causal como un rompimiento del principio de igualdad, fue la omisión de protección al menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)*** y en general a los pobladores y residentes del Barrio Llano Verde, por parte de la **Rama Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y La Nación Colombiana –**, es decir, por parte del estado colombiano), quien faltó a su deber constitucional de garante del derecho fundamental a la vida.

A la **Rama Judicial** se le atribuye responsabilidad por el hecho de que siendo conocedora de que, en más de una ocasión, que el señor Gabriel Alejandro Bejarano burló la medida privativa de la libertad en la modalidad domiciliaria, adoptó una postura omisiva, la cual, permitió que un grave delincuente estuviese disfrutando de libertad, aunque tenía una condena judicial impuesta por un juez de la República, inobservando lo estipulado en el artículo 5° de la Ley 1709 de 2014 previamente citada.

A la par, **al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC** se le atribuye responsabilidad en la consumación del hecho dañoso, porque siendo conocedora de que, en más de una ocasión, que el señor Gabriel Alejandro Bejarano burló la medida privativa de la libertad en la modalidad domiciliaria, adoptó una postura omisiva ante tal evasión, no realizó la labor de vigilancia y custodia que las condiciones exigían con lo cual, permitió que un grave delincuente estuviese disfrutando de libertad, aunque tenía una condena judicial impuesta por un juez de la República, contrariando abiertamente lo estipulado en los artículos 14 y 140 de la Ley 65 de 1993 anteriormente referida.

Ahora bien, respecto a la legitimación por pasiva que se irrostra en el presente medio de control de reparación directa tenemos:



“(…) ¿El Estado puede ser administrativa y extracontractualmente responsable por los delitos cometidos por personas privadas de la libertad que se encuentran en prisión domiciliaria?”

Para responder esta pregunta, lo primero debe ser analizar si la naturaleza de la prisión domiciliaria, es diferente a la pena privativa de la libertad en institutos carcelarios.

Frente a esto, la Corte Constitucional, el 8 de noviembre de 2000, dijo lo siguiente:

A la luz de la Constitución, el legislador goza de facultad para establecer modalidades o formas de privación de la libertad, bien a título preventivo, ya bajo condena, y le es posible, mientras no afecte los derechos fundamentales de quienes son sometidos a la medida o a la pena, prever la concesión de beneficios o tratos especiales en cuanto al lugar de reclusión, los cuales deben ser razonables y hallarse fundados en motivos que no lesionen el principio de igualdad.

Entre tales beneficios se encuentran precisamente la detención domiciliaria y la detención parcial en el lugar de trabajo. Las personas que se acogen a las reglas correspondientes también están, desde el punto de vista jurídico, privadas de la libertad, y no puede entenderse que pierdan ese carácter por el hecho de que el lugar de la detención no sea el edificio en que funciona el establecimiento carcelario sino su domicilio o el sitio de trabajo.

(…)

La Corte comparte en ese punto el concepto del Procurador General de la Nación en el sentido de que dichas expresiones, dentro de una hermenéutica acorde con la igualdad y relacionada con el objetivo mismo de la norma, comprenden también el domicilio o lugar de trabajo para quienes haya operado la detención domiciliaria o la detención parcial, pues de otra forma se estaría dando un trato desigual a hipótesis que son en realidad las mismas. (…)

RESUELVE:

Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones "centro de reclusión", contenidas en los artículos 80 y 81 de la Ley 65 de 1993, bajo el entendido de que ellas comprenden también los casos de detención domiciliaria o de detención parcial en el lugar de trabajo (...) (Sentencia C-1510-00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo)

De lo afirmado en la sentencia anterior, puede inferirse que, si bien la prisión domiciliaria se otorga como un beneficio, su naturaleza, respecto de la pena privativa que se cumpla en una prisión, sigue siendo la misma, pues cumple igual función, es decir, ambas sirven para la privación de la libertad. Por otra parte, tenemos una fuente legal, que es la Ley 65 de 1993, por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. Éste, en su artículo 29-A, nos informa lo siguiente:

ARTÍCULO 29-A. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA. Ejecutoriada la sentencia que impone la pena de prisión y dispuesta su sustitución por prisión domiciliaria por el juez competente, este enviará copia de la misma al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien señalará, dentro de su jurisdicción, el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y adoptará entre otras las siguientes medidas:

1. Visitas aleatorias de control a la residencia del penado.

(6) 3211812 -(+57) 3174364677-(+57) 3014549829 www.legalgroup.co

Pereira - Risaralda Cra 12 bis #8- 45 Sector Circunvalar.

Bogotá • Cartagena • Medellín • Cali • Tuluá • Santander de Quilichao • Barranquilla • New York



2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas.
 3. Testimonio de vecinos y allegados.
 4. Labores de inteligencia. ... (Subrayas fuera de texto original)
- Esta idea, es respaldada por una de las sentencias que ya se analizó en este escrito, que es la sentencia con radicado 05001-23-24-000-1993-0288-01, la cual expuso:

(...) que el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tenía entre otras funciones, de acuerdo con la ley 32 de 1986, la de velar por la seguridad de los ESTABLECIMIENTOS carcelarios, expresión que comprende materialmente todo el conjunto de personas y bienes organizados para realizar los fines de vigilancia y seguridad de las personas reclusas en los centros carcelarios (...) (Sentencia expediente N°13.818, 2002)

De las anteriores citas, se tiene que, las personas que sean privadas de la libertad en su domicilio, estarán bajo la vigilancia de un establecimiento de reclusión, y será el personal del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, el encargado de VIGILAR al privado de la libertad, y desplegar acciones para garantizar el cumplimiento de la pena, y también, para garantizar el cumplimiento de sus funciones como entidad de custodia y vigilancia. (...)

En ese sentido, en vista de que en este caso también se cumplen los requisitos de posición de garante del Estado frente al privado de la libertad que se encuentra cumpliendo la pena en su domicilio, que existe relación de especial sujeción entre el privado de la libertad y el INPEC, que el Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, tiene, entre otros, el deber de vigilar las actuaciones de dichas personas, podría entenderse entonces, que, en el caso en que un privado de la libertad que se encuentre cumpliendo la pena o la medida de seguridad en su domicilio, cometa un delito, podría haber responsabilidad del Estado. (...)”¹⁰⁴

De ahí que, el daño antijurídico infligido a los demandantes fue de una entidad *especial y grave*, que conculcó **el principio de solidaridad, igualdad de armas, y la violación a las cargas públicas** por la gran connotación de antijurídico del daño ocasionado a los demandantes, consecuencia de lo cual son merecedoras del correspondiente resarcimiento.

Además, debe tenerse en cuenta que los Estados no pueden dejar de cumplir sus obligaciones adquiridas respecto a los derechos humanos de sus administrados, porque la responsabilidad internacional puede configurarse en los casos de ausencia de intencionalidad y de que sean o no consecuencia de una política estatal deliberada¹⁰⁵

Obligaciones adquiridas por ejemplo en la Convención Americana, de ahí que el Estado Colombiano, y concretamente las entidades públicas hoy demandadas tenían la obligación de garantizar y proteger los derechos humanos del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, constituyéndose la dimensión vertical, y también la obligación horizontal: por cuanto, las obligaciones erga omnes de

¹⁰⁴ Tomado de: Responsabilidad patrimonial y extracontractual del estado por delitos cometidos por personas privadas de la libertad que se encuentran en instituciones penitenciarias, carcelarias o en prisión domiciliaria y reclusos que tienen permisos de salida vigilada y controlada. Monografía para optar al título de Magíster en Derecho. Por: María Camila Muñoz Marín. Asesor de Monografía: Gonzalo Andrés Pérez M. UNIVERSIDAD EAFIT. 2021

¹⁰⁵ Medina Ardila, 2009



protección, en una dimensión horizontal, hacen alusión a las obligaciones atinentes a la protección de los seres humanos debidas a la comunidad de Llano Verde.

Así pues, concluyo este capítulo solicitando que, en virtud del principio IURA NOVIT CURIA, sea el honorable Fallador quien, con la aplicación correcta del régimen de responsabilidad y la valoración probatoria proceda a determinar la responsabilidad administrativa y patrimonial, que lleve a la consecuente indemnización de los demandantes.

4. Declaraciones y condenas

Las pretensiones que se buscan precaver en esta oportunidad, son las siguientes:

4.1. **DECLÁRESE** que **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional –PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** son administrativa, patrimonial, solidaria y extracontractualmente responsables por el daño antijurídico, así como de los consecuentes perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes con ocasión de la muerte del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, quien se identificaba con el NUIP 1.028.186.826, quien fue asesinado el día once (11) agosto del año dos mil veinte (2020).

4.2. Como consecuencia de la anterior declaración, **CONDÉNESE** a **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional –PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** al pago de los siguientes perjuicios:

4.2.1. Por concepto de perjuicios morales:

Nombre	Calidad frente a la víctima	Valor solicitado
JOHANA CÁRDENAS HURTADO	Madre	200 SMLMV
BRAYAN CÁRDENAS HURTADO	Hermano	100 SMLMV
YARI CAMILA CARDENAS HURTADO	Hermana	100 SMLMV
MAROLYN TATIANA CÁRDENAS HURTADO	Hermana	100 SMLMV
VICTOR ALFONSO CÁRDENAS HURTADO	Hermano	100 SMLMV
DARWIN CAMILO CÁRDENAS HURTADO	Hermano	100 SMLMV
FRANCIA ELENA CÁRDENAS HURTADO	Tía	70 SMMLV
YEISON CÁRDENAS HURTADO	Tío	70 SMLMV
LUIS EDUARDO CÁRDENAS HURTADO	Tío	70 SMMLV
MARTHA HURTADO CÁRDENAS	Abuela	70 SMLMV

***El salario mínimo aplicable será el fijado para la anualidad en la que quede en firme la sentencia que ponga fin al proceso o la suscripción del acuerdo conciliatorio. ***



4.2.2. Por concepto de daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

A título de reparación integral solicito que **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional –PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial:**

- i) Publique un extracto de la sentencia condenatoria en un diario de amplia circulación nacional.
- ii) Publique la sentencia condenatoria en su página web o sitio oficial.
- iii) Realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad dentro de los hechos en que se produjo la muerte del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, quien se identificaba con el NUIP 1.028.186.826.
- iv) Pidan excusas públicas tanto a nivel Nacional, departamental como municipal por los hechos ocurridos el pasado 11 de agosto de 2020.
- v) Con lo anterior, se busca honrar la tragedia ocasionada al menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, quien se identificaba con el NUIP 1.028.186.826, brindar garantías de una vida íntegra y normal a su grupo familiar, generar un estado de reconciliación por parte de sus familiares y las entidades demandadas; así como buscar medidas de no repetición con la población.

No obstante, teniendo en cuenta que, las medidas solicitadas no son suficientes para reparar de forma integral el grupo familiar demandante y en el entendido que existe la obligación de indemnizar los daños inmateriales por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados de manera separada, al constituirse en una nueva categoría de perjuicios, solicito reconocer y pagar este perjuicio así:

Nombre	Calidad frente a la víctima	Valor solicitado
JOHANA CÁRDENAS HURTADO	Madre	200 SMLMV
BRAYAN CÁRDENAS HURTADO	Hermano	100 SMLMV
YARI CAMILA CARDENAS HURTADO	Hermana	100 SMLMV
MAROLYN TATIANA CÁRDENAS HURTADO	Hermana	100 SMLMV
VICTOR ALFONSO CÁRDENAS HURTADO	Hermano	100 SMLMV
DARWIN CAMILO CÁRDENAS HURTADO	Hermano	100 SMLMV
FRANCIA ELENA CÁRDENAS HURTADO	Tía	70 SMMLV
YEISON CÁRDENAS HURTADO	Tío	70 SMLMV
LUIS EDUARDO CÁRDENAS HURTADO	Tío	70 SMMLV
MARTHA HURTADO CÁRDENAS	Abuela	70 SMLMV



4.2.3. Por concepto de daños a la salud.

Condenar a **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional –PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** a reconocer y pagar, como daño autónomo e independiente, a favor de:

Nombre	Calidad frente a la víctima	Valor solicitado
JOHANA CÁRDENAS HURTADO	Madre	200 SMLMV
BRAYAN CÁRDENAS HURTADO	Hermano	100 SMLMV
YARI CAMILA CARDENAS HURTADO	Hermana	100 SMLMV
MAROLYN TATIANA CÁRDENAS HURTADO	Hermana	100 SMLMV
VICTOR ALFONSO CÁRDENAS HURTADO	Hermano	100 SMLMV
DARWIN CAMILO CÁRDENAS HURTADO	Hermano	100 SMLMV
FRANCIA ELENA CÁRDENAS HURTADO	Tía	70 SMMLV
YEISON CÁRDENAS HURTADO	Tío	70 SMLMV
LUIS EDUARDO CÁRDENAS HURTADO	Tío	70 SMMLV
MARTHA HURTADO CÁRDENAS	Abuela	70 SMMLV

4.3. Que se condene a **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional –PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** al pago de los intereses de las sumas líquidas de dinero determinadas en la decisión que ponga fin al proceso y que se generen a partir de la fecha de la sentencia o del auto aprobatorio de la conciliación judicial, según sea el caso, pagaderos a los demandantes o a quien o quienes sus derechos representaren en el momento del fallo.

4.4. Según el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, condénese Que se condene a **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional –PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** a cancelar las costas y agencias en derecho correspondientes en los términos del artículo 361 del Código General del Proceso.

4.5. Ordenar a que se condene a **La Nación Colombiana – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional –PONAL, el Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** dar cumplimiento a la sentencia dentro de los 10 meses siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con el inciso 2. ° del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



5. Pruebas y solicitudes probatorias

5.1. Documentales

Se aportan formato digital –PDF-, las siguientes:

- Prueba 1:** Copia de los documentos de identificación
- Prueba 2:** Copia de registros civiles de nacimiento
- Prueba 3:** Copia del informe de necropsia. Instituto Nacional de Medicina Legal
- Prueba 4:** Copia de Informe Final MIRA: Municipio Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Comunas 9, 15, 18 y 21, producto del estudio realizado del 23/09/2014 al 29/09/2014
- Prueba 5:** Copia de sentencia condenatoria contra Yefferson Marcial
- Prueba 6:** Copia de acta de lectura de sentencia condenatoria contra Yefferson Marcial
- Prueba 7:** Copia de sentencia condenatoria contra Juan Carlos Loaiza
- Prueba 8:** Copia de preacuerdo suscrito por Juan Carlos Loaiza con la FGN
- Prueba 9:** Relación de links de hechos noticiosos
- Prueba 10:** Copia de fotografías evidenciando la familiaridad y cercanía del grupo demandante con la víctima directa.
- Prueba 11:** Copia del Gmail de fecha 22 de enero de 2021 enviado a LegalGroup y otros por parte de la Fiscalía General de la Nación anexando todas las carpetas y documentación relacionada en el escrito de acusación para el caso denominado Llano Verde.
- Prueba 12:** Copia de la carpeta de Juan Carlos Loaiza
- Prueba 13:** Copia de la carpeta de Marcial Angulo.
- Prueba 14:** Copia de documentos de adición al escrito de acusación
- Prueba 15:** Copia de documentos matriz 1. Anexo del Gmail de fecha 22 de enero de 2021 enviado a LegalGroup y otros por parte de la Fiscalía General de la Nación
- Prueba 16:** Copia de documentos matriz 2. Anexo del Gmail de fecha 22 de enero de 2021 enviado a LegalGroup y otros por parte de la Fiscalía General de la Nación
- Prueba 17:** Copia de NOTA DE SEGUIMIENTO N° 027-15¹⁰⁶ Primera al Informe de Riesgo N° 002-14 Emitido el 4 de febrero de 2014 Fecha: 3 de diciembre de 2015 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO emitida por la Defensoría del Pueblo.

¹⁰⁶ FORMATO NOTA DE SEGUIMIENTO Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos De Violaciones de Derechos Humanos y DIH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS – SAT. Tomada la información el día 17 de febrero de 2020 de la dirección electrónica: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/NS-N%C2%B0-027-15-a-IR-N%C2%B0-002-14-Cali-VAL.pdf>



Prueba 18: Copia de respuesta a derecho de petición emitida por la Defensoría del Pueblo, radicado: 20200060342255681 de 31 de Agosto de 2020.

Prueba 19: Copia de respuesta a derecho de petición emitida por el INPEC el día 03 de septiembre de 2020.

5.2. Pruebas que se solicitarán:

5.2.1. Testimoniales

Se solicitará citar a las siguientes personas, para que expongan todo aquello que les conste frente a los hechos de la demanda, y los perjuicios ocasionados al grupo familiar de **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**.

NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	DIRECCIÓN DE UBICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
Yaneli Cuero Valencia	1.087.111.751	3173228422	Calle 73B- carrera 26P 73A-88 Cali valle	Cueroyaneli34@gmail.com
Yesenia Rodriguez Riascos	31.588.521	3145064179	calle 123Dcarrera 28E1 Cali, valle	yr440055@Gmail com
Jackeline Yolanda Quiñonez Ordoñez	27.328.314	3106229457	Carrera 47d # 56e 04 barrio llano verde	jackelineq82@gmail.com

- Indicarán si conocían al menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)**, así como a su núcleo familiar y desde hace cuánto tiempo.
- Indicarán cómo eran las relaciones del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** con su madre, hermanos, tíos y abuela.
- Señalarán, cuáles fueron las consecuencias físicas, psíquicas, afectivas, sociales y económicas del deceso del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** para con su madre, hermanos, tíos y abuela.
- Se les interrogará por la materialización de todos los daños y perjuicios por los cuales se solicita indemnización.
- En general expondrá todo lo que les concierne respecto a los hechos de la demanda.

Además de la plataforma dispuesta para el efecto, tanto a las pruebas como a los anexos correspondientes a los acápites 6 y 10 de la presente demanda se puede acceder a través del siguiente Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1s_NXHQ3kTnw47oifayulxaJC2stKirUA



6. Estimación razonada de cuantía

El numeral 6° del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-, establece como requisito formal para demandar, que, en dicho escrito, se relacione la exposición razonada y discriminada de la cuantía. Para efectos de esta demanda se estima la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000) MCTE** teniendo en cuenta que ella corresponde a la mayor pretensión relacionada en la presente demanda, sin que se limite la misma, tal como lo expone el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.

7. De la caducidad

Al tenor de lo previsto en el numeral 2° literal i. del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.

En el caso concreto, el suceso objeto de la presente demanda de reparación directa, esto es, el homicidio del menor de edad **Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.)** fue perpetrado el día once (11) de agosto de dos mil veinte (2020); por lo que inicialmente la caducidad operaría el día doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022). Sin embargo, dicho interregno se suspendió¹⁰⁷ el día nueve (09) de agosto de la presente anualidad con la presentación de la respectiva solicitud de conciliación como requisito de procedibilidad contemplado en el artículo 161 de la ley 1437 de 2011, faltando tres (03) días para que operara el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción respecto de los hechos que dan origen a la presente demanda.

La Procuraduría 85 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C., una vez revisados los requisitos del Decreto 1069 de 2015 fijó como fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial para el día **veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022) a las 10:00 am**

Efectivamente, el día **veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022) a las 10:00 am** se llevó a cabo la respectiva audiencia de conciliación ante la Procuraduría 85 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C., Por ende, dicho término se reanudó el día **veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)** al día hábil siguiente de proferirse la constancia de no conciliación.

En consecuencia, dado que la demanda de reparación directa se presentó el día **veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)**, se concluye que en el presente asunto no ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad y, por ende, nos encontramos en término para realizar presentar la presente demanda de reparación directa.

8. Competencia

Para la determinación de la competencia en el presente caso, obsérvese las siguientes consideraciones:

Por el factor de la cuantía, el artículo 157 del CPACA- y el numeral 6° ibídem, indican:

¹⁰⁷ Al respecto, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 señala: "Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 20. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable".



“Artículo 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. [...]

“Artículo 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (...) 6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia...”

Además, el artículo 155 ibídem en su numeral 6 dispone:

“[...] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes [...]

En lo que tiene que ver con el factor territorial, el artículo 156 –CPACA- en el numeral 6° dispone:

“[...] 6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante [...]” (se destaca)

De conformidad con lo anterior, en atención a lo establecido en artículo 156 numeral 6° relacionado ad supra, se tiene a elección de los demandantes como lugar de presentación de la presente demanda, la ciudad de Bogotá- D.C., toda vez que, este es el domicilio/ sede principal de La Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional – PONAL, así como de otras de las entidades demandadas; asimismo, teniendo en cuenta que la cuantía no excede de los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que corresponde a los señores Jueces Administrativos de Bogotá, D.C., Cundinamarca (Reparto) conocer del presente asunto.

9. Notificaciones

De conformidad con lo consagrado en el numeral 7 del artículo 162 del CPACA¹⁰⁸, así como el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, informo al Despacho que, las direcciones físicas y electrónicas que se citan a continuación, son las designadas por las respectivas entidades para recibir las notificaciones judiciales de acuerdo con lo publicado en sus páginas web, así como las proporcionadas por los demandantes:

9.1. Las entidades demandadas:

9.1.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional:

Representada legalmente por el señor Ministro de Defensa Nacional, Dr. Iván Velásquez Gómez ¹⁰⁹ o quien haga sus veces, recibirá notificaciones en los siguientes apartados:

¹⁰⁸ Modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.

¹⁰⁹ Nombrado a través del Decreto 1697 del 16 de agosto de 2022



Dirección: Carrera 54 N° 26 – 25 CAN, Bogotá - Colombia
Teléfonos: PBX (57-601) 315 0111
E-mail: Notificaciones.prejudiciales@mindefensa.gov.co
Notificaciones.Cali@mindefensa.gov.co
deval.notificacion@policia.gov.co

La información que antecede fue extraída el día 16 de febrero de 2022 de las siguientes páginas electrónicas institucionales:

[https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido?NavigationTarget=n](https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido?NavigationTarget=navurl://9e7a56c80ff567568fd6ad9864770872)
[avurl://9e7a56c80ff567568fd6ad9864770872](https://www.policia.gov.co/normatividad-juridica/notificaciones-electronicas)
<https://www.policia.gov.co/normatividad-juridica/notificaciones-electronicas>

9.1.2. Distrito de Santiago Cali / Valle del Cauca

Representada legalmente por el señor Jorge Iván Ospina¹¹⁰ o quien haga sus veces, recibirá notificaciones en los siguientes apartados:

Dirección: Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70, Santiago de Cali - Valle del Cauca - Colombia.
Teléfonos: 195 - (60+2) 887 9020 - 01 8000 222 195
E-mail: notificacionesjudiciales@cali.gov.co

La información que antecede fue extraída el día 16 de febrero de 2022 de la siguiente página electrónica institucional:

[https://www.cali.gov.co/juridica/publicaciones/47110/las_notificaciones_judiciales_s](https://www.cali.gov.co/juridica/publicaciones/47110/las_notificaciones_judiciales_se_realizan_va_electrnica/)
[e_realizan_va_electrnica/](https://www.cali.gov.co/juridica/publicaciones/47110/las_notificaciones_judiciales_se_realizan_va_electrnica/)

9.1.3. Defensoría del Pueblo

Representada legalmente por el señor Carlos Camargo Assis¹¹¹ o quien haga sus veces, recibirá notificaciones en los siguientes apartados:

Dirección: Calle 55 No. 10-32 Bogotá - Colombia
Teléfonos: PBX: (57) (1) 314 73 00 - línea gratuita 018000914814
E-mail: juridica@defensoria.gov.co

La información que antecede fue extraída el día 16 de febrero de 2022 de la siguiente página electrónica institucional:

<https://www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/6595>

9.1.4. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

Representada legalmente por el Brigadier General Tito Yesid Castellanos Tuay¹¹² o quien haga sus veces, recibirá notificaciones en los siguientes apartados:

Dirección: Calle 26 No. 27-48 Bogotá - Colombia
Teléfonos: (+57) 601 2347474 Bogotá - Colombia
E-mail: notificaciones@inpec.gov.co

La información que antecede fue extraída el día 29 de julio de 2022 de la siguiente página electrónica institucional: <https://www.inpec.gov.co>

¹¹⁰ Tomado el 02 de agosto de 2022 de la dirección electrónica <https://www.defensoria.gov.co/es/public/Defensor/432/Perfil.htm>

¹¹¹ Nombrado a través del Decreto 134 del 06 de febrero de 2021

¹¹² Nombrado a través del Decreto 358 del 06 11 marzo de 2022



9.1.5. La Nación Colombiana – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Representada legalmente por la señora Naslly Raquel Ramos Camacho¹¹³ o quien haga sus veces, recibirá notificaciones en los siguientes apartados:

Dirección: Calle 12 No. 7 - 65 Bogotá Colombia
Teléfonos: +57 (4) - 2328525 Ext. 1121, 1102, 1138, 1106, 1109, 1105
E-mail: deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

La información que antecede fue extraída el día 29 de julio de 2022 de la siguiente página electrónica institucional: <https://www.ramajudicial.gov.co/>

9.2. El grupo demandante y el apoderado:

9.2.1. De los demandantes

En atención a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021 se indica como lugar y dirección de notificación de accionantes los siguientes apartados:

Dirección: Carrera 46c #56i-15 Llano Verde / Cali / Valle del Cauca.
Celular: 3163056214
E-mail: johana.hurtado553@gmail.com

9.2.2. La sociedad apoderada

La sociedad **LEGALGROUP** Especialistas en Derecho SAS. persona jurídica apoderado de los accionantes en el presente proceso, recibirá notificaciones en los siguientes apartados:

Dirección: Carrera 12B # 8-45 Sector Circunvalar (Pereira - Rda).
Teléfonos: (6) 3211812 - 3174364677-3014549829
Correo electrónico: notificaciones@legalgroup.com.co

La dirección de correo electrónico señalada, es la registrada por la persona jurídica que represento como dirección para notificaciones judiciales en el certificado de existencia y representación legal, igualmente esta dirección se encuentra inscrita en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, como correo electrónico del suscrito apoderado.

10. Anexos

Anexo 1: Poderes para actuar.

Anexo 2: Certificado de existencia y representación legal de **LEGALGROUP** Especialistas en Derecho S.A.S.

Anexo 3: Constancia de notificación de la solicitud de conciliación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.

Anexo 4: Certificado expedido por la directora de la Unidad de Registro Nacional

¹¹³ Información tomada de la dirección electrónica institucional: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/judicatura-elige-nueva-directora-ejecutiva-de-administracion-judicial-de-la-rama-judicial>



de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura que refleja la dirección de correo electrónica registrada ante el –SIRNA-

- Anexo 5:** Acta de audiencia de conciliación surtida ante la Procuraduría 85 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C.
- Anexo 6:** Constancia de no acuerdo de conciliación proferida por la Procuraduría 85 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C.
- Anexo 7:** Constancia de envío de la demanda y de sus anexos para surtir el traslado a las partes y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Atentamente,

JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA

Cédula de ciudadanía 1.116.238.813

Tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura

Representante legal de **LEGALGROUP** especialistas en derecho S.A.S

Proyectó: D.M.M.L. - Vo. Bo. AIGP